



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Filosofía y Letras
Colegio de Historia

**La Influencia y la Ayuda Norteamericana durante
la Guerra Civil Salvadoreña (1981-1992)**

Tesis

Para Obtener el Título de:
Licenciado en Historia

Presenta:
Eduardo Antonio Arellano Dehesa

Asesor: **Dr. Ignacio Sosa Álvarez**



México D.F, 2013



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

A mis padres, Antonio y Cristina, por su inmensa paciencia, pero sobretodo por su amor y cariño incondicional.

Para todas aquellas personas que de un modo u otro han influido en la persona que soy.

Un agradecimiento especial para mi asesor, Ignacio Sosa, ya que, sin él este trabajo nunca hubiera sido posible.

Hacemos la guerra para conquistar la paz.

FMLN

El pueblo debe estar alerta y vigilante. No debe dejarse provocar, ni dejarse masacrar, pero también debe defender sus conquistas. Debe defender el derecho a construir con su esfuerzo una vida digna y mejor.

Salvador Allende

Ser joven y no ser revolucionario, es una contradicción hasta biológica.

Salvador Allende

Índice

- **Introducción**
- **Capítulo 1 EL GOBIERNO DEL PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO (PDC): EL EQUILIBRIO IMPOSIBLE**
 - **1.1 El Golpe de Estado de 1979: Un Intento por Componer la Situación y la Irrupción de los Moderados en el Gobierno Salvadoreño**
 - **1.1.1 La victoria sandinista y el golpe de estado de 1979**
 - **1.1.2 El golpe de estado del 15 de octubre de 1979**
 - **1.2 Un intento por componer el rumbo: La Primera Junta Cívico-Militar**
 - **1.3 Segunda Junta: La Junta Democristiana**
 - **1.4 La Ofensiva final de 1981**
 - **1.5 La Guerra Civil (1981-1992)**
 - **1.5.1 La elección presidencial de 1984**
 - **1.6 El Gobierno del Partido Demócrata Cristiano (PDC)**
 - **1.7 Las Elecciones de 1988-1989: La Expulsión del PDC del Gobierno**
- **Capítulo 2 LA VISIÓN DEL FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL-FRENTE DEMOCRÁTICO REVOLUCIONARIO (FMLN-FDR)**
 - **2.1 Los Sectores Populares después de la Salida del Poder del PCN**
 - **2.2 La Primera Junta de Gobierno Cívico Militar**
 - **2.3 La Segunda Junta de Gobierno Demócrata Cristiana**
 - **2.4 La Ofensiva Final de 1981: Un Intento por Establecer el Socialismo**
 - **2.5 La Última Solución: La Guerra Civil (1981-1992)**
 - **2.5.1 La elección presidencial de 1984**
 - **2.6 El FMLN-FDR Frente al Gobierno del Partido Demócrata Cristiano**
 - **2.6.1 Las elecciones de 1988-1989**
 - **2.7 Los Oligarcas en el Poder: El Gobierno de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)**
 - **2.7.1 La ofensiva de 1989: Un nuevo intento de tomar el poder**
- **Capítulo 3 LA OLIGARQUÍA Y SU LENTA TRANSFORMACIÓN DEMOCRÁTICA**
 - **3.1 Los Oligarcas y los Militares en el Gobierno. La Crisis se Agrava: La Década de los Setenta**
 - **3.1.1 El gobierno del coronel Arturo Armando Molina (1972-1977)**
 - **3.1.2 La elección presidencial de 1977**
 - **3.2 La Crisis se Desborda: El Gobierno del General Carlos Humberto Romero (1977-1979)**
 - **3.2.1 La Ley de Defensa y Garantía del Orden Público**
 - **3.2.2 Año 1979: La crisis se desborda**
 - **3.3 La Expulsión de los Oligarquía del Gobierno: La 1era. Junta de Gobierno Cívico-Militar**

- **3.4** La Segunda Junta de Gobierno: Junta Democristiana
- **3.5** La Guerra Civil (1981-1992)
 - **3.5.1** Elecciones para la Asamblea Constituyente
- **3.6** La Elección Presidencial de 1984: Un Duro Golpe para la Oligarquía
- **3.7** El Gobierno de la Democracia Cristiana: Cambiar para Sobrevivir
- **3.8** Las Elecciones de 1988-1989
- **3.9** El Gobierno de ARENA: ¿Una Posible Solución?
 - **3.9.1** La Ofensiva de 1989
 - **3.10** Los Diálogos de Paz: Una Verdadera Solución
- **Conclusiones**
- **Bibliografía**

INTRODUCCIÓN

Las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina han sido conflictivas. Dicha relación se remonta a 1823, cuando los Estados Unidos, mediante la promulgación de la Doctrina Monroe, declararon, unilateralmente, que el continente pertenecía a su zona de influencia y no permitirían que las potencias europeas intervinieran en el área. Durante el siglo XIX se registraron algunos conflictos esporádicos, el primer periodo de interacción intenso se inició en los últimos años de ese siglo y se prolongó hasta la gran depresión de 1929. Durante ese periodo las consideraciones sobre seguridad fueron muy importantes, sobre todo en lo concerniente a las rutas marítimas del Caribe. La ocupación militar de diversos países del Caribe y Centroamérica (como Cuba, Haití, República Dominicana y Nicaragua), la intervención en México y la secesión del Canal de Panamá se justificaron, por lo menos en parte, por razones políticas y de seguridad. Dicho comportamiento se reforzó con lo declarado en el Corolario Roosevelt en el que, los Estados Unidos, se reservan el derecho de intervenir en cualquier país del área si consideran que sus intereses o sus ciudadanos se encontraban en peligro. Otra forma de la intervención norteamericana en América Latina fue el establecimiento de lazos comerciales, inversiones en diversos ámbitos (agroexportación, petróleo, comunicaciones, minería, etcétera). Incluso, impusieron la obligación a algunos países para que aceptaran préstamos bancarios a tasas elevadas para comprometer sus finanzas con Washington.

Al estallar la gran depresión las relaciones económicas y políticas sufrieron un giro radical. Bajo las presidencias de Herbert Hoover y Franklin D. Roosevelt, las tropas estadounidenses fueron desalojadas unilateralmente de los países intervenidos (aunque en el caso nicaragüense casi fueron expulsados por Sandino) y se renunció a la intervención norteamericana unilateral en el Hemisferio. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el interés de Estados Unidos por América Latina fue escaso debido a que los norteamericanos se encontraban preocupados por el inicio de la Guerra Fría y la reconstrucción de Europa y Japón.

El panorama cambió en los años sesenta, cuando la Guerra Fría llegó a América Latina. La victoria de Fidel Castro en Cuba y la instauración de un régimen comunista en la isla provocaron la animadversión norteamericana; para contrarrestar a la Cuba de Castro, se lanzó la Alianza para el Progreso, en ella se prometió suministrar 20 000 millones de dólares durante el decenio para estimular el desarrollo económico. A cambio, se esperaba que los latinoamericanos emprendieran reformas sociales que abarcaran desde la redistribución de la tierra hasta el acceso masivo a la educación. La asistencia militar para la creación de un “ambiente estable” también formaba parte de la iniciativa. La Alianza se inició con gran entusiasmo, pero no respondió ni siquiera remotamente a las expectativas. Los fondos que se entregaron fueron mucho menores de los prometidos, y las reformas se abandonaron. Luego de que Lyndon Johnson sucedió a John F. Kennedy, la atención se desplazó hacia otras partes del mundo, en particular hacia Vietnam.

A partir de la presidencia de James Carter, 1977, éste impulsó el respeto a los derechos humanos y la democracias occidentales, y basó el otorgamiento de la ayuda económica y militar en el cabal cumplimiento de los mismos; este enfoque cambió al momento del triunfo de la Revolución sandinista, 1979, por uno que daba la asistencia sin condicionantes previos. Este nuevo enfoque continuó bajo la administración de Ronald Reagan, quien otorgó miles de millones en ayuda económica y militar así como asesores, en especial a Centroamérica, bajo el pretexto de la infiltración comunista en el área y bajo el enfoque del conflicto Este-Oeste. Sin embargo, a medida que los Estados Unidos aumentaban sustancialmente su presupuesto para ayuda durante este periodo, el dinero no se destinaba a resolver la crisis de la deuda por la que pasaba América Latina, sino a financiar una guerra anticomunista en Centroamérica. Bajo la presidencia de George Bush, este enfoque continuó sin muchas variantes, sin embargo, para 1989 todo cambió con el fin de la Guerra Fría y el colapso del mundo comunista, ya que, las prioridades e intereses de los norteamericanos cambiaron en cuanto objetivos con respecto a América Latina, así a partir de 1990 las relaciones Estados Unidos-América Latina entraron a un nuevo periodo.

El cambiante interés y desinterés es una de las características principales de las relaciones Estados Unidos-América Latina, pero uno de los momentos de mayor interés tuvo lugar en la década de los ochentas, en especial en el área de Centroamérica, debido a que ésta pasaba por un grave crisis política, económica y social.

El Salvador, durante los ochentas, fue uno de los países a los que más se le prestó atención debido a la guerra civil por la que atravesaba. Ya que numerosos periódicos; noticieros; artículos; conferencias; discursos políticos; etcétera, versaban acerca de ésta situación en la pequeña nación centroamericana, especialmente cruenta, dados los hechos de represión protagonizados por los escuadrones de la muerte y otros grupos armados. El interés de los Estados Unidos en esta nación se tradujo en grandes cantidades de ayuda económica y militar, así como en asesoría otorgada a su gobierno, hasta llegar a la cifra de cuatro mil millones de dólares en asistencia que incluyó un gran número de asesores durante doce años. Tomando en cuenta que, para los Estados Unidos, El Salvador significaba únicamente el 0.7% de su economía y con productos de agroexportación perfectamente sustituibles en otros mercados, nos inclinamos a pensar que las razones norteamericanas para otorgar tal cantidad de ayuda no eran de índole económica sino de orden geopolítico; porque el pequeño país de Centroamérica formaba parte de un área vital para Estados Unidos, ya que, era el lugar y paso de materias primas provenientes de Sudamérica, vitales para su economía y maquinaria de guerra, además, la zona centroamericana es el lugar donde se encuentra el Canal de Panamá, esencial para la movilización de su ejército.

La cruenta guerra civil que vivió el país entre 1980-1992 no surgió en forma espontánea sino que se gestó a lo largo de más de cincuenta años debido, principalmente, a la falta de reformas capaces de permitir una vida digna a la gran mayoría de la población salvadoreña y al sistema político-social imperante que generaba desigualdad y pobreza entre los salvadoreños. El sistema establecido por los gobernantes provocó que los

sectores populares, gradualmente, se concientizaran y se politizaran, para, posteriormente, unirse en frentes de masas y lanzarse a las calles para protestar por las condiciones imperantes y a realizar acciones reivindicativas con el objetivo de cambiar el sistema. Al malestar de los sectores populares se sumaba el de los partidos políticos de oposición que vieron cerrarse gradualmente la posibilidad de acceder al poder por medio de las urnas debido a los constantes fraudes perpetrados por los gobernantes.

Frente a las manifestaciones, huelgas y acciones reivindicativas emprendidas por los sectores populares, los gobernantes respondieron con represión que, a finales de los años setenta y principios de los años ochenta, alcanzó niveles inusitados, tanto por el número de muertos, como por el nivel de crueldad alcanzado; al mismo tiempo, las reformas exigidas no se concretaban satisfactoriamente.

Así una parte importante de la sociedad salvadoreña, optó por la vía armada, a principios de 1981, con el objetivo de cambiar el sistema económico, social y político salvadoreño y porque los acontecimientos, no le dejaron otra alternativa que la insurrección dado que otros caminos para componer la situación y acabar con el malestar de la sociedad se habían cerrado durante la década de los años setenta. Pero ¿quiénes cerraron estas vías? ¿Quiénes establecieron el sistema que la sociedad salvadoreña deseaba cambiar? Habría que mencionar que el gobierno que enfrentó al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (en adelante FMLN), el del Partido Demócrata Cristiano (PDC), surgió de los sectores moderados apoyados por Estados Unidos con el objetivo de recomponer la situación y evitar una revolución como la que aconteció en Nicaragua en 1979. Los que establecieron el sistema que deseaba transformar el FMLN no fueron quienes buscaban evitar la violencia sino los gobernantes anteriores a octubre de 1979.

Hasta antes de este año, fueron los militares agrupados en el Partido Conciliación Nacional (PCN) que en alianza con la oligarquía salvadoreña, dominaron el sistema político que surgió después de la revuelta comunista de 1932, cuando los civiles oligarcas, gobernantes de El Salvador desde su independencia, cedieron las riendas del gobierno a

los militares bajo la condición de mantener intacto lo que se conoce como el “cuadro mágico de la dominación oligárquica”, a saber: 1) el control de la producción del café y otros productos de agroexportación; 2) el sistema financiero; 3) la exportación y 4) la propiedad de la tierra. El intento de transformar o romper el cuadro mágico se traducía inmediatamente en una oposición férrea de la oligarquía, llegando incluso a la represión y al asesinato. Esta alianza también fue posible porque poco a poco los altos mandos militares se fueron ajustando y obteniendo pingües ganancias del sistema económico, a tal punto que el sistema en general fue asimilado como propio, de modo que su defensa se tomó como algo personal y necesario. Mientras los militares no tocaran el *cuadro mágico* contarían con el apoyo de la oligarquía y se podrían mantener en el gobierno sin importar mucho las formas ni los modos.

La alianza entre los intereses de ambos grupos estableció el sistema político, social y económico salvadoreño. Éste, sin embargo, generaba desigualdad y pobreza entre la gran mayoría de la sociedad, al mismo tiempo, impedía el acceso al gobierno por medio de las urnas a los sectores medios moderados de la sociedad, quienes deseaban establecer reformas. La actuación de oligarcas y militares durante su periodo como gobernantes fue la que cerró gradualmente los caminos para resolver la crisis en la que el país se sumía poco a poco, incluso después de ser expulsados del gobierno continuaron impidiéndolo por otros medios.

La década de los años setenta fue el momento en el que la situación se agravó a tal punto que para 1981 la guerra fue vista como medio para cambiar el sistema. Conforme la crisis se agravaba y frente al temor de que los sectores populares se decidieran por la revolución, las fracciones medias moderadas, ahora apoyados por Estados Unidos, conspirarían y se inclinarían por expulsar a los militares y a la oligarquía de la conducción del gobierno en octubre 1979.

Hasta antes de 1979 los oligarcas y militares tuvieron el apoyo norteamericano. Mientras los primeros mantuvieran el orden y la estabilidad en el país, los estadounidenses no intervendrían ni presionarían a los gobernantes para cambiar algo. El

lugar de El Salvador en la agenda de política exterior de los Estados Unidos, fue secundario hasta 1979. Posteriormente ocupó un lugar primordial dado el estado de guerra por el que atravesó El Salvador y por motivos ideológicos referentes al contexto de Guerra Fría que se vivía en ese entonces.

Una vez fuera del gobierno los oligarcas y sus aliados militares que aún se mantenían dentro del gobierno y de la institución armada, se dedicaron a reprimir a los sectores populares y medios a través de los escuadrones de la muerte, así como a entorpecer cualquier intento del gobierno por establecer reformas con el objetivo de retomar el control del gobierno y regresar al estado de las cosas anterior a 1979. La actuación de la oligarquía y los militares después de ser expulsados, provocó que el nuevo gobierno fuera inoperante e incapaz de resolver la crisis, lo que inclinó a los sectores populares, agrupados en el FMLN a optar por la vía insurreccional.

La crisis salvadoreña alcanzó su punto máximo durante la presidencia del general Carlos Humberto Romero (1977-1979), momento en que la represión se incrementó desproporcionadamente y los cuerpos represivos actuaron con toda impunidad. En esos años, la posibilidad de reformas parecía cada vez más alejada. La situación poco a poco se volvió insostenible y preocupante, incluso para los norteamericanos, quienes desde 1977, bajo la presidencia de James Carter (1977-1981), impulsaron la política de los derechos humanos y la de las democracias viables. En el marco de estas políticas los estadounidenses presionaron al gobierno de Romero para mejorar la situación de los derechos humanos y retiraron la ayuda económica a El Salvador. La situación también era preocupante para ciertos sectores de la sociedad salvadoreña, quienes se comenzaron a organizar para encontrar soluciones a la crisis. En julio de 1979, cuando triunfó la revolución en Nicaragua y se instauró un gobierno de tipo nacional revolucionario, estos sectores se decidieron por dar un golpe de estado, ya que contaban con el apoyo de oficiales del ejército y con el aval del gobierno norteamericano debido al temor que despertaba entre estos sectores la posibilidad de que se polarizara el país, deviniera en revolución y se estableciera un gobierno comunista en El Salvador. Para impedir dicha

opción se buscó establecer un gobierno de corte moderado capaz de resolver la crisis salvadoreña.

El 15 de octubre de 1979 fue derrocado el general Romero y se instauró una Junta de Gobierno Cívico-Militar que contó con el reconocimiento, el apoyo político y la ayuda económica de los Estados Unidos. El nuevo gobierno moderado prometió la realización de reformas y el cese de la represión; sin embargo, la represión no acabó; por el contrario, se incrementó y las reformas tampoco se concretaron, lo que ocasionó que para enero de 1980 la Junta se desintegrara. En sustitución se estableció una nueva, denominada Junta Democristiana, por la inserción en el gobierno del Partido Demócrata Cristiano (PDC); esta vez, las reformas sí se promulgaron, pero no se llevaron a la práctica debido a la férrea oposición de la oligarquía; al mismo tiempo, la represión continuó e, incluso, se agravó llegando a su punto máximo con el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero en marzo de 1980.

1981 fue el año del inicio formal de la guerra civil salvadoreña, en donde no sólo se enfrentarán los sectores populares, agrupados en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), contra el gobierno de la Junta Democristiana y, posteriormente, el gobierno del PDC encabezado por José Napoleón Duarte, sino que también habrá un tercer contrincante, éste será la oligarquía, agrupada en la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y apoyada por los escuadrones de la muerte, la oligarquía será a veces aliada del gobierno y otras tantas será su enemiga, sobre todo al momento del establecimiento de las reformas. Cada uno de los contrincantes peleará por establecer en El Salvador su propio programa político.

Sin embargo, la guerra no se mantendrá en el ámbito local sino que trascenderá al plano internacional debido, principalmente, a la intromisión que tuvo el gobierno de los Estados Unidos al otorgar grandes cantidades de ayuda económica y militar así como entrenamiento para las fuerzas armadas y asesoría al gobierno salvadoreño, la ayuda se otorgó a través de diferentes programas, en general ésta se dividió en dos grandes rubros: 1) económica y 2) militar, la primera destinada a mantener las funciones esenciales del

gobierno salvadoreño y la segunda para derrotar por la vía armada al FMLN. El común denominador de los tres actores fue la relación de éstos con el gobierno de los Estados Unidos. Al gobierno del PDC lo mantuvo en el poder para evitar que el país se polarizara y cayera en manos de la extrema izquierda o de la derecha; al FMLN lo contuvo para evitar que tomara el poder y estableciera un gobierno socialista contrario a los intereses y a la seguridad norteamericana; a la oligarquía le impidió que retornara al poder; sin embargo, en lugar de buscar su destrucción por la vía militar, a ésta la intentó transformar para que participara en el sistema democrático, respetuoso de los derechos humanos y reformista moderado dentro de los marcos del capitalismo que intentaba establecer para El Salvador. A cumplir estos objetivos se dedicó el gobierno de los Estados Unidos, y al mismo tiempo, intentó consolidar un sistema democrático occidental. La presión y ayuda norteamericana forzarán que, tanto el FMLN como la oligarquía, cambiara su posición inicial a una más moderada capaz de hacer posible la solución política al estado de guerra civil que vivía El Salvador.

Parte esencial en el desarrollo y desenlace de los acontecimientos narrados en la investigación será la ayuda otorgada por el gobierno de los Estados Unidos al de El Salvador durante la guerra civil, destinada a evitar que El Salvador cayera en manos del comunismo internacional y, así, proteger sus intereses y su seguridad en el área de Centroamérica.

Ideológicamente la política latinoamericana de los Estados Unidos, durante la Guerra Fría, se basó en la idea de evitar perder un aliado o país “amigo” pues su pérdida significaría perder terreno dentro del contexto de la Guerra Fría, dicho principio estuvo presente en la política de todos los presidentes norteamericanos, ya sea demócrata o republicano, durante la crisis salvadoreña, en función de esta idea se basó toda la ayuda económica o militar otorgada a El Salvador durante la guerra civil. La cantidad de ayuda otorgada fue según el nivel de crisis en el que se encontrara el país y la política latinoamericana del presidente en turno; el objetivo principal de la asistencia fue evitar la instauración de gobiernos contrarios a los intereses y a la seguridad norteamericana.

La política latinoamericana de los Estados Unidos durante la guerra civil salvadoreña no fue, en cuestión de metodología, uniforme sino que ésta cambió a lo largo de la crisis salvadoreña.

Todos los presidentes norteamericanos formularon políticas propias, apoyadas o basadas en las ideas o principios de expertos en política latinoamericana, y basado en esto es que otorgaron o denegaron la ayuda. Así, al inicio de la crisis salvadoreña, en 1977, el recién electo presidente estadounidense, James Carter, retiró toda la asistencia al gobierno salvadoreño alegando la violación constante a los derechos humanos por parte de éste, basándose en los postulados formulados por Sol M. Linowitz, ex embajador ante la OEA; muchos de los principios de Linowitz fueron asimilados, defendidos y promovidos por la administración Carter, por ello la política de Carter fue conocida como Política de Derechos Humanos. Durante los tres primeros años, la administración Carter fue consistente, cortando toda ayuda a gobiernos dictatoriales y promoviendo la democracia y los derechos humanos, sin embargo, para 1979, acontecimientos internacionales y en el área de Centroamérica, como el triunfo sandinista en Nicaragua y el agravamiento de la crisis en El Salvador generaron la percepción de que el poderío norteamericano iba en descenso, a partir de este año y hasta el final de la presidencia de Carter, la política de derechos humanos fue inconsistente y viró poco a poco en el simple apoyo irrestricto a los gobiernos amigos, aunque esto no fue declarado abiertamente.

Cuando inició abiertamente la guerra civil en El Salvador, 1981, empezó una nueva administración estadounidense, encabezada por el republicano Ronald Reagan, quien basó su política hacia Centroamérica en el apoyo irrestricto a los gobiernos del área con el fin de evitar que cayeran en manos del comunismo internacional; los principios de la política de Reagan se apoyaron en las tesis que Jeane Kirkpatrick, embajadora ante la ONU en el gobierno republicano, expuso en *Dictaduras y Dualidad de Criterios y Seguridad Norteamericana y América Latina*. El primero, a grandes rasgos, advertía del peligro del comunismo y aconsejaba qué papel asumir frente a gobiernos totalitarios (comunistas) y autoritarios (dictaduras militares derechistas). Los gobiernos totalitarios los consideraba como un asunto perdido pues su propia historia mostraba que éstos no cambiarían; con

respecto a los autoritarios, aconsejaba apoyarlos irrestrictamente sin reparar mucho en el tipo de régimen, al fin y al cabo eran gobiernos “amigos” afines a los intereses y posiciones de Estados Unidos, el fijarse en temas como los derechos humanos, la democracia, etcétera, era perder el tiempo, ya que, posteriormente, el devenir histórico transformaría a los países autoritarios de derecha en democracias occidentales pues así lo había demostrado la historia, y ponía como ejemplo los casos de Francia y el mismo Estados Unidos. Asimismo, se apoyó en el documento de Santa Fe, publicado en mayo de 1980, denominado así por la capital del estado de Nuevo México y elaborado por la *Heritage Foundation*. En resumen, advertía del peligro del comunismo en América Latina y sus planes expansionistas, incluso se llegó más allá al advertir que Estados Unidos se encontraba en la Tercera Guerra Mundial, se señalaba la importancia geoestratégica de Centroamérica como lugar y paso de materias primas provenientes de Sudamérica vitales para su economía y su maquinaria de guerra; además se indicaba la importancia de apoyar sin restricción a los gobiernos donde hubiese revoluciones, pues éstas eran auspiciadas por la Unión Soviética, Cuba y Nicaragua, y los Estados Unidos no se podían permitir perder aliados en una zona estratégica. El propósito de ambos textos era orientar a Ronald Reagan en nociones básicas de política hacia Latinoamérica y qué hacer al respecto con la problemática en áreas en crisis, como fue el caso de Centroamérica y El Salvador, a este último, la administración Reagan otorgó todo tipo de asistencia sin restricción, lo cual ayudó a contener al FMLN y mantener al gobierno del PDC con el fin de evitar que cayera en manos del comunismo.

Después de ocho años de la administración Reagan, asumió en 1989 la presidencia George Bush, republicano y vicepresidente durante la administración Reagan, en teoría se esperaba que continuara con la misma línea que su antecesor, sin embargo, a pesar de compartir las mismas ideas de política latinoamericana, el nuevo presidente era más pragmático, además, los tiempos eran otros y las ideas sustentadas como justificantes para dar la ayuda a El Salvador no tenían mucho asidero, pues este año fue el del colapso del mundo comunista y el fin de la opción del marxismo-leninismo como teoría económica, política y social. Estos hechos convencieron a la administración Bush de la

necesidad de llegar a un arreglo político al conflicto salvadoreño, pues seguir otorgando la ayuda no era conveniente para Estados Unidos y sus prioridades habían cambiado en un nuevo orden mundial, por ello fue que a partir de 1990 Estados Unidos se dedicó a apoyar el proceso de paz en El Salvador.

Con los objetivos norteamericanos para El Salvador y los programas políticos que deseaban establecer cada uno de los contrincantes establecidos, ¿Quién fue el verdadero vencedor de la guerra civil salvadoreña: el FMLN, la oligarquía o el gobierno del PDC? ¿De los diferentes programas políticos que sustentaban cada uno de los adversarios cuál se impuso? Se considera, que no hubo un vencedor del conflicto y por lo tanto ningún programa político se concretó totalmente, esto es porque, más que un claro vencedor, los adversarios tuvieron que ceder en sus posturas iniciales mutando en unas más moderadas capaces de hacer posible una solución política para la guerra civil; en otras palabras, los adversarios tuvieron que cambiar sus posturas para poder sobrevivir políticamente y salvar su capacidad para poder influir en los destinos políticos, sociales y económicos de El Salvador. También, influyeron en el cambio de postura los acontecimientos nacionales e internacionales, en especial los de 1989.

Precisamente, esta tesis será la que se sustente a lo largo de la exposición; demostrar que los actores del conflicto salvadoreño tuvieron que cambiar sus posturas para solucionar el estado de guerra que vivió El Salvador debido a la presión y a la ayuda norteamericana y, también, a ciertos hechos nacionales e internacionales que ayudaron al cambio de los objetivos.

Para demostrar la hipótesis, dividí el texto en tres capítulos, el primero se dedicó a los gobiernos de la primera y la segunda Juntas, así como al de la Democracia Cristiana y a la ayuda económica y asesoría prestada por Estados Unidos, en su búsqueda por consolidar un gobierno moderado y de corte liberal. El segundo capítulo abordó la acción del FMLN frente a la actuación de las Juntas y el gobierno democristiano, así como la actitud asumida ante la promulgación de las reformas, las acciones y planes de los estadounidenses para frenar los intentos de toma del poder por parte de los guerrilleros y

la transformación de su postura inicial. El tercer capítulo analiza la actuación de la oligarquía como principal causante de la crisis durante la década de los años setenta mientras se mantenía al frente del gobierno y su posterior actuación una vez expulsados del mismo y su gradual transformación para convertirse en factor principal para la solución del conflicto armado, debido, principalmente, a la situación en Centroamérica, en Estados Unidos y en el ámbito internacional.

La bibliografía acerca de El Salvador y de la guerra civil por la que atravesó es muy diversa. En las diferentes bibliotecas e institutos de la Ciudad de México visitados para la elaboración de la investigación encontré varios textos. También se halló en Internet varios artículos, en especial en las páginas de Institutos y Universidades de Latinoamérica. Empero ni en la bibliografía ni en la hemerografía encontré información sobre la ayuda norteamericana y su influencia en los diversos actores salvadoreños, al menos dentro de la búsqueda bibliográfica que se realizó para la investigación. De ahí surgió mi interés por investigar el tema; sin embargo, al ir analizando y leyendo los libros referentes a El Salvador y a los orígenes, desarrollo y finalización de la guerra civil, los autores consultados se referían al papel fundamental desempeñado por los Estados Unidos, tanto como factor que dio origen a la crisis y, posteriormente, a la guerra y su desarrollo y continuidad durante la década de los ochenta, así como por su rol desempeñado para la solución de la misma. Pero, no existe un estudio monográfico dedicado al análisis puntual del papel que desempeña la política estadounidense en El Salvador. Los estudiosos se han orientado al examen de uno de los actores, pero no ofrecen una perspectiva que comprenda al conjunto de ellos.

Los libros que tratan de manera más profunda el tema del papel desempeñado y la influencia norteamericana o por lo menos se acerca al tema tratado en el presente trabajo son los de Walter LaFeber *Revoluciones Inevitables*; que si bien es un libro general de la política norteamericana hacia Centroamérica, analiza el comportamiento y la actuación de Estados Unidos antes y durante los primeros años de la guerra salvadoreña, hecho que la profundizó aún más y la alejaba de una pronta solución política. También el libro *Centroamérica: de Reagan a Bush* de Gabriel Aguilera aborda de manera general el tema

de la relación Centroamérica-Estados Unidos, en especial la ideología de Ronald Reagan y George Bush con respecto a la política seguida en Centroamérica dentro del contexto de crisis que vivía el área durante los ochenta, del mismo modo trata la actuación de ambos presidentes frente a la problemática centroamericana. Para conocer la ideología norteamericana y el qué debía hacer en ese momento, son indispensables los textos ya citados de Jeane Kirkpatrick *Dictaduras y Dualidad de criterios y Seguridad norteamericana y América Latina*; y el *Documento de Santa Fe* elaborado por un grupo de expertos en temas latinoamericanos. Ambos documentos fueron una especie de guía para el presidente Reagan con respecto a qué hacer en el caso centroamericano, este último documento trae consigo un prólogo y una serie de anotaciones de Gregorio Selser, hecho que ayuda a la comprensión de este tema. De igual forma uno de los textos que trata de manera más profunda el tema de Estados Unidos es el artículo de Selser, *Hispanoamérica en el umbral de la década de 1980*, en él se aborda la actuación de la administración Carter desde una perspectiva actual (1980) y advierte de los peligros para Latinoamérica, los cauces que está tomando la política norteamericana.

En cuanto a la transformación de los actores del conflicto salvadoreño los libros que de mejor manera tratan este tema son: el de Mariano Castro *Función Política del Ejército Salvadoreño en el presente siglo*; el de Ricardo Córdova *El Salvador: las negociaciones de la paz y los retos de la posguerra*; el de Irene Lungo *Castillos de ARENA. Hegemonía y proyecto de derecha en El Salvador 1989-2004*; el de Manuel Montobbio *La Metamorfosis de Pulgarcito: transición política y proceso de paz en El Salvador*; el de Laura Zamudio *Pacificadores vs Oportunistas: la difícil implementación de un Acuerdo de paz: el caso de El Salvador (1992-1994)*; así como el artículo de Luis González *El FMLN salvadoreño: de la guerrilla al gobierno*. La importancia de estos textos es la coincidencia de los autores en la hipótesis de que los cambios promovidos por el gobierno estadounidense entre los diferentes actores salvadoreños fueron los que permitieron, en parte, una solución al conflicto que vivió El Salvador por más de una década. De igual forma muchos de los ensayistas concuerdan en señalar a los Estados Unidos como motor

de estas transformaciones debido a su rol desempeñado; sin olvidar la importancia de los esfuerzos del Grupo Contadora y Esquipulas.

Si bien no se encontró alguna obra que específicamente tratara como tema principal los cambios en los actores salvadoreños y el papel primordial desempeñado por los Estados Unidos para la solución de la crisis, sí se halló un sinnúmero de ensayos que introducían dicha temática. De las diferentes obras consultadas, leídas y analizadas para la investigación, se extrajeron datos, ideas, nombres, etcétera. Estas mismas obras ayudaron a confirmar o desechar las hipótesis que se describieron en párrafos anteriores.

La falta de algún libro o texto con una temática específica referente a la influencia y la ayuda norteamericana en la guerra civil salvadoreña, así como su papel primordial para la transformación de las posiciones iniciales de los actores salvadoreños que hiciera posible una solución política a la crisis del país, fueron determinantes para analizar el tema y realizar la presente investigación. Consideré que era necesario responder a los cuestionamientos que surgieron al momento de abordar el tema de El Salvador, mediante el análisis de las perspectivas de cada uno de los tres actores mencionados. Se intentará darles repuesta a lo largo de la exposición.

En el desarrollo de los capítulos se describen los hechos nacionales e internacionales que influenciaron el cambio de postura de los actores del conflicto; estos hechos estuvieron ligados a la ayuda o influencia norteamericana, quien desde el gobierno presionó para la realización de ciertas acciones que contribuyeron a contener y transformar al FMLN y a la oligarquía respectivamente; al mismo tiempo, se describen los objetivos políticos que buscaban cada uno de los actores, principalmente, la oligarquía y el FMLN. También, se analizan los hechos que los norteamericanos impulsaron con el fin de establecer un nuevo sistema político para El Salvador.

Para entender mejor la guerra civil salvadoreña y su resolución, se dividió, como ya se dijo, la exposición en tres partes con el propósito de poder comprender mejor la influencia de los Estados Unidos en cada uno de los actores y los factores que permitieron una solución política a la crisis; así como, tener continuidad en el proceso seguido por

cada uno de los actores que se han identificado. En cada uno de los capítulos se relatan acontecimientos importantes que afectaron y, posteriormente, cambiaron la posición inicial de los participantes del conflicto, lo que permitió una solución política. Es importante señalar que los hechos considerados como fundamentales serán los mismos para los tres actores; por ello, el lector encontrará cierta reiteración en los tres capítulos. Sin embargo, la exposición persigue mostrar el distinto impacto de la política estadounidense en el FMLN, en la oligarquía y en el gobierno del PDC.

El análisis y estudio de los diferentes materiales consultados fue útil para confirmar o desechar las hipótesis del trabajo. Del estudio de los documentos se extrajeron los hechos históricos nacionales e internacionales que fueron importantes en la transformación de todos los actores del conflicto salvadoreño; de los mismos materiales, también se obtuvieron los objetivos y los programas políticos que perseguía el FMLN, los oligarcas y el gobierno de la Democracia Cristiana para conocer si sus objetivos iniciales fueron los mismos a lo largo del conflicto o si por el contrario éstos fueron mutando gradualmente haciendo posible la solución política de la guerra civil salvadoreña. En la evolución del conflicto salvadoreño así como en la transformación de los objetivos de los actores siempre estuvo la sombra de los Estados Unidos, ya fuera para contener al FMLN, para mantener al gobierno o para transformar a la oligarquía.

La sustentación de las hipótesis incluidas en el ensayo se basa en diversos libros, artículos de revistas y documentos de la época. Destacan el texto de Sara Gordon *Crisis Política y Guerra en El Salvador* pues en él se encuentran datos y hechos que sirvieron para entender, de manera general, los factores que se consideran causantes de la crisis. Para entender en particular los cambios acontecidos en la idiosincrasia del campesino salvadoreño, así como el papel de la Iglesia y su viraje de ideología a partir de 1968 fue esencial el texto de Rafael Cabarrus, *Génesis de una Revolución: Análisis del Surgimiento y Desarrollo de la Organización Campesina en El Salvador*, donde se plasma la formación y el funcionamiento de las Comunidades de Base, corporaciones que al transformar su función pastoral y evangélica en una de acción política y reivindicativa, derivaron en un gran impulso al programa político y a los objetivos, en primera instancia, de las organizaciones

de masas y, posteriormente, al FMLN. En lo tocante a los sindicatos obreros y su formación social y política, la base fue el libro de *Formación y lucha del proletariado industrial salvadoreño* de Rafael Menjívar, donde se abordan las luchas del proletariado salvadoreño desde la década de los cuarenta y su evolución ideológica a partir del impulso a la industrialización que se dio con la Alianza para el Progreso y el Mercado Común Centroamericano y su incorporación a la lucha política y social en la década de los setenta.

La alianza entre campesinos y proletariado dio paso a los Frentes de Masas, agrupaciones que aglutinaban a ambos sectores, a ellos se sumaban otros actores, medios y bajos de la sociedad, que buscaban mejoras a su situación. Cada uno de estos elementos generaron presión sobre el gobierno. Al no obtener una respuesta satisfactoria a sus demandas, se inclinaron por la lucha armada y asimilaron los principios de los grupos político-militares, por los cuales lucharon durante la década de los ochenta. Para entender este proceso de unidad e incorporación a la lucha armada fue indispensable el libro de Mario Lungo *La lucha de masas en El Salvador*.

En lo que respecta al papel de los sectores que formaron parte de los gobierno surgidos a partir del golpe de estado de 1979, fueron fundamentales los libros de Gilles Batallion, *Génesis de las Guerras Intestinas en América Central (1960-1983)*, de Adolfo Gilly *Guerra y Política en El Salvador* y el de Silvia Bielous *El Salvador*, así como el ya mencionado de Sara Gordon. Los cuatro libros sirvieron para entender las luchas de los sectores medios salvadoreños por una auténtica democracia participativa y respetuosa de las elecciones a partir de la dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez en la década de los años treinta. De igual forma sirvieron para comprender la negativa de la oligarquía y los militares a que los sectores medios participaran en el gobierno y en la elaboración de reformas. Esta negación propició que los segundos se decidieran por derrocar, con apoyo de los Estados Unidos, al gobierno del PCN e instauraran uno nuevo más acorde con los principios de las democracias occidentales, capaz de responder a las diversas demandas de los diferentes sectores de la sociedad salvadoreña.

Para comprender el papel del ejército en el gobierno y como aliado de la oligarquía nos apoyamos en los escritos del teniente coronel Mariano Castro *Función Política del Ejército Salvadoreño en el presente siglo*, y de Francisco Mena *Del Ejército Nacional al Ejército Guerrillero*. Para la descripción de la actuación del gobierno norteamericano hasta antes de la década de los ochenta fue primordial el ya mencionado texto de Walter LaFeber *Revoluciones Inevitables*. Una vez que los oligarcas se encontraron fuera del gobierno su actuación estuvo entre el apoyo y la oposición al nuevo gobierno, para comprender la actuación oligárquica fueron básicos los libros de Enrique Baloyra *El Salvador en Transición*, donde se describe la transición en El Salvador de un gobierno militar y represivo a uno más moderado, asimismo el de Ricardo Córdova Macías *El Salvador: Las Negociaciones de la Paz y los retos de la Posguerra*, donde se asienta la transformación de la oligarquía a una fuerza más moderada y tolerante, así como su acoplamiento al nuevo sistema impulsado por los Estados Unidos; además el texto de Manuel Montobbio *La Metamorfosis de Pulgarcito: Transición Política y Proceso de Paz en El Salvador*, en donde de igual forma se describe el proceso de transformación de la oligarquía y su nuevo papel dentro del sistema impuesto, así como su actuación primordial en la solución de la crisis.

Para comprender el cambio de posiciones iniciales de los diferentes actores del conflicto salvadoreño se usaron textos de la autoría de Sara Gordon; nuevamente, el de Manuel Montobbio; el de Francisco Moreno, *El Salvador: la Sociedad contra el Estado*; de Mario Menéndez, *El Salvador: el Pueblo contra la Oligarquía* y el de Ignacio Medina, *El Salvador: entre la Guerra y la Esperanza*. Estos libros permitieron ver y comprender el actuar y la metamorfosis del FMLN y de la oligarquía, su convencimiento de que la solución a la crisis era por la vía del diálogo y su desplazamiento a posiciones más moderadas que permitieron el establecimiento de conversaciones y la posterior firma de la paz, así como la ineficacia del gobierno de la Democracia Cristiana en la solución de la crisis y en los asuntos propios del gobierno, a pesar del apoyo irrestricto del gobierno norteamericano que únicamente sirvió para evitar que cayera en manos de ambos extremos del espectro político salvadoreño.

Para la política estadounidense así como su accionar dentro de la guerra salvadoreña, en los primeros años, durante el periodo de James Carter se retomaron los citados textos de Gordon, Castro y LaFeber. Sus escritos sirvieron para percibir el cambio de la política de derechos humanos a una de sostenimiento de los países “amigos” a toda costa bajo la administración de Carter a partir de la revolución sandinista de 1979. A la vez, permitieron observar el incremento de la ayuda e intervención en El Salvador. Para entender la política exterior de Reagan se consultaron documentos y artículos que influyeron en ella, principalmente, el documento de Santa Fe y los artículos de Jeane Kirkpatrick, los postulados de estos textos fueron la base de la política exterior norteamericana. Para su actuar en El Salvador nos apoyamos en LaFeber, Gordon, Montobbio, Moreno y en los libros de Gabriel Aguilera, *Centroamérica: de Reagan a Bush* y el de Gregorio Selser, *El Informe Kissinger contra Centroamérica*; además se usaron libros de apoyo para confirmar las hipótesis.

Aparte de estos libros base se consideraron otros textos para complementar las ideas de los autores anteriores y las propias, al igual estos libros secundarios fueron una gran fuente de datos y hechos históricos que permitieron completar de manera más adecuada la exposición. El uso de esta bibliografía fue de gran ayuda para la formulación y exposición de los factores que se consideran causantes de la guerra civil salvadoreña.

Del amplio número de fuentes secundarias consultadas fueron de gran valor los textos de Alain Rouquié *Guerras y paz en América Central* y *Las Fuerzas políticas en América Central*, el primero fue de utilidad a la hora de conocer ciertos hechos históricos que fueron fundamentales para la transformación de los actores salvadoreños, también fue útil al momento de conocer los rasgos generales de la política norteamericana hacia Centroamérica; en cuanto al segundo libro, éste sirvió para conocer los orígenes y las bases ideológicas de partidos políticos, sindicatos, agrupaciones sociales, etcétera. Igualmente, los libros de Losu Perales fueron de utilidad, a pesar de su evidente simpatía por el FMLN. Lo relevante de estos textos fue la gran variedad de datos específicos que ayudaron a completar los hechos históricos descritos. El texto de Laura Zamudio *Pacificadores vs Oportunistas: la Difícil Implementación de un Acuerdo de Paz: el caso de El*

Salvador (1992-1994) fue de gran valor por las ideas y hechos descritos, en particular durante la parte final del conflicto y la construcción de los acuerdos de paz.

También fueron útiles los diferentes artículos de revistas consultados que a pesar de ser cortos en extensión fueron de gran valor en cuanto a las ideas que aportaron, estos textos ayudaron a complementar y perfeccionar las ideas y confirmar o desechar las hipótesis.

Una vez expuesto el estado del arte, paso ahora a la exposición de los sucesos que conforman el proceso salvadoreño durante el conflicto armado.

Capítulo 1

EL GOBIERNO DEL PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO (PDC): EL EQUILIBRIO IMPOSIBLE

Aparte de la presión ejercida por los Estados Unidos, parte esencial en el desarrollo y resultado de los acontecimientos fue la ayuda otorgada por las administraciones Reagan y Bush, y en menor medida la de Carter. La asistencia fue un factor principal para mantener al gobierno del PDC, contener al FMLN y, en menor medida, transformar a la oligarquía, así como en el establecimiento del sistema que permitió la solución pacífica de la guerra civil en la década de los noventa.

La ayuda norteamericana buscó, en el caso de El Salvador, dos objetivos: 1) sostener y apoyar al gobierno “*amigo*” de El Salvador frente a la oleada insurreccional encabezada por el FMLN y 2) realizar transformaciones coyunturales en la economía salvadoreña, causantes de la crisis.

De todos los países de Centroamérica, El Salvador fue el que mayor cantidad de ayuda recibió por parte de las diferentes administraciones norteamericanas a lo largo de la crisis centroamericana. Así lo demuestran las estadísticas, para 1990 el auxilio otorgado alcanzó más de 3.000 millones de dólares (ver cuadro 1) y representó el 43.91% del total de asistencia concedida al área. (Ver cuadro 2)

Cuadro 1

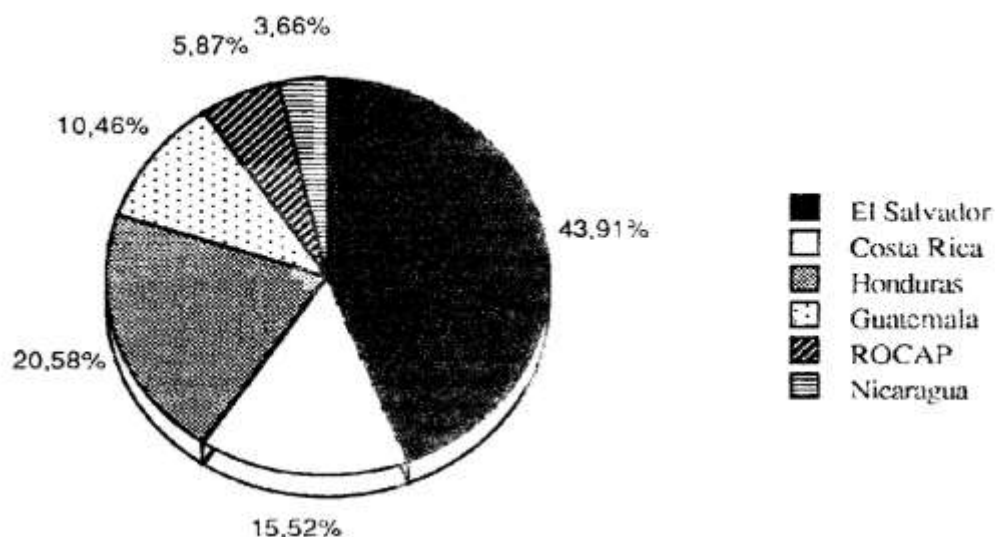
Ayuda Norteamericana a Centroamérica 1980-1990

- Distribución anual por países -
(millones de US \$)

Años	ROCAP	Nicaragua	Guatemala	Honduras	Costa Rica	El Salvador	TOTAL
80	4,2	37,1	11,1	55	14	63,7	185,1
81	10,6	59,7	16,6	42,8	13,3	149,1	292,1
82	13,1	6,3	15,5	112	53,8	264,2	464,9
83	19,4	0	29,7	154,3	218,7	326,7	748,8
84	15,5	0,1	20,3	172,4	179	412,5	799,8
85	106,6	0	107,4	296,4	231,2	570,2	1311,8
86	25	0	110,9	185,1	150,6	437,1	908,7
87	36,5	0	181,2	254,9	179,5	507,8	1159,9
88	24,8	0	146,7	198	105,6	401,6	876,7
89	22	0	156,8	185,7	117,3	394,8	876,6
90	24,5	0	162,6	213,7	88,2	386,2	875,2
Total	302,2	103,2	958,8	1.870,3	1.297,4	3.913,9	8.445,8

Fuente: Sanahuja, José Antonio, “Los EE.UU. en Centroamérica, 1980-1990 ¿Ayuda económica o seguridad nacional?”, *Cuaderno de Trabajo de HEGOA*, núm. 10, País Vasco, Diciembre, 1992, p. 63.

Cuadro 2

Distribución de la ayuda total por países 1980-1990

Fuente: *Ibíd*em, p. 30.

La ayuda económica es aquella en la que el Congreso norteamericano prohibió expresamente utilizar para asuntos militares, aunque ello no siempre fue respetado. La ayuda económica se refirió sobre todo a tres grandes programas canalizados por la Agencia norteamericana para el Desarrollo Internacional (AID o US-AID por su siglas en inglés): los “Fondos de Apoyo Económico” (ESF, *Economic Support Funds*), la Ayuda al Desarrollo (DA o *Development Assistance*) y la Ayuda Alimentaria (PL-480, *Public Law-480. Food for Peace*). Estas modalidades de la asistencia se orientaron a la estabilización y a la transformación de la economía de El Salvador durante la crisis del país.

1.1 EL GOLPE DE ESTADO DE 1979: UN INTENTO POR COMPONER LA SITUACIÓN Y LA IRRUPCIÓN DE LOS MODERADOS EN EL GOBIERNO SALVADOREÑO

La polarización de la sociedad durante el gobierno del general Carlos Humberto Romero en 1979 era más que evidente; la crisis social, política y económica avanzaba constantemente, y el gobierno se mostraba ineficiente y sin la voluntad política para resolverla. Así pronto se hizo clara la necesidad de un cambio de rumbo para evitar caer en extremismos.

En junio de 1979 se dieron los primeros pasos para resolver la crisis. El primero consistió en iniciar negociaciones para la conformación de un Foro Popular en el que convergerían los partidos políticos de oposición; algunas centrales obreras y sectores medios de la sociedad. El Foro Popular fue constituido con el propósito de intentar unificar esfuerzos para sacar al país de la crisis, y así lo plasmó en su Plataforma Común. “Se trataba de crear una amplia alianza que postulara la necesidad de democratizar el país y un conjunto de reformas de beneficio popular”.¹

El segundo paso del Foro Popular era convertirse en una alternativa política frente a la izquierda radical y a la derecha antirreformista. Durante el mes de septiembre de 1979 se realizaron pláticas, entre integrantes del Foro –particularmente del PDC –y el Departamento de Estado norteamericano, con el fin de convencer a los estadounidenses de las bondades de su programa como alternativa para el país; de los foristas con un grupo de militares descontentos con la actuación del régimen pero no comprometidos con la derecha para sondear la posibilidad de llevar a cabo un golpe de estado; y el último paso consistió en reuniones con personeros de la burguesía industrial para tratar de convencerlos de que el proyecto no era de inspiración izquierdista, si no por el contrario, favorecía ampliamente la recuperación económica dentro de los límites del capitalismo nacional.²

La salida electoral parecía cerrada mientras los militares se mantuvieran en el poder. El pueblo no creía en las elecciones y se había decidido por el camino de las acciones reivindicativas. La única vía parecía ser el golpe de estado, puesto que existía el consenso entre diversos sectores de la sociedad de desplazar del poder a los generales y a sus colaboradores de la oligarquía, pues éstos eran vistos como responsables de la falta de reformas que habían derivado en una grave crisis. Sin embargo, se comprendía que no podía ser un golpe de estado simulado, sino que era necesario dejar de lado a la oligarquía

¹ Moreno, Parada, Francisco, *El Salvador: la Sociedad contra el Estado*, Guadalajara, México, Universidad de Guadalajara, 1994, Estudios Latinoamericanos, núm. 6, p. 78.

² *Ibidem*, p. 80.

antirreformista y a los militares comprometidos con ellos, e incorporar al gobierno a las organizaciones representativas de la oposición de carácter moderado. Ante semejante paso se vaciló en demasía.³

1.1.1 La Victoria Sandinista y El Golpe de Estado de 1979

A mediados de 1979 un suceso internacional vino a estremecer a los generales en el poder y a los oligarcas y vino a decidir a los militares descontentos e integrantes del Foro a realizar el golpe de estado; así como a convencer a los norteamericanos de la necesidad de un cambio de rumbo. La victoria de la Revolución Nicaragüense en junio de 1979, encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

En lo que concierne a los norteamericanos, este hecho fue el que delineó la postura de Washington con respecto a los acontecimientos futuros en El Salvador. Al principio de la administración Carter, ésta retiró toda la ayuda al gobierno somocista, lo que colaboró a que se debilitara. Además el régimen se estropeó porque no hizo reformas y reprimió a la población nicaragüense, provocando la polarización social hasta el punto en que los diferentes sectores de la sociedad, incluidos la iglesia y algunos empresarios, no encontraron otra opción que la revolución como forma de cambiar la situación. El caso de Nicaragua sirvió como ejemplo de lo que no y lo que sí se debería de hacer en caso de tener una situación similar.

Del triunfo sandinista y el posterior establecimiento de un gobierno de tendencia marxista-leninista en Nicaragua, los norteamericanos dedujeron lo que se dio en llamar las “Lecciones de Nicaragua”, éstas se podrían resumir así:

- a) No apoyar incondicionalmente a dictaduras corruptas con negros historiales en derechos humanos y desinteresadas en realizar reformas, pues el apoyo irrestricto generaría animadversión contra los Estados Unidos.

³ Castro Moran, Mariano, *Función Política del Ejército Salvadoreño en el presente Siglo*, 2da. Ed., San Salvador, El Salvador, Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, 1987, p. 268.

- b) En caso de que los gobiernos estuvieran en una evidente crisis de legitimidad, tratar de influenciar o apoyar a grupos moderados para que asumieran el control del Estado.
- c) Influir y ayudar en la promulgación de reformas de corte moderado para apaciguar a las clases populares
- d) La asistencia a gobiernos moderados, democráticos y respetuosos de los derechos humanos garantizaría la salvaguarda de los intereses y de la influencia de los Estados Unidos en los países, así no se pondría en riesgo la seguridad nacional norteamericana.⁴

1.1.2 El Golpe de Estado del 15 de Octubre de 1979

Dentro de El Salvador, la victoria sandinista significó un duro golpe para los militares descontentos, quienes se percataron que en medio del júbilo popular se liquidó totalmente a la Guardia Nacional de Somoza, además las declaraciones de los líderes sandinistas les preocupaban. Tales circunstancias hicieron que ya no se especulara y la conspiración comenzó a tomar forma, pues temían que la agitación presente en El Salvador derivara en una situación revolucionaria similar a la nicaragüense y que con la victoria de las potenciales fuerzas populares el ejército desapareciera como cuerpo organizado, así que había que moderar la situación para que esto no ocurriera.

La reacción dentro del gobierno y la oligarquía ante la caída del régimen de Somoza, fue contraria a lo que se podría haber esperado, en lugar de realizar reformas de beneficio social, como la Reforma Agraria, que evitaran una polarización mayor de la sociedad que pudiera derivar en revolución, los oligarcas y militares del gobierno incrementaron la represión, la actitud asumida vino a agudizar y acelerar el conflicto político y el proceso de polarización que se desarrollaba en El Salvador. Para quienes detentaban el poder, la hipótesis del complot comunista, que formulaban a raíz de cada intento de ruptura del

⁴ Selser, Gregorio, "Hispanoamérica en el Umbral de la Década de 1980", *Revista Nueva Sociedad*, núm. 47, Buenos Aires, Argentina, marzo-abril de 1980, pp. 47-58.

régimen de exclusión, se había convertido en realidad, de ahí la intensificación de las actividades represivas por parte de los grupos paramilitares y de seguridad del estado.

De manera paralela, las asociaciones cívicas del sector intransigente de la clase dominante renovaron la propaganda anticomunista contra la iglesia y los frentes de masas, las personas que esas asociaciones nombraban en sus denuncias, aparecieron después asesinadas o eran desaparecidas. “Hasta septiembre de 1979, la cifra de muertes ocurridas por motivos políticos a lo largo del año, se calculaba en 800”.⁵

Si la caída de Somoza produjo entre los altos mando militares y la oligarquía la creencia de que en el ajedrez del complot comunista internacional el turno siguiente era el de El Salvador, entre los sectores medios y populares creó un gran entusiasmo, “que era expresado en el corear de las consignas y en las pintas de la capital ‘Si Nicaragua venció, El Salvador vencerá’”⁶. Una nueva ola de movimientos reivindicativos por demandas sociales, políticas o económicas se desató.

Al mismo tiempo que el gobierno desataba una nueva ola represiva, el general Romero trató de calmar a los sectores populares y medios con la promulgación de medidas tendientes a mejorar la situación de la crisis, como:

“...la emisión de un decreto de alza general de salarios de 20%, ‘para evitar que en El Salvador pase algo como lo de Nicaragua’; el levantamiento del estado de sitio; la autorización de retornar al país a dirigentes de la oposición legal, [...]; el anuncio de que las elecciones presidenciales, programadas para 1982 se adelantarían y serían supervisadas por una comisión de la OEA, [...], además de una serie de cambios económicos y sociales, dirigidos a ‘neutralizar todo foco de perturbaciones que amenacen desestabilizar nuestras instituciones republicanas...’ y, por último, la invitación a la Cruz Roja Internacional y a la nacional a visitar las cárceles ‘para que constaten que aquí no existen presos políticos’.”⁷

⁵ Gordon, Rapoport, Sara, *Crisis Política y Guerra en El Salvador*, México, Siglo XXI Editores; Instituto de Investigaciones Sociales (UNAM), 1989, pp. 267-268.

⁶ *Ibidem*, p. 268.

⁷ *Ibidem*, p. 269.

Sin embargo, la solución a la crisis ya no dependía del gobierno. Los primeros contactos conspirativos entre militares y miembros del Foro Popular se iniciaron a principios de septiembre de 1979. El centro conspirativo era la Maestranza del Ejército, cuyo jefe era el coronel Jaime Abdul Gutiérrez, los militares se pusieron en contacto con los miembros del Foro Popular, con elementos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, con Monseñor Romero y miembros de algunas organizaciones de masas. Asimismo, se iniciaron pláticas con miembros de la embajada norteamericana para saber su punto de vista acerca del plan de derrocamiento.⁸ El gobierno de Carter dio el visto bueno al golpe de estado, basando su decisión en las así llamadas “Lecciones de Nicaragua”.

De acuerdo los diversos sectores opositores, a excepción de algunos frentes de masas, y con los norteamericanos apoyando, se pusieron en marcha los planes. El 15 de octubre de 1979, el general Romero fue derrocado por un sector del ejército salvadoreño conocido como el Movimiento Militar Revolucionario (2MR) comandados por el coronel Adolfo Majano, quien sublevó una guarnición de la capital, y formó una Junta Cívico-Militar o Junta Revolucionaria, después de anunciar la Proclama de la Fuerza Armada de la República de El Salvador, que admitía la necesidad de una reforma agraria, denunciaba las violaciones a los derechos humanos, la corrupción y la falta de capacidad del régimen; además, señalaba el desastre económico, así como los atropellos generados por “antiguas estructuras económicas, sociales y políticas, que han prevalecido tradicionalmente”⁹, y los “tímidos cambios de estructuras [...] frenados por el poder político y económico de sectores conservadores, los cuales han defendido sus privilegios ancestrales de clases dominantes”¹⁰. La proclama proponía la necesidad de cesar la violencia, disolviendo a las organizaciones paramilitares; la necesidad de permitir partidos políticos de todas las

⁸ *Op.Cit.*, Castro Morán.

⁹ *Ápud.* Castro Morán, *Op.Cit.*, p. 268.

¹⁰ *Ápud.* Castro Morán, *Op.Cit.*, p. 268.

ideologías y los sindicatos, y la necesidad de “adoptar medidas que conduzcan a una distribución equitativa de la riqueza nacional”.¹¹

El golpe de estado significó la irrupción de los sectores moderados salvadoreños al gobierno, también mostró que éstos ya no estaban dispuestos a que los oligarcas y militares manejaran los destinos de la nación, pues era hora de poner en marcha medidas que evitaran que El Salvador cayera en manos de los extremistas, tanto de derecha como de izquierda. A partir de ahora contarían con un nuevo aliado, los Estados Unidos que frente a los hechos acontecidos en Nicaragua decidieron romper su alianza con los oligarcas y los altos mandos militares, y establecer y otorgar su apoyo a los grupos moderados, ya que esto significaría seguir manteniendo la influencia en el país y en salvaguarda de sus intereses y su seguridad nacional dentro del contexto de Guerra Fría que se vivía para entonces.

Así los altos mandos militares y oligarcas antirreformistas fueron desplazados del gobierno en el que habían permanecido desde 1932, por lo tanto perdieron la capacidad de mantener el *statu quo* que le convenía a sus intereses, además rompió la alianza con los norteamericanos que hasta entonces les había permitido mantener el estado de las cosas, así que tuvieron que elegir entre morir política y socialmente o incorporarse al nuevo sistema que deseaban imponer los moderados apoyados por los Estados Unidos.

1.2 UN INTENTO POR COMPONER EL RUMBO: LA PRIMERA JUNTA CÍVICO-MILITAR

Los sectores moderados, instaurados en el gobierno, buscaron establecer un sistema político que apoyara la democracia con elecciones periódicas y transparentes; un sistema económico con reformas moderadas que permitan la subsistencia del pueblo dentro de los principios del capitalismo y un sistema social promotor, protector y respetuoso de los derechos humanos; para la puesta en marcha de su programa los moderados contaron con el apoyo de los Estados Unidos que habían roto su alianza estratégica con los militares y oligarcas antirreformistas. Pero no todo era consenso en la

¹¹ *Ápud.* Castro Morán, *Op.Cit.*, p. 268.

sociedad salvadoreña, los moderados se toparon con la férrea oposición de la oligárquica que buscaba el retorno a la situación anterior a 1979, y con la desconfianza de ciertos sectores de la sociedad que consideraban al golpe y al nuevo gobierno como una estrategia norteamericana para frenar la efervescencia de los sectores populares y se mantenían expectantes a las decisiones del gobierno y sobretodo a las reformas prometidas.

Romero fue sustituido por un Junta Cívico-Militar, que duró apenas 75 días y que estuvo compuesta por cuatro figuras que representaban a la derecha moderada así como la izquierda moderada del espectro político salvadoreño. La Junta estuvo integrada por los coroneles Arnoldo Majano y Jaime Abdul Gutiérrez, así como por el representante del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) Guillermo Ungo, el rector de la filial de la Universidad Centroamericana (UCA) de San Salvador (éste y aquél formaban parte del Foro Popular), así como por Román Mayorga (independiente), y el presidente de la Cámara de Comercio (afiliada a la ANEP), Mario Andino.

La Junta comenzó su gestión decretando la disolución de ORDEN, prometió hallar y liberar a los presos políticos, nacionalizar el negocio de la exportación del café, establecer salarios mínimos e iniciar un programa de reforma agraria¹². En general cumplir con los postulados suscritos en la Proclama de las Fuerzas Armadas.

La agenda declarada estremeció de inmediato a los sectores antirreformistas dentro de las fuerzas armadas y a sus aliados oligárquicos, también consternó a algunos miembros derechistas que se habían colado al nuevo gobierno, a quienes no les convenía la aplicación de reformas, en consecuencia ambos sectores se dedicaron a sabotear todos los intentos del gobierno. Los prisioneros políticos no fueron liberados y los miembros de ORDEN simplemente se unieron a otras bandas armadas y continuaron con la represión, tal como lo denunció un informe de la OEA, sin que el gobierno reaccionara. El terrorismo y la violencia aumentaron desproporcionalmente.

¹² LaFeber, Walter, *Revoluciones Inevitables: La Política de Estados Unidos en Centroamérica*, San Salvador, El Salvador, Universidad Centroamericana (José Simeón Cañas), 1989, Colección Estructuras y Procesos, Vol. 17, p. 322.

El apoyo del gobierno estadounidense significó un cambio de rumbo en la política exterior de los Estados Unidos. La administración Carter jugó sus cartas en El Salvador, en donde intentó, aprovechando la existencia de un sector moderado y “antifascista” en las fuerzas armadas, colaborar en la construcción de un gobierno cívico-militar lo suficientemente amplio como para aislar realmente a la extrema izquierda revolucionaria y a la ultraderecha antirreformista, principal impulsora (a juicio de Washington) de las violaciones a los derechos humanos. Algo que no se pudo llevar a cabo durante la crisis nicaragüense.

Para los Estados Unidos, el golpe de Estado fue un alivio enorme. Pareció resolver dos problemas principales: por un lado se “libró del gobierno de Romero y de sus espantosos records en los Derechos Humanos y debilitó a la izquierda, que estaba obteniendo apoyo diario a lo largo de todo el país a medida que la represión crecía”.¹³

El apoyo estadounidense a la Junta Salvadoreña se vio reforzado por las declaraciones de los miembros de la misma, quienes oficialmente se comprometieron a respetar los “Derechos Humanos y seguir una política de cambios económicos, incluyendo la Reforma Agraria”.¹⁴ La misma posición fue expresada por las Fuerzas Armadas Salvadoreñas, parecía que la Junta Revolucionaria estaba a favor del cambio y que el gobierno estaba en manos del sector moderado y progresista de la sociedad salvadoreña, con lo cual los intereses, la influencia y la seguridad de los Estados Unidos estaban salvaguardados.

La Junta Cívico-Militar surgida del golpe del 15 de octubre de 1979 reunía gran parte de los requisitos planteados por la administración demócrata, en el modelo de las “democracias viables” para aislar y dividir a la izquierda radical, definida como el “enemigo principal, y los Estados Unidos podían así apoyar y mantener a un gobierno amplio, con predominio de los moderados”.¹⁵ Los Estados Unidos se apresuraron en

¹³ *Ibidem*, p. 50.

¹⁴ Menéndez Rodríguez, Mario, *El Salvador: el porqué de esta guerra*, Bogotá, Colombia, Oveja Negra, 1980, p. 94.

¹⁵ *Op.Cit.*, p. 50.

ofrecer el restablecimiento de la ayuda militar y económica norteamericana a El Salvador. La restitución del apoyo fue un intento de los norteamericanos de readecuar el sistema político salvadoreño a los principios de promoción de los derechos humanos y de la democracia preconizados por la administración Carter. Se declaró oficialmente que la posición del gobierno norteamericano era de “apoyo a la Junta, reconociéndola como una fuerza estabilizadora en El Salvador que podría salvaguardar al país de la dominación totalitaria de los extremistas de izquierda o de la derecha”.¹⁶ Basado en esto, los Estados Unidos se prepararon para brindarle al gobierno salvadoreño millones de dólares en ayuda económica y militar.

A pesar de las grandes expectativas de cambio que generó el nuevo gobierno, no todos los miembros del gobierno compartían los mismo objetivos o medios para la transformación del país. Por un lado, estaban los miembros militares, coroneles Majano y Gutiérrez; el primero, identificado con los postulados contenidos en la Proclama de las Fuerzas Armadas y, el segundo, con el plan reformas-contrainsurgencia, “entre ellos existían profundas diferencias en cuanto a convicciones morales y mística revolucionaria, orientada al fiel cumplimiento de la Proclama...”.¹⁷ La UCA tenía un programa definido de cambios estructurales, postura que coincidía con los miembros del MNR. Por su parte, la ANEP se oponía firmemente al programa económico-social de la UCA, para lo cual se hacía valer de los ministerios claves que controlaba a través de sus personeros en Planificación, Economía, Hacienda, Interior y Justicia, quienes en vez de cambios estructurales optaban por un programa de emergencia nacional. El PDC presionaba por elecciones lo más pronto posible. Las discrepancias derivaron en una gradual desintegración del Foro Popular dado que los intereses de los partidos políticos, los frentes de masas y otros grupos no coincidían en lo absoluto,¹⁸ esta situación ocasionó la inoperatividad del gobierno, tanto en la promulgación de las reformas como en el cese de la represión.

¹⁶ *Op.Cit.*, p. 50.

¹⁷ *Op.Cit.*, Castro Morán, p. 277.

¹⁸ *Ibidem.*

A las diferencias programáticas dentro del gobierno se sumaba la oposición de la oligarquía y la desconfianza de los frentes de masas. La oposición de la oligarquía se expresaba por medio de la represión a través de sus grupos paramilitares y de sus aliados dentro de las fuerzas armadas y al sabotaje desde el interior del gobierno por medio de los personeros que se mantenían en los órganos del estado. Los sectores populares, por su parte, se dedicaban a denunciar al nuevo gobierno como un títere de los norteamericanos y protector de sus intereses; a las reformas las veían como paliativos destinados a calmar a la sociedad y frenar el proceso revolucionario en el que creían que se encontraba El Salvador.

Pero la acción desestabilizadora no provino sólo de los oligarcas y de los frentes de masas, sino también de los miembros del gobierno de la Junta quienes se suponen debían de iniciar el proceso reformista. Un sector del PDC dirigido por José Napoleón Duarte, presionó para que la Junta llamara a elecciones presidenciales inmediatamente. Este sector, tampoco tenía un proyecto reformista, sólo deseaba el poder político; por otro lado, los militares del gobierno –por su afán de mantener unido al ejército- dieron el Ministerio de Defensa al coronel José Guillermo García, cercano a la oligarquía, quien siguió estimulando la represión.

A la ineficacia del gobierno, debido a los sabotajes internos y externos, se añadió el incremento gradual de la represión desatada a partir de 1979 por parte de los grupos paramilitares apoyados por los militares antirreformistas, acciones que estuvieron destinadas a desestabilizar al régimen. Todo ello profundizó la crisis salvadoreña e imposibilitó la promulgación de las reformas prometidas por la Junta, provocando que las acciones reivindicativas de los frentes de masas se incrementaran y las denuncias de las diversas organizaciones sociales se radicalizaran. Este grave deterioro de la situación llevó a Monseñor Romero a señalar, el 4 de noviembre de 1979, que: “los Cuerpos de Seguridad están reprimiendo en una forma brutal, más brutal que en el régimen anterior, porque tratan de evitar que gane credibilidad el nuevo gobierno [...]”.¹⁹

¹⁹ *Ibidem*, p. 288.

Mientras los civiles de la Junta vociferaban rabiosamente en contra de la oligarquía y ofrecían el pronto advenimiento de reformas de beneficio popular, los aparatos armados del mismo gobierno continuaban con la represión en defensa de los intereses de la clase dominante. En estas condiciones, el Foro Popular comenzó a desmoronarse y los partidos en el gobierno, se vieron obligados a poner un ultimátum al ejército, amenazándolo con quitarle su apoyo y retirarse tanto de la Junta como del gabinete si no se aceptaban un conjunto de condiciones relacionadas con las reformas y el cese de la represión.

La falta de una respuesta efectiva a las demandas de los civiles de la Junta por su contraparte militar, trajo como consecuencia que el gabinete de gobierno renunciara en bloque, con la excepción del Ministro de Defensa, coronel García. Los tres miembros civiles de la Junta renunciaron el 3 de enero de 1980 y también otros altos funcionarios. Con ello se dio fin a la primera Junta de Gobierno emanada del golpe de estado de 1979.

Durante el actuar de la Junta, los Estados Unidos apoyaron y mantuvieron al gobierno, con la idea de que impulsarían los cambios políticos, sociales y económicos necesarios para la mejor distribución de la riqueza y la reducción de los fuertes problemas sociales por los que el país atravesaba, con la idea de que el gobierno consiguiera estos objetivos los estadounidenses brindaron su apoyo total a la Junta, sin embargo, fueron incapaces de controlar a sus antiguos aliados, quienes continuaron saboteando los intentos de reforma del gobierno y reprimiendo a la sociedad. Asimismo, el gobierno norteamericano permaneció callado ante el creciente número de masacres y asesinatos a manos de los cuerpos de seguridad salvadoreños y grupos paramilitares después del golpe. La omisión norteamericana facilitó que la primera Junta de gobierno se derrumbara y profundizó la crisis en lugar de subsanarla.

1.3 SEGUNDA JUNTA: LA JUNTA DEMOCRISTIANA

Con los elementos civiles fuera del gobierno, quienes iniciaron un proceso de dispersión, tuvieron que pasar a la clandestinidad o tuvieron que salir del país para evitar la muerte. Para sustituir a los miembros civiles de la Junta, los militares y los dirigentes del PDC comenzaron a efectuar reuniones para, mediante un pacto, compartir el poder. Con

esta acción, la democracia cristiana traicionó a sus antiguos aliados del Foro Popular. A partir de este momento la Junta se conoció como Junta Demócrata Cristiana.

En los primeros días de 1980 se iniciaron los pasos para la formación de una nueva Junta de Gobierno, la cual quedó constituida el 9 de enero. La integraron los doctores Antonio Morales Erlich y Héctor Dada, miembros del PDC y el independiente doctor José Ramón Avalos. Por la parte militar, la integraron los coroneles Adolfo Majano y Jaime Abdul Gutiérrez. Al mismo tiempo de que se instauró la 2da. Junta de Gobierno, la Democracia Cristiana y las Fuerzas Armadas signaron un pacto el cual contenía compromisos en los campos económicos, social, político y militar.

La incorporación de la Democracia Cristiana a la dirección de la Junta no contribuyó al desarrollo de las posturas intermedias, ni en la sociedad ni en el interior de los órganos de gobierno. En el avance de la polarización incidió el creciente fortalecimiento de los mandos más conservadores de las fuerzas armadas, las repercusiones de la renuncia de los representantes del Foro Popular, al igual que la actividad desplegada por quienes sustentaban las posturas más excluyentes de la clase dominante.

El cambio de miembros dentro de la Junta no significó el mejoramiento de la situación, por el contrario, la represión continuó. Las reformas no llegaban, la sociedad cada día se polarizaba más y las organizaciones de masas creían cada vez menos en el gobierno y se lanzaban a las calles a expresar su descontento; era cada vez más evidente que los verdaderos gobernantes del país eran los oligarcas y sus aliados militares.

A estas dificultades se sumaban los problemas internos dentro del PDC a principios de 1980; el hecho que vino a ser el punto álgido de la crisis demócrata cristiana se dio en marzo de 1980 cuando fue asesinado el procurador general Mario Zamora, miembro de la dirección Demócrata Cristiana, a manos de las organizaciones paramilitares de derecha, lo que trajo la renuncia irrevocable del Dr. Héctor Dada Hirezi, prominente democristiano, justificó su renuncia desde el exilio en México, declaró que “no pudo seguir prestando un paraguas de progresismo a un régimen inmerso en una profunda represión [...] El prometido diálogo con las organizaciones populares no se realizó y las posibilidades de

generar reformas con apoyo del pueblo, se alejaron hasta sitios inalcanzables.”²⁰ Sobre el PDC, señaló: “Sólo en la cúpula integrada por el recalcitrante ultraderechista José Napoleón Duarte y sus seguidores [...], están de acuerdo en compartir migajas de poder. Los dirigentes están solos y empecinados.”²¹ El asesinato del Dr. Zamora y la renuncia del Dr. Dada, tuvo como consecuencia la petición formal de algunos miembros del PDC para que se retirara del gobierno. Como respuesta a la proposición de retiro, la dirección del PDC expulsó al grupo que la sostenía, y nombró a José Napoleón Duarte, representante del ala más conservadora del partido, como miembro de la Junta.

La adhesión de Duarte a la Junta, significó que éste se encontraba aislado de varios sectores de la sociedad y de su partido. A diferencia de la década de los sesenta, la situación era idónea para los militares, ya que sabían que Duarte era muy hábil tratando con los norteamericanos así que pronto lo hicieron presidente y cabeza visible de la Junta. Ayudado por los medios de comunicación, los diplomáticos estadounidenses presentaron de inmediato a Duarte como la gran esperanza moderada, con la intención de salvar a la nueva Junta de un final como la de su antecesora y poder mantener intacta su influencia en El Salvador y evitar otra Nicaragua.²²

Con la escisión de la democracia cristiana, el aislamiento político del PDC en el interior del país se acentuó, y su capacidad de negociación residió exclusivamente en el hecho de que garantizaba el apoyo externo a la Junta de Gobierno, tanto del Departamento de Estado norteamericano como el de la Internacional Demócrata Cristiana.²³

²⁰ *Ápud.* Castro Morán, *Op.Cit.*, p. 300.

²¹ Menjívar Ochoa, Rafael, *Tiempos de Locura: El Salvador 1979-1981*, 2da. Ed., San Salvador, El Salvador, FLACSO, pp. 306.

²² *Ibidem*, p. 154.

²³ **Internacional Demócrata Cristiana (IDC)** Es una asociación compuesta por partidos políticos democatacristianos y socialcristianos de derecha de distintos países y cuya ideología, según su declaración de principios, se basaba en el "Humanismo Cristiano". La organización nació en el año de 1961 bajo el nombre de *Unión Mundial Demócrata Cristiana*. Fue creada por los Nuevos Equipos Internacionales, organización predecesora de la Unión Europea Demócrata Cristiana (UEDC), y por la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) y la Unión Demócrata Cristiana de Europa Central (UCDEC). La IDC es más comunitaria y se ubica más al centro del espectro político.

El aislamiento político del PDC; su carencia de medios para quitarle a los militares el control que ejercían sobre la toma de decisiones; la unificación de las agrupaciones de izquierda que hicieron pública su plataforma política en enero de 1980, determinaron la urgencia del PDC en lograr la puesta en marcha de las reformas prometidas. La ejecución de reformas, que formaba parte de la estrategia de la Democracia Cristiana, se convertía en la última posibilidad para que esta organización reconstruyera la base de sustentación que había perdido a lo largo de la década de los setenta y, a la vez, de presentar una alternativa al programa difundido por la CRM, con el objeto de detener las crecientes simpatías que ésta concitaba entre la población. El interés por llevar a cabo reformas no era exclusivo del PDC. También el gobierno norteamericano, que venía apoyando y comprometiéndose de manera progresiva en la crisis salvadoreña, se inclinaba por la pronta ejecución de cambios en la estructura económica. La intromisión del Departamento de Estado se había incrementado de modo acelerado, haciéndose más claro a partir del momento en que la Democracia Cristiana pasó a formar parte de la Junta.

Los Estados Unidos continuaban proporcionando ayuda económica y militar para la manutención de la Junta, pues en apariencia era de corte reformista y su aliado la Democracia Cristiana era la que “gobernaba”, en realidad los verdaderos detentores del poder eran los militares en alianza con la oligarquía antirreformista quienes impedían cualquier intento de reforma que atentara contra sus intereses. Dicha situación generó una evidente crisis de legitimidad del Estado y puso al país en peligro de “caer” en manos del comunismo internacional. Además del apoyo y de la ayuda, para evitar la caída de la Junta, la Casa Blanca dispuso de una serie de proyectos para El Salvador, para así darle la fachada de un gobierno democrático y de consenso general a nivel interno, a la vez debilitar a los grupos guerrilleros operantes en el país.

El programa impulsado por la Casa Blanca se basó en el modelo de reformas-contrainsurgencia, apoyado por la administración Carter. El programa propuso la promulgación de reformas económico-sociales con el objetivo de crear una base social de apoyo al gobierno que lo dotara de legitimidad; al mismo tiempo planteó como principal

objetivo la destrucción del recién unido movimiento opositor insurgente mediante la combinación de las reformas y de una guerra de contrainsurgencia “limpia” (respeto a los derechos humanos), para llevar a cabo esta lucha “limpia” el diplomático norteamericano James Cheek prometió 36 asesores militares para que el ejército salvadoreño llevara a cabo la contrainsurgencia²⁴; el modelo en cuestión debía permitir una transformación económica adecuada y “salvar” al país del comunismo. Sin embargo, no todos los sectores de la Junta estaban de acuerdo con dicho modelo, en oposición a lo impulsado por Washington se encontraba el modelo de reformas-democracia impulsado por los pocos sectores progresistas que quedaban en la Junta. El proyecto progresista promovía las mismas reformas que el plan de la Casa Blanca, pero difería en cuanto a que se deberían realizar elecciones limpias para con ello poder entablar negociaciones con los grupos guerrilleros y establecer la paz en el país y no derrotarlos por la vía militar, este programa pronto fue desechado con la salida gradual del gobierno de sus impulsores.

Para febrero de 1980 dos programas políticos se encuentran confrontados. Por un lado, el de reformas-contrainsurgencia apoyado por los demócratas cristianos y por la administración Carter; por el otro, estaba el que impulsaban los sectores gubernamentales más recalcitrantes, auspiciados por los oligarcas, que consistía en no cambiar las estructuras económicas, sociales o políticas del país y si contemplaba una guerra frontal y total, apoyada y patrocinada por Estados Unidos, en contra de las organizaciones guerrilleras y de masas. Este plan era conocido como el oligárquico-contrainsurgente. El proyecto que se impuso para tratar de resolver la situación salvadoreña fue el que promovían los Estados Unidos; ello se tradujo en la disposición del gobierno para poner en práctica el paquete de reformas recomendado por los expertos norteamericanos: reforma agraria, reforma bancaria y estatización del comercio exterior, al mismo tiempo significó un mayor apoyo económico y militar del gobierno de Washington para derrotar a los revolucionarios.

²⁴ *Op.Cit.*, LaFeber, p. 324.

Mientras ofrecía suministros al ejército salvadoreño (a principios de 1980 solicitó 5.7 millones de dólares) Carter presionaba a la nueva Junta para que llevara a cabo las reformas, en especial la reforma agraria, que a su juicio era la de mayor importancia por las repercusiones positivas que traería para la Junta en detrimento de los grupos opositores. Anunciado con mucha publicidad, el programa se convirtió en la pieza central de la estrategia salvadoreña de los Estados Unidos. El Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre, un grupo anticomunista establecido por la Federación Americana del Trabajo,²⁵ varias corporaciones multinacionales norteamericanas y Roy L. Posterman, un profesor de la Universidad de Washington, que había elaborado las famosas reformas agrarias de Japón y Corea en la década de los cuarenta, fueron los autores más importantes del plan de Reforma Agraria para El Salvador. La contribución salvadoreña a la planificación de su propio programa de reforma no fue importante.²⁶

Con el apoyo y asesoramiento norteamericano, los gobernantes de la Junta se dispusieron a la elaboración de reformas, principalmente la agraria, en la búsqueda de estabilizar el país. El 5 de marzo de 1980, la Junta de Gobierno emitió la Ley de Reforma Agraria, cuya primera etapa contemplaba la expropiación de “376 grandes propiedades mayores de 500 hectáreas, que abarcaba una superficie de 224 083 hectáreas, y repartirlas a campesinos agrupados en cooperativas y asociaciones comunitarias.”²⁷ Dos días después, se promulgaba la Ley de Nacionalización de la banca, que colocaba bajo el control del Estado el “51% de las acciones de las instituciones financieras; otro 20% podría ser adquirido por empleados de esas entidades y el 29% restante por inversionistas particulares.”²⁸

²⁵ **La Federación Americana del Trabajo (AFL por sus siglas en inglés)** Fue una de las primeras federaciones de sindicatos en los Estados Unidos de América. Se fundó en Columbus, Ohio, en 1886 por Samuel Gompers. La Federación fue el sindicato más grande en los Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX. El sindicato representó un unionismo conservador *simple y puro* que velaba por las condiciones laborales por encima de los objetivos políticos. Concibe al sistema capitalista como un camino para el mejoramiento del trabajo.

²⁶ *Op.Cit.*, LaFeber, p. 326.

²⁷ Browning, David, “Agrarian Reform in El Salvador”, *Journal of Latin American Studies*, Vol. 15, núm. 2, noviembre de 1983, p. 408.

²⁸ *Op.Cit.*, Gordon Rapoport, pp. 301-302.

Las reformas a la tenencia de la tierra fueron acompañadas de un aumento salarial a los trabajadores de la industria, y una ley dirigida a controlar la posesión y porte de armas de fuego. También estaban dirigidas a recomponer la base de legitimidad de la Junta y restar fuerza a las organizaciones de masas y militares.

Su anuncio no gustó a los oligarcas, sobretodo, a la agraria que era la que más vio afectados sus intereses y su posesión más preciada, la tierra. El descontento oligárquico se expresó a través de manifestaciones, actos de repudio y declaraciones por medio de la prensa, la radio y la televisión en donde se acusaba a los reformistas de comunistas y antipatriotas. Por su parte, las organizaciones de masas y guerrilleras veían con recelo las reformas, pues veían en éstas el peligro de perder su apoyo social y, con ello, la pérdida de la posibilidad de aplicar su propio programa político.

La promulgación de las reformas no se tradujo en la disminución de la crisis nacional, ya que las acciones represivas por parte de los grupos de derecha continuaban con total impunidad y se incrementaban día a día, entre sus víctimas más significativas se encontró Monseñor Oscar Arnulfo Romero, asesinado en marzo de 1980, personaje crítico de las injusticias del sistema, de la oligarquía y del gobierno; aliado de los sectores populares y defensor de los derechos humanos; también los grupos guerrilleros continuaban con sus operaciones de secuestros, ajusticiamientos, robos, acciones propagandísticas, etcétera. Ambos bandos generaban inestabilidad y crisis a El Salvador, dificultando la solución de la misma.

A pesar del ambiente que vivía el país, para finales de marzo y comienzos de abril se puso en marcha la aplicación del programa de Reforma Agraria decretado a principios de marzo. Ésta comprendía tres etapas: “la Fase I, en la cual el gobierno compraría las propiedades superiores a las 500 hectáreas y luego distribuiría la tierra entre los campesinos y las cooperativas; la Fase II, en la cual el gobierno repetiría el proceso con las fincas entre las 100 y 500 hectáreas; y la Fase III o ‘tierra para quien la trabaja’, en el cual

los aparceros con la ayuda del gobierno podrían convertirse en propietarios de las pequeñas parcelas de tierra que había alquilado.”²⁹

Sin embargo, únicamente la Fase I se cumplió parcialmente debido a la represión desatada en contra de los funcionarios encargados de ejecutarla y en contra de los campesinos beneficiados, entre enero y agosto de 1980, el número de campesinos muertos fue más de la mitad del número de todos los civiles asesinados; además, las artimañas aplicada por los oligarcas para entorpecer la aplicación de la reforma fueron muy efectivas.

El programa de Reforma Agraria no era lo que parecía. Si la Fase I costó muchas vidas y dio menos resultados de los esperados, la Fase II y III no empezaron. La segunda fase golpeaba directamente las plantaciones de café, algodón y caña de azúcar, principal sustento de la economía de agroexportación de El Salvador. Ni el gobierno, ni la economía aguantarían esa sacudida. De hecho, la violencia creciente y la simple amenaza de reformar lanzaron a la economía en picada. “Entre 1978 y 1981, [...], unos 5 mil millones de dólares de capital privado se fugaron del país. En Washington, nunca nadie soñó en reponer esa pérdida con la ayuda norteamericana.”³⁰

La autoridad y la legitimidad del Estado, su capacidad ejecutoria y de control, se hallaban severamente deterioradas, bajo el efecto combinado de la pugna interna en los organismos del Estado, la acción de las organizaciones políticas y paramilitares de derecha, las campañas del ejército contra las organizaciones guerrilleras, la represión desatada a raíz de la aplicación de la Reforma Agraria, la actividad militar de las organizaciones guerrilleras, los paros, los mítines y la concentraciones dirigidas por las organizaciones de masas, eran signos del deterioro del Estado, y de la polarización del país, que se aceleró a partir del asesinato de Monseñor Romero.

²⁹*Op.Cit.*, Browning, p. 416.

³⁰*Op.Cit.*, LaFerber, p. 328.

La fuga de divisas y el cierre de empresas no habían hecho sino agravarse a lo largo del año, a pesar de los cuantiosos préstamos otorgados por Estados Unidos para lograr el repunte de las actividades económicas, y por esa vía ampliar y reforzar el apoyo de pequeños y grandes empresarios a la Junta. La inversión realizada de 52 millones de dólares a mediados de año, se mostró poco eficaz para resolver los problemas económicos del país.³¹

Todos estos hechos vinieron a profundizar la crisis, debido principalmente a la oposición, tanto de los oligarcas como de los grupos revolucionarios y de masas, a las reformas, ya que ninguno las aceptó, a los primeros les afectaba sus intereses y capitales, a los segundos les parecían un paliativo que no resolvía en profundidad el sistema de explotación imperante, así como su éxito significaría la pérdida de la posibilidad de poner en marcha sus propias reformas económicas, sociales y políticas; es por ello que ambos bandos se oponían a su aplicación efectiva colaborando a incrementar la crisis.

Un hecho que contribuyó al deterioro de la situación fue la divulgación pública de que el coronel Majano, miembro militar de la Junta, sostenía conversaciones secretas con miembros de las FARN para realizar una posible insurrección popular apoyada por los oficiales adeptos a Majano. La noticia ocasionó que los partidarios de Majano que tenían mando de tropa fueran removidos de sus cargos y trasladados a puestos de gobierno, y sus cargos fueron ocupados por oficiales partidarios de la represión. Así el ejército pasó a manos de los sectores más represivos y aliados de la oligarquía entorpeciendo aún más la labor reformista del gobierno y profundizando la crisis salvadoreña.

En el campo de los órganos del Estado, la virtual derrota de las posiciones moderadas dentro de la institución armada, que significó la unificación de criterios en el alto mando militar a través de la neutralización de una corriente y la determinación de la represión como vía para desactivar la acción reivindicativa opositora, representó dentro del gobierno la consolidación de la dominación de la derecha y por ende el aumento de la

³¹*Op.Cit.*, Menjívar Ochoa.

represión como forma de acabar con la efervescencia de los organizaciones populares y guerrilleras. El coronel Majano, representante de los sectores reformistas, fue expulsado de la Junta y relevado de toda responsabilidad política.

A pesar del incremento incesante de la represión, la ayuda norteamericana siguió fluyendo, pese a las amenazas de Carter de recortarla, evidenciando el miedo a la izquierda y a que El Salvador se convirtiera en una segunda Nicaragua o una tercera Cuba. Por otro lado, la ayuda también muestra que Estados Unidos consideraba a la derecha oligárquica como no apta para gobernar el país. Es por ello que se hizo necesario fortalecer al gobierno de la Junta, ya que esto significaba apoyar una opción moderada y dispuesta a acatar las directrices norteamericanas, aunque en los hechos las posiciones derechistas iban ganando terreno dentro del gobierno.

En este contexto, el 15 de octubre de 1980 la Junta Democristiana fijó las fechas de las próximas elecciones constituyentes y presidenciales, a realizarse, respectivamente, en marzo de 1982 y 1983. El anuncio de elecciones abrió la posibilidad a la legitimización por la vía de las urnas a las posiciones más recalcitrantes de la clase dominante, cuya incapacidad de modernización contribuyó a la polarización de la sociedad en la década de los años setenta.

Al finalizar el año 1980 el panorama salvadoreño no podía ser peor, las reformas estaban paralizadas, el gobierno había sido cooptado por sectores derechistas que promovían la represión como medio de resolver la crisis, aumentando a 7 500 los salvadoreños asesinados por motivos políticos durante ese año. En general, el país estaba en caos, ya nadie creía en el gobierno y poco a poco se acercó el fantasma de la guerra civil.

Respecto a los sectores populares, éstos fueron disminuyendo poco a poco sus huelgas y marchas, en especial después de la muerte de Monseñor Romero y debido, principalmente, al incremento desproporcionado de la represión. Esta situación hizo más evidente que la solución a la crisis no podía ser a través de las protestas y la acción reivindicativa sino por medio de la lucha armada. Las guerrillas, por su parte, seguían

operando e incrementando sus acciones y llamaban al pueblo a la insurrección popular para destruir, desde sus cimientos, el sistema establecido por la oligarquía y construir uno nuevo basado en el socialismo.

A pesar de la evidente crisis, el proyecto norteamericano y de la democracia cristiana de establecer una democracia reformista en el país continuaba, a pesar de las trabas que oligarcas y revolucionarios ponían, esto era así por el convencimiento norteamericano de que apoyar a los oligarcas significaría la profundización de la crisis, con el peligro de que una revolución se desatara, ello traía la posibilidad que ésta terminara como la nicaragüense, con un gobierno hostil a los Estados Unidos. Para evitarlo habría que evitar la polarización de la sociedad y acabar por cualquier medio con los izquierdistas que sustentaban un proyecto totalmente opuesto a los intereses norteamericanos, por eso, se consideraba aniquilarlo. Por el contrario, lo que se buscaba con la oligarquía era su transformación de un sector represivo y antirreformista a uno reformista y demócrata, y hacerlo partícipe del sistema instaurado. Éste será el objetivo que perseguirán, a lo largo de los años ochenta, el gobierno estadounidense y los demócratas cristianos.

1.4 LA OFENSIVA FINAL DE 1981

El fracaso de la primera Junta de Gobierno y la incapacidad de la segunda Junta o Junta Democristiana para aplicar las reformas decretadas, detener la represión de los grupos paramilitares y evitar la polarización de la sociedad, trajo como consecuencia que el gobierno careciera de legitimidad y apoyo social necesarios para establecer el sistema político, social y económico que deseaba implementar, apoyado por el gobierno de los Estados Unidos. A finales de 1980 el gobierno enfrentó la primera acción armada organizada y masiva proveniente del FMLN con el lanzamiento de la Ofensiva Final.

Las acciones armadas iniciaron el 10 de enero de 1981 con el ataque a varias guarniciones del ejército y acciones reivindicativas en las principales ciudades como San Salvador, Sonsonate, San Vicente, San Miguel, Usulután, Santa Ana, Santa Tecla y otras ciudades secundarias. Conforme los días transcurrían la ofensiva se empantanaba y se convertía en un empate entre las fuerzas guerrilleras y gubernamentales, apoyadas por

grupos armados de derecha. Para el 20 de enero, resultó claro que la ofensiva había fracasado, si bien no totalmente pues el FMLN-FDR obtuvo el control de algunas zonas del norte de El Salvador, como se explicará en el siguiente capítulo.

Frente a la posibilidad de que el gobierno salvadoreño cayera en manos de una fuerza política contraria a los intereses norteamericanos; éstos no dudaron en otorgar ayuda militar ilimitada. El gobierno de Carter, que había comenzado su administración prometiendo un compromiso absoluto con los derechos humanos, tenía ahora un punto de vista muy diferente. El asesinato de las monjas y otros miles por los cuerpos de seguridad y los escuadrones de la muerte en 1979 y 1980 fueron menos importantes que el peligro de un triunfo del FMLN-FDR. El presidente recomendó rápidamente enviar ayuda militar a la Junta encabezada por Duarte desde diciembre de 1980.³²

Para el momento del juramento de Ronald Reagan como presidente de los Estados Unidos la ofensiva había sido contenida. El ejército paró los ataques a las ciudades y pueblos, si bien el FMLN había conseguido el control de algunos departamentos del norte del país, en el resto de la nación el régimen había calmado la insurrección con promesas de reforma agraria o con amenazas; éstas no eran en vano como lo había demostrado el año 1980 generando en la memoria colectiva del pueblo salvadoreño la idea de que el gobierno y los grupos paramilitares cumplían con sus amenazas. La iglesia contabilizó cerca de 10 mil asesinatos políticos en 1980, la inmensa mayoría de ellos cometidos por el gobierno o por los escuadrones de la muerte.³³

Una vez detenida la Ofensiva del FMLN, El Salvador entró en plena guerra civil y la Junta Democristiana se aprestó a contener las embestidas de la guerrilla apoyada irrestrictamente por el gobierno de Reagan en su deseo de mantener un gobierno afín a sus intereses.

1.5 LA GUERRA CIVIL (1981-1992)

³² *Op.Cit.*, LaFeber, pp. 330-331.

³³ *Ibidem*, p. 131.

Después del cese de la ofensiva, las fuerzas del FMLN comenzaron a consolidarse en las zonas donde obtuvieron el control. Establecieron gobiernos populares, mediante Poderes Populares. Al mismo tiempo, los guerrilleros se dedicaron a realizar acciones de hostigamiento.

Para enfrentar de manera efectiva estas acciones guerrilleras el gobierno se vio apoyado irrestrictamente por Washington, bajo la nueva administración republicana, encabezada por Ronald Reagan quien desde su campaña electoral había dado claves, por medio de sus discursos, de hacia dónde se dirigiría su política exterior en caso de llegar a la presidencia. En éstos enfatizaba que el origen de las revoluciones se debía a la intervención del bloque soviético-cubano, quien las incitaba y las apoyaba, todo ello enmarcado dentro del conflicto Este-Oeste que tenía un carácter geoestratégico y enmarcado dentro de una potencial Tercera Guerra Mundial; la mayoría de sus ideas de política exterior se basaban, dado su escaso conocimiento del tema, principalmente en los postulados del Documento de Santa Fe y las ideas de la embajadora ante la ONU Jeane Kirkpatrick.

Sin embargo, el presidente encontró problemas para poner en práctica sus ideas de política exterior. Después de la experiencia de Vietnam, muchos norteamericanos estaban renuentes a comprometerse en una revolución local. El nuevo gobierno trató de esquivar el problema al declarar que el conflicto de Vietnam era “una causa noble”.³⁴ Y lo que era más importante, que la problemática en Centroamérica, en especial El Salvador, no era local, sino causada por Cuba y la URSS. El mayor esfuerzo del gobierno republicano para convencer a la opinión pública norteamericana e internacional, de la intervención comunista en Centroamérica se dio a mediados de febrero de 1981, cuando el Departamento de Estado publicó el libro blanco sobre la intervención cubana y soviética en El Salvador. A los cuatro meses de su divulgación cayó bajo las críticas de la prensa y los expertos en temas de seguridad y política exterior. Estos ataques desecharon la afirmación de que altos funcionarios cubanos y soviéticos dirigían a los rebeldes del FMLN

³⁴*Op.Cit.*, LaFeber, p. 362.

con el objetivo de expandir su influencia en el área. Entonces el Departamento de Estado publicó un segundo libro, que si bien reconocía la existencia de errores en el primero, el tema central de la intervención cubano-soviética se reafirmaba. El segundo libro convenció a menos lectores que el primero. Pocos, fuera del gobierno, creyeron que el bloque soviético suministraba la mayoría de las armas y el entrenamiento a las huestes guerrilleras, ni que el comunismo internacional, y no el nacionalismo, alimentara de hecho, las revoluciones.³⁵

En el ámbito de El Salvador, cuando Reagan llegó a la presidencia, la ofensiva rebelde ya había fracasado. De pronto tuvo la oportunidad de negociar un acuerdo que pusiera fin a la revolución sangrienta. Pero el presidente se mantuvo fiel a su ideología, a pesar del apoyo de diversos países europeos y latinoamericanos a una solución pacífica. En lugar de tratar de encontrar una solución negociada, se lanzó a conseguir una victoria militar total. “Los funcionarios norteamericanos asumieron que estaban promoviendo un enfoque nuevo y más duro, cuando en realidad, continuaron con décadas de política antigua, la cual había ayudado a causar la revolución”.³⁶ La apuesta de Washington por una victoria militar parecía tener lógica porque había unos 4 000 rebeldes enfrentando a un ejército y a unos cuerpos de seguridad de 17 000 hombres entrenados y equipados por Estados Unidos.³⁷

El cambio presidencial en Estados Unidos trajo consigo un mayor énfasis en la acción desestabilizadora del comunismo como causa del conflicto y convirtió a El Salvador en un lugar de la confrontación Este-Oeste. En consecuencia, en este escenario no se podía permitir una derrota del gobierno. Las autoridades estadounidenses entendieron que también debían intentar reforzar las posiciones intermedias dentro del gobierno e impulsar reformas que restaran capacidad de convocatoria al FMLN y, al mismo tiempo, permitieran sentar las bases de un nuevo régimen político encabezado por una fuerza

³⁵ *Ibidem*, pp. 362-363.

³⁶ *Ibidem*, p. 375.

³⁷ *Ibidem*, p. 375.

moderada. En otras palabras, Reagan intentó hacer lo que Kennedy había hecho con la Alianza para el Progreso: reforzar un centro moderado que evitará la polarización de la sociedad.

Varios factores influyeron en esta toma de posición; uno de ellos fue “la presión de la opinión pública norteamericana, afectada por la violaciones a los derechos humanos y escandalizada cuando las víctimas eran compatriotas tuyas [...] y que se expresaba en las instancias legislativas de ese país.”³⁸ Las encuestas de opinión, por otra parte, mostraban que para finales de marzo de 1981, la inmensa mayoría de los estadounidenses se oponía a toda intervención militar norteamericana en Centroamérica y se mostraba escéptica respecto del enfoque Reagan. Esta situación se presentaba justo en el momento en que las fuerzas guerrilleras del FMLN y del ejército se encontraban en un empate técnico; ello a pesar de los grandes flujos de la ayuda militar enviados por Reagan. Un estudio del Pentágono concluyó que “el ejército salvadoreño, a pesar del entrenamiento de Estados Unidos, se parecía a una fuerza del siglo XIX incapaz de pelear ninguna clase de guerra, convencional o guerrillera.”³⁹

Ante la falta de preparación del ejército salvadoreño para enfrentar una lucha guerrillera, los norteamericanos se abocaron a adiestrar una fuerza especial en territorio estadounidense, la cual entró en acción, con el nombre de Brigada Atlácatl, en julio de 1981. A continuación se formaron otros dos batallones (Atonal y Ramón Belloso) especiales para la lucha contrainsurgente, y posteriormente batallones de Cazadores, que para 1984 estaban presentes en la mayoría de los cuarteles del país. Estos nuevos regimientos mostraron mejor preparación y una más alta moral que el ejército regular, y aunque no consiguieron triunfos importantes hasta 1983, sí impidieron que el ejército fuera derrotado en los primeros años de la guerra.⁴⁰

³⁸ *Op.Cit.*, Gordon Rapoport, p. 318.

³⁹ *Op.Cit.*, LaFeber, p. 375.

⁴⁰ Montobbio, Manuel, *La Metamorfosis de Pulgarcito: Transición Política y Proceso de Paz en El Salvador*, Prólogo Álvaro de Soto, Barcelona, España, Icaria, 1999, p. 105.

El intento de los Estados Unidos de reconstruir el régimen salvadoreño en torno a un centro político moderado y reformista, presentaba serias dificultades. La más importante y difícil de sortear era la posición asumida por la oligarquía y sus aliados en el ejército, quienes buscaban una regresión a la situación anterior a 1979 y veían cualquier intento de reforma como algo equivalente a comunismo. Para convencer a la oligarquía de los beneficios de las reformas y de la conveniencia de un gobierno moderado fue necesaria una participación y presión constante de Washington, que ejercería el papel de intermediario entre gobierno y oligarquía.

La presión que ejercían los Estados Unidos no rindió frutos inmediatamente pues, en El Salvador, los escuadrones de la muerte continuaban operando con toda impunidad. En promedio se encontraban decenas de civiles asesinados cada mes. Más de 40 alcaldes y miembros de los consejos municipales, quienes pertenecían al PDC del presidente de la Junta, Duarte, fueron ultimados hasta el mes de abril de 1981.⁴¹ Un importante funcionario de la Junta admitió en abril que “la violencia de derecha se ha vuelto incontrolable [...] No podemos controlar a la Policía de Hacienda ni a la Guardia Nacional.”⁴²

En cuanto a la aplicación de las reformas decretadas en 1980, éstas se encontraban obstruidas por el accionar de la clase dominante. Esta tendencia continuó durante el año 1981. Del decreto de reforma agraria de marzo de 1980, sólo se había podido aplicar la Fase I, aunque con muchas restricciones debido a las artimañas aplicadas por los afectados por el decreto. Las Fases II y III, debieron ser suspendidas por la Junta, debido a la violencia ejercida por los cuerpos paramilitares contra los funcionarios encargados de aplicarlas. El director del ISTA y dos asesores del AID (Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos) fueron asesinados en febrero de 1981.⁴³

⁴¹ *Op.Cit.*, LaFeber, p. 376.

⁴² *Ibidem*, p. 376.

⁴³ *Op.Cit.*, Gordon Rapoport, pp. 319-320.

Las reformas que ordenaban la nacionalización de la exportación del café, de la banca y del comercio exterior, continuaban vigentes, pero se hallaban sujetas a la presión de la oligarquía. Dado que los mecanismos de esas medidas eran controlados por instancias gubernamentales, esto también era un motivo que alentaba la acción de los grupos de derecha y las tentativas golpistas.

En el ámbito militar, la toma de decisiones competía exclusivamente a los altos mandos y a sus asesores norteamericanos. La Junta democristiana enfrentaba la oposición de la clase dominante respecto a la estrategia a seguir en la lucha contra el FMLN. Los asesores norteamericanos y los miembros del ejército permeados por la influencia estadounidense, proponían:

“[...] un combate global, dirigido sobretodo a aislar a la guerrilla de sus bases de apoyo, en el que el ataque militar se combinaba con medidas de carácter político [...] Esto suponía una estrategia inicial de contención, que diera tiempo para entrenar batallones especiales, capacitados para luchar contra el FMLN y, más adelante, emprender ataques masivos contra las zonas en las que la oposición armada tenía apoyo popular, así como asaltos selectivos combinados con programas de acción cívica en lugares donde el apoyo de la población al FMLN era más débil.”⁴⁴

A la estrategia sugerida por el gobierno y los norteamericanos se oponían tanto la oligarquía como sus aliados militares, quienes querían una estrategia de tierra arrasada. Si bien, la primera visión fue la que prevaleció, ello no significó la subordinación de los sectores militares conservadores. En el campo de batalla, las diferencias entre ambas visiones afectaron la unidad de comando y limitaron la eficacia de las operaciones contra el FMLN. A la vez, incidieron en el recrudecimiento de los conflictos al interior de la institución armada.

Mientras el gobierno y oligarcas se encontraban enfrentados debido a la estrategia seguida por el ejército, el FMLN obtenía victorias en los ámbitos militar y diplomático, lo que puso en alerta al gobierno y a Washington. En el ámbito militar, para agosto de 1981, el ERP tomó la ciudad oriental de Pequín. Las FPL y ERP pasaron a controlar una parte del

⁴⁴ *Ibidem*, p. 320.

territorio nacional; en septiembre y octubre realizó ataques simultáneos en siete de los catorce departamentos del país.

En el ámbito diplomático, la Comisión Externa del FDR llevaba a cabo una rápida operación de propaganda a nivel internacional, con el objeto de obtener apoyo y ganar legitimidad a nivel internacional. Su resultado más importante fue la declaración franco-mexicana, emitida en agosto de 1981.⁴⁵

En el campo de batalla las fuerzas antagonistas se encontraban en un empate. El lento avance militar del FMLN, hacía pronosticar una lucha de larga duración. Por ello, la idea de una solución política negociada en el corto plazo fue adoptada por las fuerzas guerrilleras. En octubre de 1981, los voceros del FMLN ofrecieron negociar la solución del conflicto sin condiciones previas. El Departamento de Estado norteamericano rechazó la propuesta, argumentaban que era sólo un truco de los rebeldes para ganar tiempo y separar a los Estados Unidos del gobierno salvadoreño. Además, la política norteamericana excluía tales negociaciones.

La política seguida por Washington sólo intensificó la guerra. La ayuda militar norteamericana que “sumó 6 millones de dólares en 1980 saltó a 35.5 millones en 1981 y a 82 millones en 1982”.⁴⁶ Unos 1 500 soldados salvadoreños recibieron entrenamiento especial en bases norteamericanas. La ayuda económica se “triplicó pasando de 58.5 millones de dólares en 1980 a 189 millones en 1982”.⁴⁷ A ninguna otra nación latinoamericana Estados Unidos envió más ayuda que a El Salvador. Sin embargo, la asistencia no podía hacer el trabajo; no podía, por ejemplo, empezar a compensar el

⁴⁵ **Declaración franco-mexicana** Esta declaración reconocía al FMLN-FDR como fuerza beligerante y sugería la restructuración del gobierno y el ejército, como paso previo a la realización de elecciones.

⁴⁶ *Op.Cit.*, LaFeber, p. 377.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 377.

“capital de 1.5 mil millones de dólares que salió del país rumbo a los bancos norteamericanos y suizos durante esos años.”⁴⁸

A través del apoyo económico, militar y diplomático, y de acción mediadora y reguladora entre las fuerzas políticas, Estados Unidos pretendía reconstituir el régimen y dotarlo de legitimidad. En este nuevo gobierno, los acuerdos y las negociaciones entre quienes participaban del poder deberían privar por encima de la represión; el acceso a los órganos del Estado tendría que ser por medio de elecciones, y la corporación armada debería actuar de manera unificada en defensa del orden establecido sin favorecer a un sector de la sociedad en particular, ni ocuparse de funciones de gobierno o política. Dados los estrechos lazos existentes entre militares y oligarcas, los programas de entrenamiento de oficiales y soldados salvadoreños buscaba un doble objetivo: mejorar, por una parte, la capacidad profesional y, por la otra, formar ideológicamente a los reclutas en el servicio a las instituciones y a gobiernos emanados de elecciones.⁴⁹

Al alejarse la posibilidad de una victoria militar, un segundo objetivo pareció más alcanzable. Reagan empezó a basar toda su política en las elecciones programadas para marzo de 1982. Esperaba que éstas llevaran al poder a un régimen que restara apoyo a los militares conservadores y sus aliados oligarcas, así como a los revolucionarios. Al mismo tiempo, dicha política, buscaba reconstituir el régimen, recuperar su legitimidad y conseguir la concertación de acuerdos. El objetivo de las elecciones era: elegir una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución y escoger presidente interino para gobernar hasta la realización de nuevas elecciones, primero presidenciales y luego legislativas, en 1983 o 1984.

Con el anuncio de las elecciones para la Asamblea Constituyente, los partidos se comenzaron a preparar. Por un lado, el PDC, representaba objetivos moderados de reforma, y por el otro, ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) cuyo rasgo distintivo era

⁴⁸ *Ibidem*, p. 377.

⁴⁹ *Op.Cit.*, Gordon Rapoport.

la oposición absoluta a cualquier reforma y, no sólo eso, proponía la eliminación de los revolucionarios del FMLN y sus aliados como instrumento fundamental de solución política.

El PDC trató de contrarrestar la debilidad de sus bases de apoyo, incorporando a los miembros de las cooperativas campesinas creadas a raíz de la reforma agraria de 1980, y que fueron agrupados en la UPD (Unión Popular Democrática). A su vez, ARENA contaba con el apoyo de la oligarquía, militares de alto rango y otros partidos del mismo corte como el PCN, el Partido Popular Salvadoreño (PPS) y el Partido Orientación Popular (POP) quienes se aliaron con ARENA.

Además, había otros partidos formados por sectores medios intelectuales y de corte moderado como el Partido Alianza Democrática (PAD), integrado por profesionistas e intelectuales, quienes, sin embargo, no obtuvieron un alto grado de votación.

El gobierno de la Junta, encabezado por Duarte, ofreció un lugar en las papeletas al FMLN, siempre y cuando abandonaran las armas e ingresaran al juego electoral, a lo cual los guerrilleros se negaron y, en cambio, ofrecieron el inicio de conversaciones de paz las cuales fueron rechazadas por Duarte. Así el proceso electoral inició sin la participación del FMLN.

El 28 de marzo de 1982 hubo elecciones en todo El Salvador, a excepción de algunas zonas controladas por los rebeldes. Los revolucionarios dijeron a los salvadoreños que no sufragaran, pero el número de votantes, según el gobierno, ascendió a 1.5 millones de 2.4 millones de electores posibles.⁵⁰ El asistente del secretario de Estado norteamericano Enders exaltó a los votantes por repudiar “la afirmación de la izquierda violenta de que cuenta con el apoyo popular”.⁵¹

⁵⁰*Op.Cit.*, LaFeber, p. 378.

⁵¹*Ápud.*, LaFeber, *Op.Cit.*, p. 378.

Con la esperanza estadounidense de que el PDC obtuviera la victoria, y así poder poner en marcha su plan de un gobierno moderado aliado de Estados Unidos, se inició el proceso electoral; sin embargo, dicho plan no prosperó, pues el PDC no obtuvo una victoria contundente, en la que sólo alcanzó el 35% de la votación. En cambio, ARENA recibió 26% y el PCN el 19%.⁵² Estos resultados otorgaron la mayoría en la Asamblea Constituyente, encargada de formular una nueva Constitución, a la alianza derechista y la dotaron de la legitimidad necesaria para restar alcance a las reformas y fijar límites a futuros intentos de cambio. El PDC obtuvo 24 curules dentro de la Asamblea, a pesar del apoyo estadounidense, el cual incluyó aportaciones monetarias.

Antes de las elecciones el Departamento de Estado norteamericano afirmó que sólo Duarte podía restaurar al país y denunciaron a D'Aubuisson como el "presunto" dirigente de un grupo terrorista de derecha. Después de las elecciones, Estados Unidos tuvo que aceptar a D'Aubuisson, quien fue electo presidente de la Asamblea Constituyente, ya que fue elegido por un proceso diseñado por el gobierno de Reagan. A partir de este momento la promulgación y realización de reformas tendrían que ser negociadas con la oligarquía, lo cual no sería nada fácil.

La Asamblea dominada por la derecha y dirigida por D'Aubuisson detuvo el programa de Reforma Agraria, amparada en la mayoría obtenida; los representantes de ARENA y del PCN aprobaron decretos que "autorizaban la devolución de algunas propiedades afectadas en 1980, fijaba el límite máximo de la propiedad en 245 hectáreas y otorgaba a los propietarios el derecho a mantener en reserva 150 hectáreas adicionales".⁵³ Al mismo tiempo, impidió la aplicación de la segunda fase de la reforma y puso en serios aprietos a la Democracia Cristiana. Sólo la presión norteamericana evitó un retroceso mayor en las reformas.

⁵² *Op.Cit.*, Gordon Rapoport, p. 323.

⁵³ *Op.Cit.*, Browning, p. 421

Con la Reforma Agraria, Estados Unidos planeaba ganarse las mentes y los corazones de las masas, alejándolas de los revolucionarios, pero al detenerse o dificultarse su aplicación por parte de D'Aubuisson, quien no iba a entregar la riqueza de quienes lo apoyaron en las elecciones; sin embargo, se vio presionado por el Congreso norteamericano para que la reforma continuara, el Departamento de Estado intentó poner el programa a funcionar de nuevo, pero las cosas se estancaron y la reforma no prosperó como lo esperaba Reagan.

De igual modo, la participación de miembros del PDC al frente de los ministerios del nuevo gobierno provisional, sólo se pudo llevar a cabo gracias a la presión norteamericana. Aun así, los representantes de la Democracia Cristiana tuvieron únicamente acceso a ministerios alejados de la toma de decisiones políticas y económicas.

Para frenar las pugnas dentro de la Asamblea Constituyente, que impedían el establecimiento de reformas, y para sentar las bases de un acuerdo entre las fuerzas políticas, Estados Unidos propició la firma de un pacto entre ellas. El 3 de agosto de 1982, esas fuerzas suscribieron un pacto de unidad nacional, llamado Pacto de Apaneca, en el cual "los firmantes acordaban crear un Comisión Política que funcionaría como órgano conjunto de decisión política, por encima de la Asamblea Constituyente y de los ministerios hasta las próximas elecciones. Integrarían la Comisión Política el presidente interino, Álvaro Magaña, un miembro de las fuerzas armadas y representantes de los partidos mayoritarios."⁵⁴

El acuerdo establecía, además, un mecanismo de reparto del poder; los partidos se comprometían a disminuir la intensidad de sus disputas y abstenerse de atacar al presidente. Asimismo, se fijaron plazos para emitir la Constitución y para la realización de elecciones presidenciales en 1984 y legislativas en 1985.

Las pugnas no se limitaron a las fuerzas políticas; también estaban presentes en el ejército, donde la oficialidad de tendencia conservadora se empeñaba en deponer a los

⁵⁴ *Op.Cit.*, Gordon Rapoport, p. 324.

oficiales moderados que ocupaban altos cargos en las fuerzas armadas, tal como fue la insubordinación ocurrida contra el ministro de defensa José Guillermo García. Para frenar ese deterioro de la disciplina, los representantes de las diversas tendencias militares firmaron el acuerdo y se trató de lograr alguna cohesión alrededor del gobierno interino de Magaña.

El pacto buscó dotar de legitimidad al gobierno, así como fijar los términos en que se debía dar la participación política de las distintas fuerzas, grupos, organizaciones y de la fuerza armada; además, contemplaba mecanismos para pacificar el país. El acuerdo vetaba el establecimiento de cualquier proyecto alternativo y salvaguardaba la democracia parlamentaria como forma exclusiva de gobierno. Para lograr la paz, proponía una amplia amnistía a la oposición armada y garantías para que tomaran parte del proceso electoral apenas iniciado. Con este objetivo se formó una comisión de pacificación encargada de dialogar con el FMLN-FDR.⁵⁵

A pesar del acuerdo que garantizaba estabilidad dentro del gobierno, los cuerpos represivos continuaron su accionar con total impunidad, acrecentando el número de muertos por razones políticas, incluidos miembros de la Democracia Cristiana. El ministro de Defensa, coronel García, el hombre fuerte del país, no pudo controlar a los escuadrones de la muerte. Ni siquiera a los miembros moderados de las fuerzas armadas. El cuerpo de oficiales se dividió, a pesar de haber signado el pacto, debido, principalmente, a razones ideológicas y generacionales. A principios de 1983, algunos oficiales provocaron una crisis al amenazar con sublevarse contra el coronel a menos que el ministro luchara más vigorosamente contra el FMLN. La amenaza fue sofocada gracias al apoyo norteamericano, pero García fue destituido de su cargo. En mayo de 1983, el ejército cayó bajo el control de oficiales de extrema derecha, vinculados con el terrorismo.⁵⁶

⁵⁵ Baloyra, Enrique, *El Salvador en Transición*, Trad. Margara de Siman, 3era. Ed., El Salvador, Universidad Centroamericana (José Simeón Cañas), 1987, Colección Debate, Vol. 3, pp. 270.

⁵⁶ *Op.Cit.*, LaFeber., pp. 380-381.

Mientras el gobierno salvadoreño sorteó poco a poco los problemas por los que atravesaba y que fueron zanjados a través de la firma del Pacto de Apaneca, el FMLN había logrado debilitar la presencia del ejército en Chalatenango y Morazán. También había ampliado su zona de control y, en enero de 1983, los rebeldes lanzaron ofensivas a varios poblados e incluso tomaron ciudades como: Tejuela, Suchitoto y Berlín. Para el primer semestre de 1983 las fuerzas guerrilleras obtuvieron notables avances dentro del campo militar. Esto ocasionó gran preocupación dentro del gobierno de Reagan.

Los avances militares del FMLN prendieron los focos rojos en la oficina oval, lo que trajo como consecuencia una ampliación del compromiso militar estadounidense en el país. Reagan durante un discurso pronunciado frente al Congreso norteamericano pidió que la ayuda militar fuese doblada hasta llegar, por lo menos, a los 110 millones de dólares; ampliar el entrenamiento de tropas salvadoreñas; así como elevar el número de asesores militares en el país. Sumada a sus peticiones, Reagan describió la situación en El Salvador como desoladora y culpó a los congresistas de no otorgar toda la ayuda requerida. Al mismo tiempo de la peticiones de Reagan, su embajadora ante la ONU, Jeane Kirkpatrick, solicitaba millones de dólares para poner en marcha un “plan Marshall” para Centroamérica para infraestructura económica. A la par de las solicitudes monetarias, el gobierno republicano presionó a los Demócratas Cristianos para adelantar la elección presidencial para finales de 1983, con la idea de contrarrestar apoyo al FMLN y darle mayor legitimidad al régimen.

A la par de las discusiones y presiones norteamericanas, en julio de 1983, la comisión de pacificación creada a partir de la firma del pacto comunicaba los requisitos previos para un diálogo de paz al FMLN-FDR; la propuesta fue rechazada por los revolucionarios argumentando falta de garantías y continuidad de la represión.

Dentro del gobierno salvadoreño, el pacto político suscrito entre las diversas fuerzas políticas del país significó un primer paso para aminorar las pugnas y favorecer el establecimiento de acuerdos entre las fuerzas que detentaban el poder. El resultado más relevante de dicho acuerdo quedó plasmado en la Constitución de 1983.

La nueva Constitución fue promulgada el 15 de diciembre de 1983, y entró en vigencia el 20 del mismo mes. Al mismo tiempo la Asamblea Constituyente se convirtió en Legislativa. En el aspecto agrario, la nueva carta magna retomó el límite máximo de tenencia de la tierra que decretará ARENA en la Asamblea Constituyente: 245 hectáreas. El Estado concedió un plazo de tres años a los propietarios antes de proceder a expropiar, cuando la propiedad excediera los límites permitidos.⁵⁷ En lo concerniente al Estado, fue restringida su posibilidad de intervenir en la dirección de la economía, muy acorde con la ola neoliberal impulsada por Reagan durante la década de los ochenta. El texto constitucional redujo la función del Estado a estimular las actividades económicas.

En lo tocante a las libertades de organización, la Constitución reconoció a los trabajadores rurales el derecho a organizarse, lo cual, junto con la igualación del salario entre hombres y mujeres, constituía un reivindicación del PDC. Sin embargo, esa disposición “fue severamente regulada en el código del trabajo, que prohibió la sindicalización de los trabajadores estacionales y el ejercicio del derecho de huelga en periodo de cosecha”.⁵⁸

Además, se incorporó al texto constitucional un artículo que impedía a futuro la modificación de la forma parlamentaria de gobierno, dirigido a asegurar la inmutabilidad del régimen político.

Al inicio de 1984, El Salvador tenía una nueva Constitución, con los grupos conservadores en relativa calma, ya que los escuadrones de la muerte continuaban con las amenazas y los asesinatos, que si bien éstos habían disminuido a comparación de los dos años anteriores, y en preparativos de la elección presidencial. Sin embargo, no todo se iba encarrilando según los planes de los gobiernos estadounidense y salvadoreño, pues en el plano militar, las fuerzas del FMLN se encontraban en empate técnico con las fuerzas armadas, ello podría poner en riesgo los planes de Reagan.

⁵⁷ *Op.Cit.*, Gordon Rapoport, p. 326.

⁵⁸ *Ibidem*, p. 236.

El empate militar ocasionó que Reagan considerará tres alternativas para El Salvador, las cuales había meditado a lo largo de 1983. La primera, retirar el apoyo norteamericano al gobierno salvadoreño y permitir que la revolución tomara su curso. Ésta, probablemente llevaría a la desintegración del gobierno provisional o a una campaña terrorista de exterminio dirigida por las fuerzas conservadoras, polarizando aún más a la sociedad, y haciendo más probable un triunfo del FMLN, reeditando la experiencia nicaragüense de 1979. La segunda, era negociar un acuerdo en el cual Estados Unidos trabajaría estrechamente con Venezuela y México.⁵⁹ En este escenario las elecciones no tendrían sentido. Estados Unidos trabajaría con sus aliados militares, del gobierno y de la derecha, mientras sus aliados lo harían con los revolucionarios. El objetivo sería separar a los dos extremos; el de la izquierda y el de la derecha, y crear un poder compartido entre quienes, en ambos lados, estuvieran dispuestos a un compromiso. Estados Unidos y los otros países serían los responsables de hacer cumplir el acuerdo.⁶⁰

Reagan no dio señales de interés por alguna de las dos ya que, en su opinión, una implicaba la entrega de El Salvador al “comunismo internacional” y la otra no garantizaba que la influencia estadounidense quedara intacta. Reagan y sus asesores de política exterior no tolerarían un acuerdo con el FMLN. Políticamente no tenían intención de hacer compromisos e ideológicamente pronunció varios discursos en los cuales, a lo largo de 1983, hizo un llamado a una “guerra santa contra el comunismo”. Parecía muy improbable que se retirara o promoviera un arreglo negociado.⁶¹

Esto dejó lugar a una tercera: promover las políticas tradicionales y comprometer mayor ayuda militar estadounidense. Esta opción le permitiría mantener el control del gobierno que se instaurara, basado en la legitimidad que le otorgarían las elecciones, tanto a nivel nacional como internacional, y que estuviera dispuesto a realizar reformas

⁵⁹ La elección de ambos países era porque los Estados Unidos consideraban a México y Venezuela como potencias a nivel continental con influencia en el área centroamericana y con el FMLN, principalmente México.

⁶⁰ *Op.Cit.*, LaFeber, p. 384.

⁶¹ *Ibidem*, p. 384.

moderadas, tal como había quedado plasmado en la Constitución, ello era básicamente, reforzar un centro político moderado pero con la diferencia de que ésta quedaría bajo el control de Estados Unidos. También se buscaría comprometer al ejército salvadoreño en la lucha contrainsurgente, por lo tanto se le equiparía y entrenaría lo mejor posible; además, se intentaría cambiar la imagen y la ideología de las fuerzas armadas para ser garantes y protectores del sistema político establecido por Estados Unidos en El Salvador.⁶²

La puesta en marcha de este plan había comenzado desde la promulgación de la Constitución, al menos en lo que concernía a la extrema derecha, con el propósito de moderar sus posturas y aislar a los sectores más recalcitrantes. El objetivo del plan obedecía, también, a los propósitos inmediatos de aumentar recursos y equipos destinados a combatir al FMLN, y con ello eliminar a la extrema izquierda y hacer partícipes de la negociación a los sectores moderados del grupo guerrillero. Es preciso tener en cuenta que la intención de derrotar al FMLN había estado inscrita en la meta más amplia de preservar a Centroamérica como área de influencia norteamericana, pues se pensaba que indirectamente se derrotaría a la URSS en el marco de la Guerra Fría. En contraposición, con la derecha se podía vivir, sólo se tendría que contener y convencer de la viabilidad de las reformas, pues a fin de cuentas sostenían ideas capitalistas.

La idea del cambio de ideología e imagen del ejército no era nueva, pues databa de 1981, sólo que no se había puesto en marcha debidamente dadas las circunstancias por las que atravesó el país en los tres años anteriores. El objetivo era convertir a los militares salvadoreños en defensores de ideas como libertad, soberanía, etcétera. Y cambiar la imagen de ser los cancerberos de la oligarquía y de ser los defensores del *statu quo*, y de paso limpiar su imagen de torturadores y masacradores, y convertirlos en una fuerza garante de la democracia y de las reformas iniciadas por el gobierno.⁶³

⁶² *Ibidem*, p. 385.

⁶³ Rouquié, Alain (coordinador), *Las Fuerzas Políticas en América Central*, Trad. Daniel Zadunaisky, México, Fondo de Cultura Económica, 1994, Sección de Obras de Política y Derecho, p. 246.

El plan de tener un gobierno de centro y el cambio de imagen del ejército tenía como fin el de proveerle una nueva imagen internacional al gobierno salvadoreño, sobre todo ante la opinión pública norteamericana y el Congreso, pues este último era el encargado de liberar fondos para la resolución de la crisis de El Salvador. Además, se debe recordar que en Estados Unidos era año electoral y por lo tanto Reagan no se podía dar el lujo de perder El Salvador y darles armas a los demócratas para su campaña presidencial, tal y como lo habían hecho los republicanos en el caso de Nicaragua ante la opinión pública norteamericana.

La puesta en marcha del plan inició con la presión del Departamento de Estado a los gobernantes salvadoreños para que realizaran las elecciones presidenciales en la fecha programada. Para su realización diversas agencias norteamericanas donaron alrededor de nueve millones de dólares en asesoría técnica y administrativa, para llevar a cabo la contienda electoral.

Al mismo tiempo, Washington impulsó dentro del ejército la transferencia de altos mandos conservadores a puesto burocráticos o los mandaba a retiro, y los sustituyó por oficiales que favorecían la neutralidad en las elecciones, desligados de los escuadrones de la muerte y comprometidos a ponerles un alto a su accionar. Además de ello, adoptó medidas para desautorizar a los representantes de las posiciones más intransigentes de derecha, como la negativa de otorgar una visa de entrada a Estados Unidos al dirigente de ARENA, Roberto D'Aubuisson.

1.5.1 La Elección Presidencial de 1984

Así en un ambiente complejo de guerra civil el gobierno interino de Magaña convocó a elecciones, en las cuales los principales contendientes fueron Napoleón Duarte por el PDC y Roberto D'Aubuisson por ARENA.

Duarte tuvo el apoyo irrestricto de Estados Unidos que se tradujo en fondos para la campaña electoral del PDC; además, suscribió un pacto de apoyo electoral con la Unidad Popular Democrática (UPD). A la vez, Duarte se comprometía a seguir una política

favorable a los sectores populares, a través del impulso de reformas, sobre todo la agraria; a luchar por el respecto a los derechos humanos disolviendo los escuadrones de la muerte, ello permitiría que se limpiara la imagen del gobierno y apoyar una solución política como vía para lograr la paz. Este punto parecía más una medida electorera que real, explotando el hartazgo del pueblo con respecto a la guerra.⁶⁴

Por su parte, D'Aubuisson contó con el apoyo de la oligarquía salvadoreña. Los partidarios del *statu quo ante* se agrupaban en ARENA sostenida por todo el sector privado, éstos veían en las elecciones la oportunidad de ganarle al PDC y a los Estados Unidos en su propio juego y poder poner un freno al reformismo iniciado a partir del golpe de estado de 1979, a su vez, era la oportunidad de romper la alianza entre la Fuerza Armada, dominada por oficiales moderados, y el PDC. Por primera vez la derecha salvadoreña concurre a un proceso democrático sin el apoyo total de los militares, pues la alianza tradicional con el ejército estaba rota, debido a las maniobras de los norteamericanos.

El apoyo norteamericano, así como las expectativas creadas por el programa electoral del PDC, favorecieron el triunfo de su candidato Duarte, sobre el de ARENA, en la segunda vuelta de la elección el 6 de mayo de 1984. El “primero obtuvo 53.6% de los votos y el segundo 46.4 por ciento”.⁶⁵ Duarte tomó posesión del cargo el 1 de junio de 1984.

A la par de la puesta en marcha de elecciones presidenciales en El Salvador, Reagan deseaba continuar con su plan belicista en el país con miras de derrotar al FMLN definitivamente, para ello trató de convencer a su Congreso y a los países democráticos del mundo, de la legitimidad de toda la ayuda militar a El Salvador, porque en este país lo que se daba era una lucha de un poder democráticamente electo para contrarrestar una revolución marxista no democrática; sin embargo, encontró una férrea oposición dentro

⁶⁴ *Op.Cit.*, Gordon Rapoport, p. 329.

⁶⁵ *Op.Cit.*, Rouquié, p. 247.

de los Estados Unidos, en especial el Congreso, a sus políticas centroamericanas, que no obtuvieron el consenso deseado por la administración republicana. Además, Reagan encaraba la reelección en 1984 y no podía permitir que divisiones dentro de los Estados Unidos con respecto a su política centroamericana lo alejaran del triunfo.⁶⁶

Con el objetivo de obtener consenso a su política en agosto de 1983 Reagan convocó a la formación de una Comisión Bipartidista Nacional presidida por el ex secretario de Estado Henry Kissinger. La palabra bipartidista denotaba consenso entre todos los sectores políticos estadounidenses, cuyo objetivo era examinar la crisis centroamericana y hacer recomendaciones para solucionarla. El 10 de enero de 1984, la comisión dio a conocer el informe Kissinger, la Comisión propuso una serie de medidas, entre otras cuestiones, el aumento de la ayuda militar; la promoción del respeto a los derechos humanos y el desarrollo socioeconómico, a través de una ayuda de 8 000 millones de dólares en cinco años, además de advertir de la presencia soviético-cubana en el área.

En lo tocante a El Salvador, recomendaba aumentar el nivel de ayuda militar norteamericana, pues consideraba que era “demasiado bajo como para permitir a las Fuerzas Armadas de este país el uso efectivo de estos métodos modernos de contrainsurgencia” en una situación en que “La guerra está en equilibrio –una condición que a la larga beneficia a la guerrilla”.⁶⁷ Este incremento de ayuda estaba sometido a determinadas condiciones:

“Con respecto a El Salvador, la ayuda militar debería ser condicionada, por medio de un requisito de informes periódicos, en la demostración de progreso en la dirección de elecciones libres; libertad de asociación; el establecimiento del respeto a la ley y de un sistema judicial eficiente; y la terminación de las actividades de los llamados escuadrones de la muerte, así como una actuación vigorosa en contra de los

⁶⁶ Litaurin, P. G., “La amenaza norteamericana hacia los pueblos de Centroamérica”, *Cuadernos Semestrales CIDE: Estados Unidos, Perspectiva Latinoamericana*, núm. 12, México, D.F., 2do. semestre, 1984.

⁶⁷ Selser, Gregorio, *El Informe Kissinger contra Centroamérica*, Trad.; Introducción; Notas Críticas; Comentarios; Epilogo Gregorio Selser, México, Sociedad Cooperativa Publicaciones Mexicanas, 1984, p. 197.

que comenten crímenes y prosecución hasta donde sea posible, de los que han cometido crímenes en el pasado. Estas condiciones deben ser cumplidas rigurosamente.”⁶⁸

Frente a las propuestas de compartir el poder y de diálogo con el FMLN, se pronunció por la realización de elecciones libres y abiertas como única vía de solución política al conflicto, proponiendo al respecto garantías nacionales e internacionales para la participación de todos los grupos en el proceso electoral de 1984, incluido el FMLN. Sin olvidar, las propuestas que en ámbito económico, de cooperación y desarrollo realizó el informe.

Sin embargo, el informe sólo fue usado parcialmente. No consiguió el objetivo planteado con su realización, pues la administración Reagan adoptó parte de sus afirmaciones, conclusiones y propuestas, en especial las referentes a la conexión cubano-soviética y las propuestas del aumento de la ayuda militar. La “adopción” del informe Kissinger por la administración Reagan buscaba generar apoyo a las políticas seguidas hasta entonces y permitir el libre flujo de los recursos, encubiertas bajo un nuevo plan de acción. Si bien teóricamente se asimilaron las propuestas en la práctica sólo se tomarían en cuenta las que concordaran con las políticas de Reagan, lo cual hacía pensar que la política hacia El Salvador no cambiaría demasiado en caso de ser reelecto Reagan.⁶⁹

1.6 EL GOBIERNO DEL PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO (PDC)

La realización de elecciones y el ascenso al gobierno del candidato moderado, Duarte, marcaron un hecho importante en la reconfiguración del régimen político salvadoreño, y favorecieron su legitimidad a nivel internacional. Este hecho significó el rompimiento del control exclusivo del poder, que hasta antes de la guerra fue ejercido por la combinación ejército-oligarquía. Este hecho, también significó el alejamiento de la institución armada de la cúpula del gobierno, y el consiguiente cese de su papel de intermediario entre grupos y sectores, y pasó a ser sustituido por representantes del

⁶⁸ *Ibidem*, p. 205.

⁶⁹ *Op.Cit.*, Montobbio, p. 93.

gobierno norteamericano. Sin embargo, no por ello fue eliminada su preeminencia política, que pasó a residir en el papel que desempeña en la lucha contra el FMLN y de garante del nuevo régimen. Ambas funciones le confirieron poder de veto y supervisión sobre las iniciativas que adoptaría la administración civil. La continuación de la guerra no hizo sino perpetuar estas ventajas y acrecentar el potencial armado del ejército, “que entre 1980 y 1986 aumentó de 12 000 a 50 000 miembros”.⁷⁰ Muestra de la fuerza política del ejército lo constituye el hecho de que poco antes de las elecciones, los altos mandos militares establecieron los requisitos para otorgar su apoyo a un gobierno civil: “continuación de la ayuda militar norteamericana; apego estricto del gobierno a la forma de organización política estipulada en la Constitución de 1983, y no negociación con el FMLN-FDR”.⁷¹

El advenimiento de un gobierno moderado permitió la libertad de expresión política y la realización de acciones reivindicativas, dada la necesidad de obtener apoyo y ampliar la base de las posiciones moderadas, este proceso mostró sus primeros signos durante la discusión de la Constitución, en las manifestaciones que coordinó la UPD para presionar por la incorporación de derechos laborales a la carta magna y, poco después, en las huelgas y paros de servidores públicos para lograr aumentos salariales. Con el ascenso al poder del PDC esta tendencia continuó. Como ejemplo de ello “es que la Universidad Autónoma de El Salvador fue reabierto; cesaron los atentados a la UCA y se toleraron la mayoría de las huelgas y paros registrados. La organización sindical independiente, paralizada hasta 1983, volvió paulatinamente a la actividad”.⁷²

Respecto a los grupos paramilitares se dio un doble proceso. Por un lado, su accionar fue contenido de manera parcial y, por el otro, se trató de institucionalizarlo. Duarte dio pasos para controlar a estos grupos, desmanteló la “sección de inteligencia de la Policía de Hacienda y separó el comando de las fuerzas de seguridad del ejército

⁷⁰ *Op.Cit.*, Gordon Rapoport, p. 330.

⁷¹ *Ibidem*, p. 330.

⁷² *Ibidem*, p. 330.

regular”.⁷³ Estas medidas, así como las presiones norteamericanas permitieron el descenso de la actividad de los grupos paramilitares. Por otra parte, “el hecho de que la víctimas de los llamados Escuadrones de la Muerte sean sobre todo dirigentes laborales independientes o simpatizantes del FMLN, induce a pensar que más que de acciones sin control, se trata de represión oficial selectiva, disfrazada [de] acción de grupos privados, con el fin de liberar al gobierno de responsabilidad en esos hechos”.⁷⁴

Sin duda, la modificación más importante para el sistema político salvadoreño fue la incorporación de asesores estadounidenses en los órganos del Estado. La diversidad de funciones: “Actor político interno, fuerza reguladora, estrategia militar, proveedor de fondos, inspirador de la política económica”,⁷⁵ asumidas por los asesores norteamericanos, son una muestra fehaciente de la injerencia de los Estados Unidos en el pequeño país centroamericano. Este intervencionismo constituyó el principal obstáculo para la pacificación del país, prometida durante la campaña electoral de Duarte y motivo por el que varios votaron por él. Sin embargo, Reagan, su principal patrocinador, se inclinaba por solucionar el conflicto salvadoreño a través del aniquilamiento militar o la subordinación política del FMLN.

Tanto era el empeño de Reagan que días después del triunfo de Duarte, el Congreso norteamericano aprobó la ayuda militar y económica para El Salvador por 179 millones de dólares para el año 1984.⁷⁶ Ello no hubiera sido posible sin un discurso alarmista televisivo de Reagan el 9 de mayo de 1984, en el que el presidente reiteró el peligro del comunismo que se cernía sobre Centroamérica y por ello urgía al Congreso a liberar los fondos necesarios.

⁷³ *Ibidem*, p. 330.

⁷⁴ *Ibidem*, p. 331.

⁷⁵ *Ibidem*, p. 331.

⁷⁶ *Op.Cit.*, Rouquié, p. 248.

Junto con el impulso a la democracia parlamentaria, Estados Unidos pugnó por dotar de mayor eficacia técnica al ejército salvadoreño, para que éste intensificara las acciones militares para inclinar la balanza a favor del gobierno. A fines de 1983, Reagan vetó la ley que obligaba a certificar la mejoría en el respeto de los derechos humanos por parte del gobierno salvadoreño, para así continuar otorgando ayuda sin restricción alguna. El triunfo de Duarte allanó aún más la resistencia del Congreso estadounidense para el otorgamiento de la ayuda exigida por Reagan. Ello permitió aumentar de manera inmediata los fondos destinados a la guerra, de 81.4 millones de dólares a 140 millones.⁷⁷

El incremento sustancial de la ayuda militar favoreció una mayor escala de la guerra, que se combinó con cambios en la táctica militar, con el propósito de dar mayor movilidad al ejército y desgastar a la guerrilla. Además de aumentar el entrenamiento de soldados y oficiales, “Estados Unidos introdujo armas más potentes y amplió la flota de helicópteros. Asesores norteamericanos empezaron a participar directamente en servicios de apoyo a los bombardeos aéreos en el campo y, de manera eventual, en los combates”.⁷⁸

El resultado inmediato del cambio de estrategia e incremento de la ayuda se tradujo en que el ejército logró desalojar al FMLN de algunas zonas y estacionar destacamentos de soldados en caminos y carreteras. A pesar de estos avances, no se logró alterar de manera significativa el balance de la guerra, ya que la guerrilla pronto se acopló a la nueva estrategia del ejército, dispersándose y ampliando su radio de acción, manteniendo a la vez su capacidad de concentración.⁷⁹ En lugar de inclinar la balanza a favor de las fuerzas armadas, la intensificación de los enfrentamientos armados trajo como consecuencia el cambio del tipo de guerra.

El estancamiento militar aunado a la promesa electoral de Duarte de establecer negociaciones con el FMLN-FDR para la solución de la crisis, hizo cada vez más evidente

⁷⁷ *Op.Cit.*, Gordon Rapoport, 332.

⁷⁸ *Ibidem*, p. 332.

⁷⁹ *Ibidem*, p. 332.

que la solución al conflicto civil era a través de la negociación y no de las armas. Los primeros contactos tuvieron lugar en 1984, cuando Duarte en su discurso en las Naciones Unidas invitó al FMLN-FDR a dialogar.

La primera reunión entre guerrilla y gobierno se efectuó en el poblado de La Palma, departamento de Chalatenango, en octubre de 1984. Duarte asistió al encuentro acompañado por dos ministros y dos vicepresidentes, uno de ellos el de la Defensa, general Carlos Vides Casanova; por parte del FMLN asistieron el comandante Fermán Cienfuegos junto a los dirigentes del FDR Manuel Ungo y Rubén Zamora.

El presidente, sin embargo, no tenía demasiadas ganas de negociar ya que incluso no presentó plataforma para discutir y únicamente se limitó a proponer la entrega de las armas y un programa de reinserción de combatientes, en cambio, ofreció garantías y el registro como partido político al FMLN para que participara en las próximas elecciones. Para sustentar su propuesta Duarte alegó que El Salvador era una democracia que ofrecía garantías a sus ciudadanos, por lo que la sublevación ya no se justificaba.

La siguiente reunión se llevó a cabo en la ciudad de Ayagualo el 30 de noviembre del mismo año. En ella, el FMLN presentó su respuesta a las propuestas de Duarte; el FMLN-FDR rechazó la proposición, pues consideró que las propuestas eran “soluciones simplistas” tras las cuales estaban los Estados Unidos. En su lugar, el FMLN formuló un plan de paz donde pedía: el fin de la represión, garantía de las actividades sindicales y políticas independientes y fin de la participación militar norteamericana.⁸⁰ Sobre todo, insistió en tres puntos: “cese de fuego sobre la base de una demarcación de territorios bajo control de cada una de las partes, reorganización del ejército nacional sobre la base de las dos fuerzas armadas en el terreno y formación de un gobierno de consenso nacional que convocara a elecciones”.⁸¹ Pero su propuesta no fue aceptada por el gobierno, las conversaciones se estancaron. Aun así, se pactó proseguir con las reuniones, sin embargo, no hubo más reuniones durante los siguientes tres años.

⁸⁰ *Op.Cit.*, Rouquié, p. 250.

⁸¹ *Ibidem*, p. 250.

A la par de las conversaciones de paz, en los Estados Unidos se efectuaron elecciones, en las cuales resultó reelecto, por amplia mayoría, Ronald Reagan. A pesar de las fuertes críticas que las organizaciones civiles y eclesiásticas hicieron a su gobierno por la política militarista seguida en El Salvador, su triunfo se basó en una efectiva campaña publicitaria resaltando los peligros del comunismo y la amenaza de encontrarse rodeado de países comunistas pero, sobre todo, ganó gracias a la exitosa política económica emprendida, a pesar del déficit presupuestario⁸² que arrastraba de 200 000 millones de dólares.⁸³ Durante su primera administración Reagan obtuvo el apoyo de los sectores de clase media y de los trabajadores norteamericanos, quienes consideraban su bienestar inmediato y palpable más importante que la situación en un pequeño país que poco tenía que ver con su realidad inmediata. El nuevo periodo presidencial de Reagan significó la continuación de la política llevada hasta ese momento en El Salvador y la búsqueda de la eliminación militar del FMLN sin espacio a la negociación y el acuerdo.

La política norteamericana poco benefició a El Salvador pues la situación de guerra obstruyó la estabilización del régimen y la posibilidad de que éste alcanzara solidez. Impulsado por Reagan y apoyado por algunos sectores del gobierno salvadoreño en su objetivo de derrotar al FMLN, el estado salvadoreño incrementó progresivamente los gastos militares, a pesar de que la ayuda norteamericana iba en aumento constante: “de 113.6 millones de dólares en 1981, se elevó a 310.7 millones en 1985; el total para el periodo suma 1 174.1 millones”.⁸⁴

Las asignaciones presupuestales del Ministerio de Defensa y los grupos de seguridad, que en 1979 representaba 8.7% del presupuesto, para 1986 significaba el 28.3%.⁸⁵ Aunado al aumento presupuestal del gasto militar, la táctica de sabotaje

⁸² El déficit presupuestal se debía a la inversión gubernamental en la industria militar con el objetivo de activar la economía y competir militarmente con la URSS.

⁸³ *Op.Cit.*, LaFeber, p. 409.

⁸⁴ *Op.Cit.*, Gordon Rapoport, p. 332.

⁸⁵ *Ibidem*, pp. 332-333.

emprendida por el FMLN como parte de su estrategia de lucha obligaba al gobierno a destinar parte del erario a la reparación de instalaciones. La primacía de estas erogaciones sobre otros gastos, impidió al gobierno aplicar una política económica destinada a incrementar los niveles de vida de la población.

La guerra incidió en la disminución de las actividades económicas y en el agravamiento del desempleo. De “3 665 millones de colones en 1978, el PIB descendió a 2 870 millones en 1984. Los cálculos del desempleo oscilan entre el 30 y el 35% y el deterioro de los salarios mínimos urbanos en un 17% entre 1980 y 1984”.⁸⁶ Ello a pesar de la constante ayuda militar y económica otorgada por Washington, pero la situación de guerra destruía El Salvador más rápido que la reconstrucción que se podía hacer con los dólares. Mientras tanto, los oligarcas salvadoreños habían huido del país con grandes sumas de dinero que depositaron en bancos extranjeros. Durante el gobierno de Duarte, éste llegó a depender casi totalmente de Estados Unidos para su sobrevivencia.

En este contexto de crisis y dependencia, se efectuaron las elecciones legislativas y municipales en marzo de 1985. En ellas, el PDC logró obtener la mayoría y con este hecho se cerró el ciclo de elecciones con las cuales el gobierno norteamericano y salvadoreño pretendían darle legitimidad al régimen. Se inició un nuevo ciclo que se debía repetir periódicamente para mantener la legitimidad del estado y darle una imagen democrática.

A pesar de las elecciones más o menos democráticas efectuadas por el gobierno, los secuestros y los ataques a las instalaciones del gobierno continuaron como parte de la táctica emprendida por las fuerzas guerrilleras durante el periodo de 1983-1986. Una de estas acciones fue el secuestro de la hija mayor del presidente Duarte, lo que generó inestabilidad. Al escenario de crisis económica y de guerra contribuyó la oposición de algunos sectores, dentro de la fuerza armada, que aún consideraban posible derrotar al

⁸⁶ *Ibidem*, p. 333.

FMLN por la vía militar; para ellos, sólo se necesitaba la ayuda norteamericana suficiente.⁸⁷

La crítica situación económica y social, que para los salvadoreños de las zonas urbanas constituía una de las expresiones más nítidas de la guerra, aunada a los desplazamientos y la inmigración de la población, las pérdidas de vidas humanas y materiales, acentuó el deseo de paz de la mayoría de la población salvadoreña y de los países del mundo.

En el segundo semestre de 1985 y el primero de 1986 el gobierno de Duarte se fue quedando gradualmente aislado y sólo sobrevivía gracias a la ayuda económica de los Estados Unidos que, en gran medida, era absorbida por el gasto militar. Pero, esto ni siquiera impedía la erosión del gobierno, que cada vez más se mostraba incapaz de contrarrestar la táctica de sabotaje del FMLN; contener el renacimiento de las acciones reivindicativas por parte de los sectores populares; y resolver los múltiples problemas inherentes al contexto de guerra que vivía El Salvador.

A ello se sumaba la incapacidad de cumplir su promesa de campaña de entablar negociaciones de paz con el FMLN, menos después de los fracasos de los diálogos de 1984. Además, las concesiones hechas al ejército debilitaron políticamente a Duarte y lo convirtieron en rehén de los militares que limitaron la capacidad del gobierno para emprender seriamente las negociaciones de paz.

A pesar de estar atado de manos Duarte, ofreció una nueva reunión con los revolucionarios en junio de 1986. Se efectuaron contactos secretos en el exterior. Se realizaron encuentros preliminares en México y Panamá. Finalmente, se acordó llevar a cabo la reunión el 19 de diciembre de ese año en la población de Sesori, departamento de San Miguel. Sin embargo, el diálogo no prosperó debido a que las condiciones de índole militar del FMLN no fueron aceptadas por los militares que aun creían en la victoria

⁸⁷ *Op.Cit.*, Rouquié, p. 251.

militar, y no concurrieron. Duarte y el FMLN acudieron al encuentro pero no lograron avances en el proceso de paz.⁸⁸

La incapacidad de un diálogo efectivo generó molestias dentro de la sociedad salvadoreña y de la comunidad internacional hastiados de la guerra, que impedía el progreso social y económico del país.

Fue a partir de 1987 que el proceso de paz salvadoreño dio verdaderos pasos en busca de una solución negociada. El primer paso fue dado por los países del Grupo Contadora,⁸⁹ integrado por México, Venezuela, Colombia y Panamá, quienes en 1986 dieron a conocer el Acta de Contadora que contenía una serie de compromisos con la paz, la democracia, la seguridad regional y la cooperación económica. Sin embargo, no fue

⁸⁸ *Ibidem*, pp. 251-252.

⁸⁹ **El Grupo Contadora** Frente a la grave crisis por la que atravesaba el área de Centroamérica y que amenazaba con desestabilizar toda la región, un grupo de países latinoamericanos, sin involucramiento en el conflicto pero con intereses directos en la zona –Colombia, México, Panamá y Venezuela–, se reunieron a principios de enero de 1983 para establecer una nueva opción y diferente en la solución de los conflictos centroamericanos. Se trató de ofrecer un instrumento político basado en un proceso de consultas que condujera a la creación de condiciones pacíficas en el área. Estos países constituyeron lo que se denominó el Grupo de Contadora. Los esfuerzos de grupo se centraron en tres objetivos: detener una conflagración bélica en el área centroamericana; crear condiciones pacíficas en Centroamérica, mediante acuerdos destinados a eliminar el armamentismo y la presencia militar extranjera; y por último, impulsar un proceso de desarrollo económico y social en la región. El documento fundacional de Contadora los constituyó la declaración emitida por los cuatro cancilleres de México, Colombia, Panamá y Venezuela, del 9 de enero de 1983. Ahí se hizo el llamado urgente a los países centroamericanos para que, a través del diálogo y la negociación, reduzcan las tensiones y establezcan las bases para un clima permanente de convivencia pacífica y respeto mutuo. Después, en julio de 1983, vino la Declaración de Cancún de los cuatro presidentes de Contadora, en donde se establecen las directrices que debe contener un programa general para lograr una paz negociada en Centroamérica. Para septiembre de 1983, Contadora negoció un documento cristalizando los 21 objetivos básicos para la pacificación de Centroamérica. La virtud de este texto es que expresa, por primera vez, el acuerdo de los cinco gobiernos centroamericanos sobre los compromisos que deben acatar para alcanzar los fines establecidos. Ello iría acompañado de unas normas para la ejecución de los compromisos asumidos en el documento de objetivos, negociadas en enero de 1984 por Contadora y los cinco cancilleres centroamericanos, y en donde se establecen las reglas relativas a asuntos de seguridad, asuntos políticos y cuestiones económicas y sociales. Todo ello dio origen a la elaboración de un texto jurídico de gran envergadura, denominado Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica. La primera versión de ese texto es de septiembre de 1984; la segunda, con enmiendas introducidas por los gobiernos centroamericanos, es de septiembre de 1985; la versión final es de junio de 1986. El Acta comprende un marco jurídico que proporciona los criterios para resolver los problemas que aquejaban a Centroamérica. Sin embargo, el Acta no fue firmada debido, principalmente, a la férrea oposición de los Estados Unidos. Pero, lo relevante del Acta y del Grupo de Contadora es que partió, desde el inicio de sus gestiones, de la idea capital: los conflictos que se desarrollan en Centroamérica tenían su origen en las profundas carencias económicas y sociales de los países del área durante las últimas décadas; éste principio se alejaba de la idea explicativa de que la crisis en Centroamérica se debía a la intervención comunista en el área y se enmarcaba dentro del conflicto Este-Oeste. Además, también se establecía que la solución a los problemas suponía, en primer término, el reconocimiento inequívoco de que los gobiernos centroamericanos les pertenecía la facultad intransferible de obtener su propia paz. De ellos dependía, en forma directa, el fracaso o el buen éxito de una negociación que a todos beneficiaba. Todo esto, generó que el proceso de Contadora recibiera un apoyo internacional ampliamente mayoritario, las gestiones del Grupo Contadora fueron objeto de un sólido respaldo de la opinión pública internacional. A pesar de no ser firmada el Acta de Contadora, ésta dio los frutos esperados en 1987, en Esquipulas, Guatemala, cuando los países centroamericanos asumieron su responsabilidad para conducir directamente el proceso negociador de la pacificación y signaron el Acuerdo de Esquipulas. Ello no fue en menoscabo de Contadora: ése fue siempre el supuesto y el fin de la gestión diplomática. Durante todo el proceso de paz en Centroamérica el Grupo de Contadora siempre estuvo acompañando a los países centroamericanos y apoyando en las gestiones.

firmada. Aunque no acabó operando, sí ofreció una alternativa de solución al conflicto centroamericano.

Para 1987 todo cambió rápidamente. El grupo de Contadora cedió, más nunca dejó de acompañar el proceso de paz, el protagonismo a los estados centroamericanos, quienes durante ese año emprendieron un proceso de diálogo y búsqueda de soluciones negociadas a la crisis del área. El 7 de agosto los mandatarios centroamericanos suscribieron un acuerdo preliminar de paz propuesto por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, que incluía los siguientes aspectos: amnistía; cese del fuego; impedir el uso del territorio para agredir a otra nación; democratización y fin de la ayuda a los movimientos insurreccionales. El documento, conocido como Esquipulas II,⁹⁰ incluía un calendario y ciertos mecanismos para iniciar acciones concretas en cada una de esas áreas básicas.⁹¹

El acuerdo signado fue recibido con entusiasmo por parte de la opinión pública internacional, a excepción del gobierno norteamericano que aún impulsaba la vía militar como solución a los problemas de América Central. Muestra de la oposición estadounidense fue la publicación del plan de paz Reagan-Wright el 5 de agosto de 1987, que contemplaba “el cese del fuego, retiro de asesores norteamericanos, acuerdo regional de seguridad, reconciliación nacional y plan de ayuda”.⁹² Entendido como una táctica

⁹⁰ **Acuerdo de Esquipulas II** Fue una iniciativa hecha a mediados de la década de 1980 para resolver los conflictos militares que azotaron Centroamérica durante la década, el acuerdo debe su nombre a la localidad de Esquipulas, Guatemala, lugar donde se llevaron a cabo las reuniones iniciales. El acuerdo fue construido sobre las bases del trabajado realizado por el Grupo Contadora entre 1983 y 1985. En 1986, tuvo lugar la reunión denominada "Esquipulas I", a la que asistieron cinco presidentes de Centroamérica, la junta sirvió de base para consolidar la decisión política de los gobernantes y establecer con Esquipulas II en 1987 el procedimiento para conseguir la “Paz Firme y Duradera en la región”. Durante 1986 y 1987, se llevó a cabo el "Proceso de Esquipulas", promovido por el presidente Vinicio Cerezo de Guatemala, en el proceso los presidentes de Centroamérica acordaron, entre otras cosas, una estructura básica para la resolución pacífica de los conflictos. De ahí emergió el "Acuerdo de Esquipulas II" y fue firmado en la Ciudad de Guatemala por el presidente de Guatemala Vinicio Cerezo, el presidente de El Salvador José Napoleón Duarte, el presidente de Nicaragua Daniel Ortega, el presidente de Honduras José Azcona Hoyo y el presidente de Costa Rica Óscar Arias Sánchez el 7 de agosto de 1987. El Acuerdo de Esquipulas II definió un número de medidas para promover la reconciliación nacional, el final de las hostilidades, la democratización, elecciones libres, el término de toda asistencia para las fuerzas militares irregulares, negociaciones sobre el control de armas y la asistencia a los refugiados. También sentó las bases para los procedimientos de verificaciones internacionales y proveyó de una agenda para su implementación. El Gobierno de los Estados Unidos se negó a reconocer este acuerdo debido a que aceptarlo implicaría el reconocimiento del gobierno sandinista de Nicaragua. El rechazo norteamericano no afectó la aplicación del acuerdo. El Acuerdo de Esquipulas II sentó las bases del Acuerdo General de Paz de El Salvador.

⁹¹ Medina, Núñez, Ignacio, *El Salvador: entre la Guerra y la Esperanza*, México, Universidad de Guadalajara; Departamento de Investigación Científica y Superación Académica, 1990, pp. 191.

⁹² *Op.Cit.*, Montobbio, p. 93.

desesperada ante la inminente firma del plan de Arias y por el miedo a perder el control del área y la posibilidad de influir en una eventual solución a la crisis, fue visto con escepticismo ante la posibilidad de que terminara siendo usado por Reagan tal y como lo hizo con el Informe Kissinger.

Frente al fracaso de plan Reagan-Wright, la administración republicana tuvo que aceptar el acuerdo de Esquipulas II, lo que influyó en el reconocimiento del convenio fue la evidente crisis por la que atravesaba la política exterior norteamericana a raíz de las revelaciones del escándalo Irán-Contras a finales de 1986.⁹³

La promulgación de Esquipulas fue recibida, con reservas, por parte del FMLN. El Frente no deseaba aceptar un plan que le quitara legitimidad a su lucha, a su representatividad y que salvaguardara la integridad física de sus miembros.

Por su parte, el gobierno de Duarte, que se encontraba fortalecido por la legitimidad que le confirió la realización de tres contiendas electorales, argumentó que los objetivos que impulsaran la lucha contra el gobierno militar habían sido o estaban siendo cumplidos: “la reforma agraria ha roto el poder de los terratenientes; las violaciones a los derechos humanos han sido controladas; ha cambiado el carácter antidemocrático de la fuerza armada; el texto constitucional contempla derechos de organización y de participación ciudadana”.⁹⁴ De ahí que, para Duarte, la lucha armada del FMLN no tenía sentido y, por eso, a cambio de que ésta depusiera las armas y licenciara a su ejército, les

⁹³ **Escándalo Irán-Contras o Irangate.** Fue un acontecimiento político ocurrido entre 1985 y 1986, en el cual el gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración del presidente Ronald Reagan, vendió armas al gobierno iraní y financió a la "Contra" nicaragüense (movimiento armado creado y financiado por Estados Unidos para atacar al gobierno sandinista de Nicaragua). Ambas operaciones, la venta de armas y la financiación de la Contra, estaban prohibidas por el Senado estadounidense. La operación de venta de armas a Irán produjo más de 47 millones de dólares, dinero que fue gestionado por Oliver North mediante un entramado de cuentas bancarias en Suiza y fue utilizado, principalmente, para la financiación de la agresión al gobierno de Nicaragua y apoyo a la Contra. El 5 de octubre de 1986, el Ejército Popular Sandinista (EPS) derribó un avión de transporte de la Fuerza Aérea de la República de El Salvador, piloteado por Eugene Hasenfus, que sobrevolaba el espacio aéreo de Nicaragua con suministros para la Contra. Poco después, el día 5, Hasenfus fue hecho prisionero. El 3 de noviembre de 1986 un semanario libanés publicó la venta de armas a Irán por parte de los Estados Unidos. El 25 de noviembre en una rueda de prensa, el presidente Ronald Reagan y el Procurador General Edwin Meese reconocían que ambos hechos estaban relacionados y que existía una nota escrita de Oliver North de abril de ese mismo año donde se especificaba que 12 millones de dólares de las ventas de armas serían utilizados para ayudar a los Contras. Todo ello llevó a la creación, por parte del Senado de los Estados Unidos, de una comisión de investigación.

⁹⁴ *Op.Cit.*, Gordon Rapoport, p. 334.

prometía garantías para su participación en el proceso electoral y equidad para la búsqueda de su acceso al poder. Además, les otorgaba una amplia amnistía.

El FMLN-FDR sostenía que todavía subsistían las causas que los llevaron a la insurrección. En contrapropuesta al ofrecimiento del gobierno, el FMLN planteó un plan de tres fases: “la primera comprendería el establecimiento formal del cese al fuego, el retiro de Estados Unidos y la realización de un amplio diálogo nacional. Después de ello, se procedería a dictar una nueva Constitución, a formar un nuevo gobierno y reestructurar la fuerza armada; por último, tendría lugar la convocatoria a elecciones.”⁹⁵

La disparidad de las propuestas y los escasos progresos en las tentativas de diálogo, mostraban nulas posibilidades de iniciar conversaciones serias e hicieron más difícil la aplicación de los compromisos suscritos por Duarte. Este atolladero entre ambos contendientes se mantendría hasta el final de la presidencia de José Napoleón Duarte.

Aunque las propuestas de los contrincantes eran opuestas totalmente, Duarte emplazó a iniciar pláticas de paz, dentro del contexto de Esquipulas II. La sede para las reuniones sería la Nunciatura en la capital en octubre de 1987; sin embargo, la propuesta del gobierno desató la oposición de los asesores norteamericanos y algunos sectores de las fuerzas armadas, lo que propició que las pláticas no tuvieran avances significativos.

Mientras el proceso de paz en El Salvador durante 1988 se encontraba estancado, en los Estados Unidos se iniciaba un año de elección presidencial, en el cual se enfrentaron, por el partido demócrata el gobernador de Massachusetts, Michael Dukakis y, por el partido republicano, el vicepresidente George Bush, quien durante la administración Reagan, tuvo una importante participación en el marco de la Guerra Fría, mediante sus políticas anticomunistas aplicadas en diversas partes del mundo, además del papel destacado en el escándalo Irán-Contras.

⁹⁵ *Ibidem*, p. 334.

En las elecciones del 8 de noviembre de 1988, Bush ganó, obtuvo el 53.37% del total de los votos emitidos; mientras Dukakis consiguió el 45.65% de los sufragios.⁹⁶ Bush supo capitalizar la popularidad de Reagan consiguiendo una holgada victoria, logrando así ser el tercer presidente republicano electo de manera consecutiva. Además de la popularidad de Reagan, Bush ganó porque, en materia de política exterior y en general con otras políticas, prometió continuar con las de Reagan, pero de una forma más moderada, también declaró: “lean mis labios: no más impuestos”⁹⁷ lo que le granjeó mayor apoyo de la sociedad norteamericana.

Así el 20 de enero de 1989, George H. W. Bush juró como cuadragésimo primer presidente de los Estados Unidos, con la promesa de ser un presidente más moderado y pragmático, lo que abría una nueva ventana para la solución de los problemas de Centroamérica.

1.7 LAS ELECCIONES DE 1988-1989: LA EXPULSIÓN DEL PDC DEL GOBIERNO

Con el proceso de paz suspendido, El Salvador se encaminaba hacia un nuevo proceso electoral en los años 1988 y 1989. Las primeras elecciones fueron de carácter legislativo y municipal, las segundas, de tipo presidencial. Todo ello enmarcado en la continuación de la guerra civil, de una crisis económica, de los desastres naturales (terremoto en 1986 e inundaciones en 1988) y del descrédito del gobierno encabezado por Duarte, a la sazón, enfermo de cáncer.

El 20 de marzo de 1988 se efectuaron las elecciones legislativas y municipales, en donde el partido gobernante resultó ser el gran perdedor al obtener sólo el 20% de las alcaldías disputadas y la obtención de 29 de las 60 curules en la Asamblea Legislativa.

Con la derrota a cuestas, el PDC se preparó para las elecciones presidenciales de 1989. El PDC designó a Fidel Chávez Mena, quien cargaba con el estigma de ser el

⁹⁶ Aguilera Peralta, Gabriel, *Centroamérica: de Reagan a Bush*, San José, Costa Rica, FLACSO, 1991, p. 287.

⁹⁷ *Ibidem*, p. 285.

candidato oficial y, por lo tanto, ser el representante de la continuidad de la misma política fracasada llevada a cabo hasta entonces en el país bajo la administración de la Democracia Cristiana. La designación de Chávez Mena, provocó disputas internas que a la postre derivaron en escisión, debilitando aún más la ya de por sí inestable posición del PDC.

A la par del inicio de las campañas presidenciales, el presidente Duarte hizo un nuevo llamado a los insurgentes para que dejaran las armas y se incorporaran al proceso electoral en curso. El FMLN aceptó la propuesta presidencial, pero, con la condición de que las elecciones se postergaran para darles tiempo a los del FMLN de prepararse. En respuesta, el gobierno la rechazó alegando cuestiones de índole constitucional.

En marzo de 1989, se realizó la elección dentro de un contexto de guerra civil y crisis social, política y económica. Al final de la jornada electoral el ganador fue el candidato de ARENA, Alfredo Cristiani, con el 53% de los votos, lo que hacía innecesaria una segunda vuelta.

La derrota de la Democracia Cristiana y la inclinación de la sociedad salvadoreña por una opción de derecha, obedeció a que la administración del PDC fue incapaz de resolver los principales problemas del país aun cuando recibió, en concepto de ayuda económica, más de un millón de dólares diarios durante cinco años completos.⁹⁸ No mejoró el nivel de vida de las grandes mayorías; fue incompetente para asegurar el abastecimiento de bienes de primera necesidad; sus esfuerzos para combatir la inflación y la constante devaluación de la divisa salvadoreña (colón) fueron vanos; incapaz de diseñar políticas económicas que motivaran la inversión y la producción; en fin, se mostró como un gobierno inepto desde el punto de vista económico-social. Todo ello se tradujo en la impopularidad del PDC que fue capitalizada por ARENA.

Gran parte de la ayuda económica norteamericana estuvo destinada a mantener el presupuesto estatal salvadoreño, a restaurar la infraestructura destruida a raíz de la

⁹⁸ *Op.Cit.*, Moreno Parada, p.148.

táctica de sabotaje empleada por el FMLN y a proyectos directamente relacionados con la guerra. En definitiva, la asistencia evitó el colapso del gobierno, sin embargo, no logró generar prosperidad económica para El Salvador dados los crecientes aumentos en los gastos de defensa en detrimento de otra áreas vitales para la recuperación económica, (ver cuadro 3) esto ocasiono el descrédito del gobierno del PDC y fue culpable, en gran medida, de su expulsión del gobierno a partir de 1989.

Cuadro 3

**El Salvador. Estructura institucional de gastos gubernamentales
(En porcentajes)**

	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987 ¹
1. Defensa y Seguridad Pública	7.5	9.2	14.4	15.2	18.7	18.6	21.4	24.2	30.7	25.7	25.97
2. Admón. de deuda pública	3.8	4.1	4.8	5.1	10.0	15.6	14.6	26.6	13.3	19.8	17.8
Sub total	11.3	13.3	19.2	20.3	26.7	34.0	36.0	50.8	44.0	45.5	48.7
3. Educación	22.4	20.7	22.7	23.6	19.6	18.8	17.8	13.7	17.8	13.2	14.5
4. Obras Públicas	16.9	16.1	14.8	12.1	11.7	8.9	11.2	7.3	8.0	7.0	8.3
5. Salud Pública	10.2	10.7	9.8	10.5	9.1	8.2	9.2	7.0	7.5	6.2	8.3
6. Agricultura y Ganadería	8.4	8.2	7.7	8.2	8.2	8.4	8.6	6.7	6.7	9.7	5.1
7. Transferencias Generales	2.6	7.9	3.8	2.6	2.9	2.9	2.9	2.4	2.9	2.0	7.3
8. Otros	28.2	23.1	22.7	22.7	21.8	14.6	14.6	12.1	13.0	16.4	12.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Fuente: Segovia, Alexander, "Límites y Dilemas de la Política Económica en un país en guerra: el caso de El Salvador", Ponencia presentada en el Encuentro de Opciones de Política Económica, Universidad Nacional de Costa Rica, mayo de 1988, p.462.

En junio de 1989 tomó posesión del gobierno salvadoreño Alfredo Cristiani. A partir de este momento el PDC quedó totalmente relegado de las actividades propias del gobierno y de la posibilidad de influir en la formulación de políticas sociales y económicas, pues ni dentro del Congreso era mayoría; también quedó separado de la búsqueda de soluciones a la guerra civil; desde junio de 1989 el papel del PDC dentro de El Salvador fue secundario al no contar ya con apoyo social dada la ineficiencia mostrada durante ocho años de gobierno.

Capítulo 2

LA VISIÓN DEL FRENTE FARABUNDO MARTÍ DE LIBERACIÓN NACIONAL-FRENTE DEMOCRÁTICO REVOLUCIONARIO (FMLN-FDR)

Además de la asistencia económica otorgada por Estados Unidos, éste también otorgó ayuda de tipo militar, la cual estuvo destinada exclusivamente a detener y vencer por la vía armada al FMLN. La asistencia militar a partir de 1980 se incrementó constantemente hasta alcanzar su punto máximo en 1984 cuando llegó a 196,6 millones de dólares, para 1991 el auxilio se redujo considerablemente debido al apoyo al proceso de paz impulsado por la administración Bush, buena parte de ésta, comprometida y no gastada fue transferida a un “Fondo de Desmovilización y Transición” creado con motivo de los acuerdos de paz. El apoyo otorgado fue esencial para evitar que el Frente tomara el poder en El Salvador y para mantener las funciones básicas del ejército en su lucha contra los guerrilleros.

La asistencia militar se otorgó a través de diferentes programas como los destinados a la capacitación de militares y de fuerzas de seguridad del IMET (*International Military Education and Training*), la ayuda militar directa (armamentos y equipo) del MAP (*Military Assistance Program*) y las ventas de equipo en términos concesionales del programa FMS (*Foreign Military Sales*). La ayuda militar se repartió entre el entrenamiento a los miembros de las fuerzas armadas, la dotación de equipo militar y las necesidades auxiliares de la guerra, como la reconstrucción de caminos y puentes para facilitar el tránsito de tropas.

2.1 LOS SECTORES POPULARES DESPUÉS DE LA SALIDA DEL PODER DEL PCN

Las organizaciones populares actuaron durante toda la década de los años setenta; al principio, de manera independiente y, posteriormente, en unidad. Esta unión se dio de manera gradual, las diversas organizaciones, ya sea de tipo social, laboral, campesina, profesionales, etcétera se constituyeron en frentes de masas como: Frente de Acción Popular Unificado (FAPU), Bloque Popular Revolucionario (BPR), Ligas Populares 28 de

Febrero (LP-28) y Movimiento de Liberación Nacional (MLP).⁹⁹ Estos frentes practicaban la acción reivindicativa como medio de presión para la obtención de sus demandas; este proceso se dio debido a la incapacidad del gobierno del Partido Conciliación Nacional (PCN) de hacer reformas de tipo social, sobre todo la agraria, que permitieran una subsistencia digna al pueblo salvadoreño y por la creciente represión por parte de los cuerpos de seguridad del estado y grupos de derecha como ORDEN¹⁰⁰. Los frentes de masas demandarán, en general, con energía creciente un orden socioeconómico más justo e incluyente.

Las acciones de estos grupos fueron: huelgas en demanda de alzas salariales y buen trato a los obreros; manifestaciones y tomas de centros laborales y de tierras. Fueron emprendidas por agrupaciones pertenecientes a los frentes de masas y eran apoyadas en sus demandas por otras organizaciones pertenecientes al mismo frente quienes, a su vez,

⁹⁹ **Frentes de Masas:**

Bloque Popular Revolucionario (BPR) fundado en 1975. En sus comienzos, esencialmente cristiana y campesina, agrupaba dos federaciones de obreros rurales y de pequeños agricultores formadas por la Iglesia, en particular por los sacerdotes jesuitas con el apoyo de las comunidades de base en la zona de Aguilares-Guazapa norte de El Salvador. Siete organizaciones se unieron con ellas para formar el Bloque, el movimiento unificado de masas más fuerte que haya existido en el país. Ligada extraoficialmente con la FPL. Con escasas bases obreras, pero con una fuerte base de estudiantes y docentes, así como de pobladores de barrios marginales de San Salvador.

Frente de Acción Popular Unificado (FAPU) instaurado en 1974, está fue la primera organización popular de tendencia revolucionaria pero jamás alcanzó la influencia del BPR. Segundo movimiento en magnitud, tenían la mitad de afiliados que el BPR. Ligado a las FARN, por lo cual se desligaron del frente las organizaciones campesinas cristianas. Agrupó “bachilleres revolucionarios”, maestros y universitarios; así como sindicatos de electricistas, de trabajadores del sistema de aguas y de la industria cafetalera.

Ligas Populares 28 de Febrero (LP-28) La ligas deben su nombre a la masacre de manifestantes que tuvo lugar el 28 de febrero de 1977 en la Plaza libertad de San Salvador. Antes de su eclipse total en 1981, comprendían las Ligas Populares Campesinas, las Ligas Populares Obreras, los comités de barrios LP-28 y la Asociación de Usuarios y Trabajadores de los Mercados. Ligado al ERP.

¹⁰⁰ **ORGANIZACIÓN DEMOCRÁTICA NACIONALISTA (ORDEN)** Fue una organización paramilitar salvadoreña encargada de vigilar a la población rural, establecida en la década de 1960 por el coronel José Alberto Medrano. Bajo el mando de Medrano, ORDEN fue desarrollando y expandiendo una milicia muy bien organizada, apoyada por miembros de las fuerzas armadas y otros cuerpos de seguridad salvadoreños. Una de las principales funciones de ORDEN consistió en identificar y eliminar a los supuestos comunistas de la población rural. ORDEN es ampliamente reconocida por ser una de las precursoras de los escuadrones de la muerte de los años 1970 y 1980. Durante la década de 1970 las unidades de ORDEN frecuentemente participaron junto con las fuerzas militares y de seguridad en los asesinatos de opositores, y fue acusada de represión tanto por el Departamento de Estado de Estados Unidos y como por la Organización de los Estados Americanos (OEA). A principios de 1979, durante el régimen brutal del general Carlos Humberto Romero (1977- 1979), el gobierno se basó en gran medida en ORDEN para reprimir a la oposición en las zonas rurales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA emitió un informe que indicaba que ORDEN aterrorizaban y asesinaban campesinos en todo el país como parte de la política general de los militares. ORDEN estuvo implicado en un sinnúmero de ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura durante este periodo. ORDEN fue disuelta nominalmente a finales de 1979, pero su estructura no fue desmantelada. De hecho, cuando la guerra se intensificó en 1980-1981, el ejército redobló la estructura de ORDEN, de este modo, continuó operando con impunidad en complicidad con las fuerzas de seguridad salvadoreñas. ORDEN estuvo profundamente involucrado en los ataques a los proyectos de reforma agraria. ORDEN continuó operando durante la primera mitad de la década de los ochenta, sólo que con otras denominaciones.

incluían las propias. Se incrementarán gradualmente conforme avanza la década y se radicalizarán debido al aumento de la represión.

La Iglesia Católica tuvo un papel fundamental en la unidad de los diferentes sectores populares salvadoreños, tanto rurales como urbanos. Su trabajo con los campesinos a los que concientizó acerca de la situación imperante en El Salvador fue fundamental. El proceso en el campesinado salvadoreño empezó a partir de 1968 con las conclusiones emitidas por los obispos asistentes a la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano celebrado en Medellín, Colombia. Una de las conclusiones a las que llegaron los obispos fue el cambio del foco de atención de la iglesia, que pasó de la conversión personal al cambio social, el cual terminaría con la “violencia institucionalizada” cuya raíz se encontraba en la estructura social y económica de los países latinoamericanos.¹⁰¹

El cambio social, de acuerdo con ese planteamiento, se lograría a través de un proceso de concientización de las masas, así los mismos pobres cambiarían sus condiciones apoyados por los religiosos.¹⁰² La idea de que las masas se convirtieran en el catalizador de su propia libertad se conoció como Teología de la Liberación; las conclusiones de Medellín dieron gran importancia a la acción. Ésta reformaría sociedades enteras. Para poder llevarla a cabo, el punto de partida era trabajar con los pobres para cambiar el orden establecido. Las conclusiones del Episcopado Latinoamericano, tuvieron un significado especial para los sacerdotes y en especial para las monjas y los laicos, quienes vivían y trabajaban con los pobres de Latinoamérica, así regresaron a sus comunidades y empezaron a trabajar arduamente en los cantones y aldeas para transformar no a los individuos, sino al sistema.¹⁰³

¹⁰¹ Op.Cit., LaFeber.

¹⁰² Cabarrús, Carlos Rafael, *Génesis de una Revolución: Análisis del Surgimiento y Desarrollo de la Organización Campesina en El Salvador*, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social; Ediciones de la Casa Chata, núm. 16, 1983, pp. 411.

¹⁰³ Op.Cit., LaFeber.

En El Salvador la Teología de la Liberación encontró un campo propicio para su aplicación, pues las condiciones sociales que generaban pobreza entre el campesinado se venían desarrollando desde el siglo XIX y habían llegado a un punto crítico después de la Segunda Guerra Mundial con la introducción del algodón y la caña de azúcar como cultivos de agroexportación. La demanda de tierras que este tipo de producción entrañaba para su siembra exigía que el campesino fuera expulsado de las tierras que labraba para su subsistencia y provocaba su enrolamiento como proletario del campo en ínfimas condiciones laborales. Con este panorama se encontraron los sacerdotes y monjas cuando intentaron llevar a la práctica los postulados de la Conferencia de Medellín. En El Salvador, las primeras misiones pastorales empezaron a trabajar en 1969 entre los reinmigrantes de Honduras, expulsados a raíz de la guerra entre El Salvador y Honduras, quienes a su vez venían con un mayor nivel de concientización política, debido a su participación en Honduras en el movimiento de Delegados de la Palabra, que había producido un levantamiento de conciencia en aquel país.¹⁰⁴ Los grupos pastorales iniciaron misiones en 13 parroquias localizadas en los departamentos de Chalatenango, Morazán, San Vicente, San Salvador, Cuscatlán y La Libertad, en dichos departamentos será donde el FMLN tendrá mayor arraigo y apoyo.¹⁰⁵

A nivel de cada comunidad se establecieron las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) en las cuales el clero trabajó con los campesinos en un ambiente más reducido e informal que el de la iglesia, en las CEB se podía debatir cualquier tema político, humano, doctrinal, religioso, etcétera. Su función era concientizar a los campesinos acerca de su situación y de la necesidad de la acción reivindicativa como único medio para transformar su realidad; estos campesinos concientizados serían conocidos como Delegados de la Palabra quienes, a su vez, tenían la misión de comunicar el mismo mensaje a sus semejantes.¹⁰⁶ También, la tarea doctrinal incitaba a los campesinos a organizarse para mejorar sus condiciones de vida, contribuyendo a romper el aislamiento político en el que

¹⁰⁴ Op.Cit., Cabarrús.

¹⁰⁵ Op.Cit., Gordon Rapoport.

¹⁰⁶ Op.Cit., LaFeber.

se encontraban desde 1932. Con ello, la opción de un acuerdo con otras capas sociales fue abierta.

La Teología de la Liberación fue un hecho importante dentro del campo salvadoreño, porque además de concientizar y politizar, incitó al campesino a unirse para la obtención de las reformas necesarias para satisfacer sus necesidades básicas. A partir de este momento el sector campesino salvadoreño tomó las riendas del proceso de su liberación y se lanzó a la acción reivindicativa, siempre apoyado por los religiosos de la liberación, en especial los jesuitas. La ayuda dada por los sectores eclesiásticos identificados con los principios de la Teología de la Liberación pronto despertó la animadversión de los oligarcas y militares quienes no dudaron en convertirlos en objetivos de su acción represiva.

Pronto, los campesinos concientizados y dispuestos a la acción para mejorar su situación se organizaron en agrupaciones como la Federación de Campesinos Católicos de El Salvador (FECCAS)¹⁰⁷ y la Unión de Trabajadores del Campo (UTC)¹⁰⁸. Sus acciones reivindicativas se concentraron en huelgas y manifestaciones en contra de los grandes

¹⁰⁷ **FEDERACIÓN CRISTIANA DE CAMPESINOS SALVADOREÑOS (FECCAS)** Era un sindicato campesino salvadoreño, fundado en 1969, que pugnaba por una profunda reforma agraria, la libre sindicalización de los trabajadores del campo, la mejora de los salarios y priorizaban la unidad entre los diferentes sectores de la sociedad. FECCAS creció rápidamente en conjunto con las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) encabezadas por sacerdotes católicos progresistas inspirados en la Teología de la Liberación. Algunos líderes FECCAS eran delegados de la Palabra, predicadores laicos católicos vinculados a la Orden de los Jesuitas en El Salvador. FECCAS era fuerte inicialmente en la ciudad de Aguilares al norte de San Salvador, y en el departamento centro-norte de Chalatenango y el departamento centro-oriental de San Vicente, y luego se expandió por todo el país durante la primera mitad de la década de 1970. En 1974, FECCAS se unió con la Unión de Trabajadores del Campo (UTC) y creó el Sindicato de Trabajadores Rurales (STR o FECCAS-UTC) la organización campesina más fuerte que haya conocido el país, así mismo, se unió a un grupo de sindicatos de trabajadores urbanos para formar una organización de amplia oposición llamada Frente de Acción Popular Unificado (FAPU). En 1975, FECCAS-UTC se retiró del FAPU para formar junto con otros grupos el Bloque Popular Revolucionario (BPR). El BPR era, principalmente, una organización de base rural. En 1979, FECCAS-UTC proporcionó la mayoría de los miembros de la BPR. El BPR fue la más grande de las organizaciones opositoras y tuvo capacidad de organizar manifestaciones masivas y marchas. Posteriormente el Bloque se unió a las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) y, posteriormente, formó parte del FMLN. FECCAS fue objeto de represión por parte de las fuerzas gubernamentales desde el momento en que sus organizadores comenzaron a movilizar a los campesinos en la década de 1960. La represión del gobierno provocó que miembros de FECCAS se inclinaron por la lucha armada, incorporándose a las FPL. FECCAS desapareció en los primeros años de la década de 1980 debido a que en la práctica, casi toda la actividad laboral y reivindicativa fue extirpada por las frecuentes masacres de opositores.

¹⁰⁸ **UNIÓN DE TRABAJADORES DEL CAMPO (UTC)** Fue un sindicato campesino salvadoreño fundado en 1974, cuyos objetivos fueron los mismos que los de FECCAS, reformas agraria, mejores salarios, libertad de sindicalización y pugnaba por la unidad de los sectores campesinos y de trabajadores. En un principio la UTC mantuvo un camino independiente con respecto a FECCAS, posteriormente, con su diario contacto con las bases campesinas, la similitud de las prácticas políticas observadas, la coincidencia de los objetivos perseguidos, la conciencia de trabajar con y para los mismos sectores populares, la afinidad ideológica de sus programas políticos, las terminaron conduciendo a crear la Federación de Trabajadores del Campo (FTC), después de la unidad campesina el camino de la UTC fue el mismo que FECCAS.

terratenientes para la obtención de mejoras laborales; frente a ello, la respuesta de los primeros fue la represión y la unidad. Poco a poco, los campesinos fueron comprendiendo que los terratenientes estaban unidos con los de otras zonas, hecho que hacía a sus enemigos más poderosos, y por lo mismo ellos también tenían que unirse con los campesinos de otras regiones del país. Por otra parte, se fue gestando la idea de que debían unirse con otros sectores de la sociedad para acrecentar su fuerza y su poder de presión en busca de reformas.

El campesinado consideró, como sus aliados naturales en la rebelión, a la clase obrera de la ciudad; a las capas más explotadas de la pequeña burguesía (pequeños productores y comerciantes); y a los sectores más oprimidos de las capas medias (maestros, estudiantes, obreros, etcétera).¹⁰⁹ El objetivo era lograr que estas fracciones se incorporaran en una sola organización, de manera que, en torno a la alianza obrero-campesina y bajo la dirección del proletariado, se pudiera asestar el golpe definitivo al gobierno y a la oligarquía, sepultando para siempre la explotación y la injusticia.

Con esta lógica, para 1975, FECASS y UTC entraron en contacto y se articularon en la Federación de Trabajadores del Campo (FTC), la organización campesina más fuerte que ha conocido la historia del país. A lo largo de ese año, esta organización estableció nexos con la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños 21 de Junio (ANDES), las Fuerzas Universitarias Revolucionarias 30 de Julio (FUR-30), los Universitarios Revolucionarios 19 de Julio (UR-19), la Unión de Pobladores de Tugurios (UPT) y el Movimiento Estudiantil Revolucionario de Secundaria (MERS). El 5 de agosto de 1975 nació el Bloque Popular Revolucionario (BPR), como un frente de masas que buscaba asegurar al movimiento popular objetivos más amplios y un aporte teórico más sólido pero basado en las masas campesinas.

Al mismo tiempo del surgimiento de la unidad popular y la fundación de los frentes de masas, también nacieron los primeros grupos político-militares. En 1970 aparecieron la

¹⁰⁹ *Op.Cit.*, Moreno Parada, p. 38.

Fuerzas Populares de Liberación “Farabundo Martí” (FPL), primer grupo guerrillero en el país, formado por sectores escindidos del Partido Comunista Salvadoreño (PCS, fundado en 1930) que eligieron la vía armada para instaurar un gobierno de tendencia marxista-leninista en El Salvador a través de la Guerra Popular Prolongada sin posibilidad de negociación con el “gobierno burgués” del PCN.

Posteriormente surgió el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), fundado en 1971 por algunos militantes del PCS y sectores radicalizados del PDC que consideraban la situación salvadoreña como revolucionaria y se lanzaron a la lucha para instaurar un gobierno marxista; para 1975 y después de una escisión del ERP nacieron las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (FARN). Para 1979 apareció la facción guerrillera del Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC), el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) sin mucho peso militar y político dentro del movimiento guerrillero. La última agrupación en sumarse, en 1980, a la lucha guerrillera fue el PCS.

Las cuatro organizaciones político-militares se afirmarían en su ideario y ganarían experiencia en la lucha armada durante la década de los setenta. Todas se sostenían en el ideario marxista-leninista (en algún caso, con elementos maoístas y trotskistas) y estaban empeñadas en la toma violenta del poder estatal por la vía armada. Aparte de competir entre ellas por la primicia revolucionaria, también lo hacían con el PCS, al cual le criticaban su apuesta por la conquista de la “democracia burguesa” como paso previo en la lucha por el socialismo. El PCS, finalmente, debió conformar su propia estructura militar en 1980- las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL)- para influenciar en el proceso armado gestado durante la década de los años setenta.

Estos grupos armados limitaron sus acciones guerrilleras durante los setenta a la ejecución de secuestros, “ajusticiamientos”, acciones propagandistas y alguno que otro ataque a pequeñas guarniciones militares; además, se dedicaron a proteger las acciones reivindicativas de los frentes de masas; estos hechos se irán incrementando conforme avanzó la década. Estas cinco agrupaciones se unieron, para 1980, en la Dirección

Revolucionaria Unificada (DRU) antecedente del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN).

A mediados de 1975, las organizaciones político-militares se acercaron, poco a poco, a las organizaciones populares y logrando que éstas, gradualmente, hicieran suyo el ideario revolucionario y, en consecuencia, dieran a sus demandas un carácter político y no sólo reivindicativo. Para 1979, esa influencia había alcanzado su mayor nivel, al tiempo que el grado de represión estatal y paramilitar alcanzara niveles exorbitantes.

Conforme la década de los setenta finalizaba, otras salidas, distintas de la solución militar, parecían cerrarse cada vez más. Los entusiasmos despertados por el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua se reflejaban en las mentes de los dirigentes, militantes y simpatizantes de las organizaciones populares y de las político-militares; en su imaginario, El Salvador estaba en camino de convertirse en otra Nicaragua, ante tal posibilidad los Estados Unidos, como se mostró en el capítulo anterior, no estuvieron dispuestos a permitirlo. Pero algo faltaba: la instancia organizativa capaz de dirigir el asalto al poder estatal y de contener la intensa represión que golpeaba, más que a los cuadros guerrilleros, a los sectores populares organizados, maestros y miembros de la Iglesia. Para 1981 estos grupos se fusionaron y se lanzaron a la lucha armada en busca de la instauración de un nuevo sistema capaz de traer justicia social a todos los salvadoreños.

2.2 LA PRIMERA JUNTA DE GOBIERNO CÍVICO MILITAR

Como se apuntó en el apartado anterior, fue un golpe de estado apoyado por Estados Unidos, el que expulsó a los militares y oligarcas de las riendas del estado en octubre de 1979; orquestado por algunos sectores de la sociedad, partidos políticos, militares y frentes de masas que veían con preocupación la situación a la que el gobierno del general Carlos Humberto Romero llevaba al país. El nuevo gobierno inmediatamente prometió la realización de reformas, el cese de la represión y la desaparición de los grupos paramilitares.

Sin embargo no todos los sectores de la sociedad estuvieron de acuerdo con el nuevo gobierno de la Junta. En lo que respecta a las organizaciones populares no pertenecientes al Foro, éstas mostraron mucho recelo. Cada una de ellas hizo su propia evaluación de la situación, propuso sus medidas y actuó con independencia.

La opinión del golpe viene dada a manera de ejemplo por lo declarado por las FPL y el BPR, que lo calificaron como: “una maniobra llevada a cabo por lo altos jefes militares, obedeciendo a las directrices del imperio norteamericano y a los explotadores criollos”.¹¹⁰ Afirmando que: “el falso golpe es una transacción en el seno de la tiranía y a espaldas del pueblo trabajador que pretende destruir las organizaciones del pueblo y detener la lucha popular, conservando intacto el régimen de explotación”.¹¹¹

Las organizaciones de masas levantaron una serie de reivindicaciones que la Junta no pudo responder efectivamente dados los problemas que enfrentaba para la promulgación, la puesta en práctica de las reformas prometidas y los obstáculos que le ponían, tanto oligarquía como los mismo sectores populares. Tampoco la represión cesó y los miembros de ORDEN, que en teoría estaba disuelta, seguían con su actividad represiva con total impunidad.

Ante la inoperatividad gubernamental y la falta de una respuesta efectiva a sus demandas por parte del gobierno, los frentes de masas continuaron e incrementaron sus acciones reivindicativas, pues el primero no logró articular ningún proyecto reformista y no decretó ninguna medida de transformación social o económica. Por su parte, las organizaciones militares continuaron con sus acciones al mismo tiempo que denunciaban el carácter represor y burgués del nuevo gobierno, considerándolo como un paliativo impulsado por los Estados Unidos para evitar el inevitable triunfo del pueblo salvadoreño en su camino a la “liberación nacional”.¹¹²

¹¹⁰ *Ibidem*, p. 93.

¹¹¹ *Ibidem*, p. 93.

¹¹² *Op.Cit.*, Castro Morán, p.283.

La actitud asumida por los sectores populares y guerrilleros sólo incrementó la represión por parte de las fuerzas armadas, impulsada por Estados Unidos promoviendo la línea de “ley y orden” entre los militares salvadoreños. Dicha línea rezaba acerca de la necesidad de poner bajo control las acciones de la izquierda (sectores populares y político-militares) pues el hecho de que salieran impunes de estas operaciones sólo incrementaría su intensidad y su frecuencia que pronto derivaría, si no se hiciera nada al respecto, en una revolución.¹¹³ La línea estimulada por los norteamericanos sólo acrecentó la represión, hecho que vino a apresurar la caída de la Junta el 2 de enero de 1980 con la salida, en bloque, de los miembros civiles de la Junta.

2.3 SEGUNDA JUNTA DE GOBIERNO: JUNTA DEMOCRÁTA CRISTIANA

Al desaparecer la Junta Cívico-Militar, ésta fue suplida por otra, en la cual el componente civil lo ocupó el PDC en alianza con los militares. Los miembros renunciando de la primera Junta se dispersaron, algunos pasaron a formar parte de las organizaciones de masas y otros salieron al exilio para evitar la muerte.

En el contexto de inoperatividad y deslegitimación en que se encontraba el nuevo gobierno, los sectores populares y guerrilleros consideraron que el gobierno se encontraba debilitado y que era el momento adecuado para asestar golpes definitivos al régimen y al poder burgués. Las diferentes organizaciones, tanto militares como de masas, coincidieron en que había que preparar la toma del poder. Y ¿cómo debía hacerse?.

“Mediante un conjunto de acciones que combinaran la insurrección popular y el uso de fuerzas armadas; para lo primero se hacía necesario el respaldo del más amplio espectro social, es decir, una alianza que permitiese convertir las demandas populares, definidas por los frentes de masas, en demandas nacionales; para lo segundo, era imprescindible la creación de un aparato armado capaz de enfrentar con éxito al ejército gubernamental”.¹¹⁴

¹¹³ *Ibidem*, p. 288.

¹¹⁴ *Op.Cit.*, Moreno Parada, p. 97.

Con la idea de la unidad como medio de adquirir poder para derrocar el régimen, los frentes de masas y las organizaciones guerrilleras, cada una por su lado, decidieron unir esfuerzos con miras al derrocamiento del sistema y la instauración de uno propio.

Las organizaciones de masas se unieron en la Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM), que aglutinó al BPR, el FAPU, la UDN¹¹⁵ y las LP-28, y se dieron a conocer las líneas programáticas en torno a las que se agrupaban. El documento emitido, Programa de Gobierno, recogía los problemas que habían sido el eje de la lucha política en el país: “democracia, participación popular, libre ejercicio de la libertad de expresión, organización, culto y respeto a los derechos humanos. En el ámbito administrativo, las organizaciones firmantes prometían poner fin a la corrupción.”¹¹⁶ En el aspecto social, el Programa planteaba satisfacer en forma creciente las necesidades básicas de toda la población, dando prioridad a la alimentación y no al modelo agroexportador impulsado por la oligarquía.

A raíz del acuerdo de los frentes de masas, las acciones colectivas llevadas a cabo por los sectores en ellos agrupados adquirieron mayor coordinación y su convocatoria estuvo ligada al objetivo de mostrar la fuerza organizativa que habían alcanzado. De manera paralela, cada una de las organizaciones populares continuó encabezando paros de actividades, ocupaciones de locales, empresas y tierras.

Posterior a la unidad de las organizaciones populares, se inició el intento por ampliar la base social de apoyo, incorporando nuevos grupos; esta ampliación suponía el ingreso de los sectores expulsados de la 1era. Junta, quienes se habían organizado en el Frente Democrático Salvadoreño (FDS),¹¹⁷ esta unión se realizó a través de la discusión y

¹¹⁵ **Unión Democrática Nacionalista (UDN)** Con esta denominación legal se agruparon las asociaciones y los sindicatos de filiación comunista durante la etapa de la dicotomía fuerzas armadas-organizaciones populares. La UDN es el único partido legalmente registrado de todos los que pertenecen al FMLN. A principios de 1988, muchos de sus dirigentes volvieron a El Salvador, pero no participaron en las elecciones.

¹¹⁶ Gilly, Adolfo, *Guerra y Política en El Salvador*, México, Nueva Imagen, 1981, p. 295.

¹¹⁷ **Frente Democrático Salvadoreño (FDS)** fundado en los comienzos de marzo de 1980, integrada por las organizaciones: Movimiento independiente de profesionales y técnicos de El Salvador (MIPTES), y los partidos políticos Movimiento Popular Social Cristiano (MPSC), un desprendimiento del Partido Demócrata Cristiano y por el Movimiento Nacional Revolucionario.

aprobación de un documento denominado Plataforma Programática para la instauración de un Gobierno Democrático Revolucionario, dicho documento sirvió de base para la formación del Frente Democrático Revolucionario (FDR) el 2 de abril de 1980.¹¹⁸

Dicha plataforma sostenía que el sistema salvadoreño estaba crisis, puesto que “Las estructuras económicas y sociales de nuestro país, que han garantizado el enriquecimiento desmesurado de una minoría oligárquica y la explotación de nuestro pueblo por el imperialismo yanqui, se encuentran en una crisis profunda e insalvable.”¹¹⁹ También consideraba en crisis al gobierno defensor de los intereses de la oligarquía y un fracaso en sus intentos reformistas, ello a pesar del apoyo norteamericano.

Estimaba la situación de crisis como propicia para la revolución y para que el pueblo tomara, ahora que había adquirido unidad y su accionar crecía día a día, el poder, por ello señalaba a la revolución como “popular, democrática, anti-oligárquica y busca conquistar la efectiva y verdadera independencia nacional. Sólo la victoria revolucionaria detendrá la criminal represión y hará posible que el pueblo conquiste la paz de que hoy no goza; una paz sólida, basada en la libertad, la justicia social y la independencia nacional”. La revolución era concebida como indetenible a pesar de los esfuerzos oligárquicos y estadounidenses, debido a la unidad de todos los sectores populares y medios de la sociedad salvadoreña.

Aparte de las consideraciones con respecto al estado de la nación, la Plataforma proponía: derrocar al gobierno actual y sustituirlo con un gobierno democrático revolucionario; asimismo planteaba destruir al ejército nacional, identificado como represor, y al sistema político impuesto por la oligarquía; también buscaba acabar con el poder político y económico de la oligarquía y con la dependencia económica, política y militar de los Estados Unidos; acabar con la represión para asegurar el pleno disfrute de

¹¹⁸ Lungo Ucles, Mario, *La Lucha de las Masas en El Salvador*, San Salvador, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, 1987, pp. 127

¹¹⁹ Rouquié, Alain, *Guerras y Paz en América Central*, Trad. Daniel Zadunaisky, México Fondo de Cultura Económica, 1994, Sección de Obras de política y Derecho, pp. 358.

los derechos humanos de toda la sociedad; disolución de los cuerpos represivos y; por último, esclarecimiento de desaparecidos y castigo a los culpables.

Además, deseaba poner en marcha un programa de reformas, entre ellas la agraria; crear empleos y un sistema de seguridad social, así como nacionalizaciones de las grandes empresas.

Como se percibe, el programa revolucionario popular buscaba destruir el régimen político, económico y social auspiciado por los militares, ya que sólo beneficiaba a la oligarquía y a los norteamericanos que, a su juicio, eran los mayores beneficiarios de la explotación del pueblo por ello había que expulsarlos, en sustitución de dicho sistema buscaba implementar un régimen político, social y económico totalmente diferente, uno que beneficiara al pueblo en general.

Algo importante de la Plataforma es el hecho de que no estableció diferencia alguna entre el gobierno de la Junta y el anterior al de 1979, ya que a su juicio era una continuación del mismo sistema sólo con diferentes rostros, puesto que las condiciones de explotación y pobreza seguían vigentes. Para los redactores de la Plataforma todo seguía igual.

En lo que respecta a las organizaciones político-militares, el proceso de unidad tardó más debido a las reticencias de tipo ideológico y militar de cada una de ellas. Las FPL fueron las primeras en manifestar públicamente su disposición a iniciar un proceso de unificación con el resto de los grupos guerrilleros. La evaluación favorable del último trimestre de lucha de 1979, en la que se logró impedir la consolidación de la 1era. Junta y el entusiasmo generalizado por la situación de Nicaragua, dieron paso al esfuerzo de unificación. El 22 de mayo de 1980, el PCS, las FPL y las FARN anunciaron la fundación de la Dirección Revolucionaria Unificada (DRU) y propusieron una insurrección armada como solución a la crisis: “Ya nadie debe confundirse. Ésta es la única alternativa verdadera y eficaz.”¹²⁰ Asimismo, convocaba a las fuerzas revolucionarias a unirse con las democráticas

¹²⁰ *Op. Cit.*, Gordon Rapoport, p. 294.

para combatir por la liberación del pueblo salvadoreño y la expulsión del país “a los invasores [estadounidenses] y derrotar a sus instrumentos y sirvientes internos [PDC]”.¹²¹

A partir de la unificación revolucionaria, las acciones guerrilleras se intensificaron. Los ataques a cuarteles de la Guardia Nacional, esporádicos hasta mediados de diciembre de 1979, se acrecentaron, a las ejecuciones de miembros de ORDEN vinieron a sumarse irrupciones de grupos armados en pequeñas localidades, durante las cuales los guerrilleros llamaban a la población a unirse a la lucha e impartían de manera pública instrucciones en el manejo de armas.

Alrededor de la constitución de organismos de unificación (CRM y DRU) y de la Plataforma Programática para la instauración de un Gobierno Democrático Revolucionario, la acción popular se desplegó tomando como eje fundamental la agitación urbana y rural; los atentados dinamiteros, las ocupaciones de tierras, centros laborales y radiodifusoras, las mismas huelgas fueron utilizadas principalmente como medios de agitación. A principios de 1980, el campo popular había logrado articular un programa en el que se expresaba una serie de demandas nacionales y que encontró el apoyo del amplio espectro social salvadoreño que incluía sectores burgueses y pequeños burgueses reformistas.

Frente a la unión de acción establecida por los sectores populares y medios; así como la unidad guerrillera, la respuesta de los funcionarios de la nueva Junta fue la represión. El gobierno desconoció los acuerdos establecidos durante el periodo de la 1era. Junta, también relegó a un segundo plano las demandas y reivindicaciones de estos grupos, al incremento de la represión se sumó la impunidad en las acciones de las agrupaciones paramilitares, todo esto contribuyó a agudizar la radicalización del movimiento popular organizado y a extender el apoyo del órgano que los representaba (la CRM) entre los sectores medios y bajos de la población. Frente a la represión desatada por

¹²¹ *Ibidem*, p. 264.

la nueva Junta de gobierno, los Estados Unidos continuaban defendiendo y apoyado a la Junta haciéndola pasar como reformista y respetuosa de los derechos humanos.

En este contexto se dieron a conocer las reformas anunciadas por la Junta, impulsadas por Estados Unidos para detener la radicalización de la sociedad y ganar apoyo social a la Junta en detrimento de las fuerzas populares. La reforma más importante fue la agraria que, sin embargo, no tuvo el éxito esperado debido a la dura oposición de la oligarquía, quién obstaculizó todo intento de aplicación de la misma. A pesar de ello, la fase I del plan se aplicó, contempló la expropiación de las propiedades iguales o superiores a 500 hectáreas para repartirlas entre los campesinos agrupados en cooperativas.¹²²

Con la aplicación de la reforma agraria se buscaba, en teoría, destruir el poder de los oligarcas de extrema derecha y, al mismo tiempo, crear apoyo campesino masivo a la Junta, sin embargo, los hechos demostrarían que el objetivo principal declarado no eran los grandes terratenientes. Al amparo de los requerimientos de la reforma agraria, los poblados en los que tenía influencia las organizaciones de izquierda fueron atacados, y sus habitantes fueron reubicados en otras localidades. El ejército fue la punta de lanza y ejecutor de la reforma, ocupando las propiedades expropiadas y organizando a los campesinos según la conveniencia del régimen. A pesar de los vicios que surgieron con la aplicación de la reforma, la Fase I se cumplió parcialmente. El intento de reforma trajo como consecuencia indirecta mayor represión, pues agrupaciones como ORDEN eliminaban a los campesinos que trataban de apoderarse de la tierra. Entre enero y agosto de 1980, el número de campesinos muertos fue más de la mitad de los 7 500 civiles asesinados.

A la par de la reforma agraria, el gobierno democristiano decretó un alza a los salarios de los trabajadores de la industria, buscando el mismo objetivo que se deseaba con la promulgación de la reforma agraria.

¹²² *Ibidem*, p. 294.

Sin embargo, las reformas no contribuyeron a la desmovilización de las organizaciones populares, por el contrario, acrecentaron sus actividades de protesta dada la inoperatividad de las reformas y al aumento de la represión por parte de las fuerzas gubernamentales y de la oligarquía. Poco a poco, las reformas fueron dejadas de lado pues no cumplieron con los objetivos que buscaban sus redactores.

La represión alcanzó su punto máximo en marzo de 1980 con el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, personaje icónico de la lucha popular y voz crítica de las injusticias del sistema y la represión. Para ese mes la cantidad de muertos y desaparecidos ascendía ya varios cientos y parecía incontenible, la inoperancia del gobierno desesperaba a la comunidad y, en este contexto, Monseñor Romero continuaba con sus declaraciones en contra del gobierno y con sus acusaciones en contra de la oligarquía a la que identificaba como la causante del clima de violencia que vivía la nación. A la sazón declaraba: “el poder real está en manos del sector más represivo de las fuerzas armadas”¹²³ y pedía a los gobernantes detener las matanzas de aquellos cuyas “manos están rojas de sangre”;¹²⁴ al mismo tiempo arengaba a los diversos sectores de la sociedad a participar activamente en las acciones reivindicativas y a luchar por sus derechos. Monseñor Romero era considerado como el dignatario eclesiástico que simbolizaba la legitimidad de la participación popular en el proceso político y garantizaba con su acción cotidiana la defensa de ésta; por lo mismo, resultaba incómodo para la clase dominante.¹²⁵

El 24 de marzo mientras Monseñor Romero oficiaba misa en la Capilla del Hospital de la Divina Providencia, una bala explosiva de un fusil calibre .22 equipado con mira telescópica, disparado por un experto tirador, le partió el corazón.¹²⁶ Momentos antes de

¹²³ *Op.Cit.*, LaFeber, p. 325.

¹²⁴ *Ibidem*, p. 325.

¹²⁵ *Op.Cit.*, Gordon Rapoport

¹²⁶ *Op.Cit.*, Castro Morán, p. 315.

su muerte, había conminado al presidente Carter a no otorgar la ayuda económica ofrecida por Estados Unidos a la Junta y abstenerse de intervenir en El Salvador; a los demócratas cristianos a trabajar “en el campo político fuera del gobierno”;¹²⁷ a los miembros del ejército, en especial a los soldados de tropa, les pedía: “Detengan la ola de muertos en este país [...] les suplico, les pido, les ordeno en el nombre de la Iglesia, no matar [...] A los soldados salvadoreños, no obedezcan ninguna orden de matar”¹²⁸; con respecto a las órdenes de represión de sus superiores, les aconsejaba: “Ningún soldado está obligado a obedecer una orden si va en contra de su conciencia”.¹²⁹ Su voz ha sido acallada por “asesinos profesionales contratados por la oligarquía salvadoreña en Miami”¹³⁰ declaró a la prensa el 26 de marzo el embajador norteamericano, Robert White.

El homenaje póstumo a Monseñor Romero fue una de las últimas grandes concentraciones de masas del año 1980. Durante las ceremonias fúnebres, a la que asistieron más de 100 000 personas, francotiradores apostados en el Palacio Nacional y en edificios circundantes, dispararon contra la multitud, dejando como saldo 50 muertos y 600 heridos.¹³¹ Por su parte, la CRM convocó a una huelga en protesta por el asesinato de Monseñor Romero y como presión para cesar las medidas represivas para finales de marzo; ésta comenzó en el transporte y se extendió a otros sectores.

Un mes después, en abril de 1980, los sectores populares y medios dieron un paso significativo en el proceso de unidad que se venía dando desde aproximadamente dos años. Las organizaciones de masas aceptaron cooperar con los sectores medios y coordinar sus acciones. Dicha decisión no fue casual, ya que la participación de los Estados Unidos se incrementaba diariamente, además la popularidad de Reagan subía a diario de

¹²⁷ *Op.Cit.*, Gordon Rapoport, p. 305.

¹²⁸ *Op.Cit.*, Castro Morán, p. 315.

¹²⁹ *Op.Cit.*, Gordon Rapoport, p. 305.

¹³⁰ *Op.Cit.*, Castro Morán, p. 315.

¹³¹ *Op.Cit.*, Gordon Rapoport, p. 305.

cara al proceso presidencial norteamericano, así que las agrupaciones populares y medias encaraban la posibilidad de confrontar un poder de fuego mayor si acaso resultaban ganador el republicano; esta suposición cobraba mayor veracidad al escuchar los discursos de campaña de Reagan. La muerte del Arzobispo Romero y la división interna de la Junta abrió nuevas posibilidades de obtener apoyo.

En consecuencia, las organizaciones populares y medias se constituyeron en el Frente Democrático Revolucionario (FDR) en donde se reunieron 16 organizaciones: la CRM, sindicatos obreros, estudiantes bachilleres y de la Universidad de El Salvador, organizaciones campesinas, etcétera. El FDR se convirtió en el brazo político de la revolución, incluso el Partido Comunista abandonó sus intentos de trabajar por la vía política electoral y se unió al FDR, cuya dirección fue ocupada por Guillermo Ungo, Enrique Álvarez Córdoba y Rubén Zamora. Se reconoció a los grupos guerrilleros, organizados en la DRU, como sus aliados militares.

Para octubre del mismo año y después de arduas negociaciones en cuanto a qué línea militar seguir, los grupos guerrilleros que conformaban la DRU y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC) se constituyeron en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y se erigieron como contraparte militar del FDR.

Las dos organizaciones diferían en cuanto a sus orígenes e ideologías, pero se unieron en su determinación de deponer al gobierno oligárquico apoyado por los norteamericanos, el cual se había convertido gradualmente en un régimen militar con fachada civil que le daban los demócratas cristianos. La nueva organización, conocida como FMLN-FDR, tenía como objetivo reemplazar al antiguo sistema con grandes programas de reforma en los campos político, social y económico, además buscaba expulsar la influencia norteamericana de El Salvador. Un cambio importante dentro de los objetivos del FMLN-FDR es la búsqueda de instaurar un sistema político-económico totalmente diferente al establecido por los oligarcas, con ello se cerró la posibilidad de negociación con el régimen pues ya no creían que el gobierno fuera capaz de resolver la

situación ni de componer el sistema que consideraban estaba mal desde sus bases y por ello era necesario crear uno nuevo. La nueva organización aceptó como su programa político la Plataforma Programática del Gobierno Democrático Revolucionario promulgado el 23 de febrero de 1980.

Para la consecución de sus objetivos el FMLN-FDR planteó dos vías: 1) las acciones reivindicativas de cara a la acumulación de fuerza para el derrocamiento del régimen, y 2) las acciones armadas.

En la primera, cabe destacar las grandes marchas y manifestaciones convocadas inmediatamente después del establecimiento del FDR; de todas estas manifestaciones habría que destacar el intento del FDR de organizar una huelga general en agosto de 1980. El 13 de agosto el FDR convocó a una huelga general de tres días con el objeto de exigir la suspensión del estado de sitio y la libertad de los presos políticos, entre otras demandas, sin embargo, fue seguida sólo de manera parcial. En esa ocasión, “la movilización del ejército, la amenaza de la Junta de despedir a los empleados y cerrar los comercios que se adhirieran, así como las fallas de las organizaciones político-militares en proteger a los obreros en huelga, relativizaron el éxito del paro.”¹³² El resultado de la huelga debilitó de cierta forma la unidad opositora. La probada eficacia de las medidas que aplicó la Junta Democristiana para desalentar la extensión del paro patrocinado por el FDR, abrió paso a la militarización de los servicios públicos –plantas eléctricas, agua, telecomunicaciones, etcétera. En la segunda, las acciones guerrilleras se incrementaron debido a que sus grupos armados contaban con un entrenamiento capaz y dotado de un buen equipo, suficiente para efectuar atentados, secuestros, acciones de hostigamiento y aun asaltos a cuarteles pequeños y medianos de los cuerpos de seguridad y del ejército.

En este momento el FMLN-FDR aún priorizaba a la acción reivindicativa como medio de derrocamiento del régimen y a la vía armada como de apoyo a estas actividades. Consideraba que el desgaste de las fuerzas del orden y de los grupos paramilitares era

¹³² *Op.Cit.*, Gordon Rapoport, pp. 313-314.

inevitable y que la defensa de los grupos populares y de sus manifestaciones podría hacerse efectiva.

Frente a la unidad de los sectores populares y el incremento de sus acciones, tanto reivindicativas como armadas, los funcionarios de Washington se preocuparon porque si los revolucionarios tomaban el poder, el grupo más moderado, el de Ungo no podría contener a los sectores más radicales del movimiento, tal y como sucedió en el caso de Nicaragua. En el segundo semestre de 1980, Carter trató de dividir al FDR, intentando convencer a los sectores moderados del FDR para que integraran una coalición con los militares, en un intento por reciclar la primera Junta de 1979, pero era demasiado tarde. Ninguna de las partes confiaba en la otra. “El Departamento de Estado contradice sus palabras -dijo uno de los dirigentes del FDR Rubén Zamora- Por un lado, nos dicen que somos tan débiles que un supuesto loco de la izquierda nos comería vivos. Por el otro lado, nos apremian para que nos integremos a la junta de modo que ésta pueda contar con nuestra fuerza para quebrar a la oligarquía.”¹³³ Carter no podía obligar al ejército a compartir el poder con los moderados del FDR pues los acontecimientos recientes habían generado tal desconfianza entre ambos bandos que compartir el poder se antojaba muy difícil.

La incapacidad para compartir el poder entre miembros del FDR y los militares, así como la imposición de la línea represiva dentro del aparato del Estado, principalmente entre los militares, agudizó la desconfianza entre ambos sectores; pero lo que confirmó la imposibilidad de un gobierno compartido o de un acuerdo, fue el asesinato de los dirigentes del FDR por parte de los cuerpos de seguridad en noviembre de 1980, en el mismo mes en que Ronald Reagan ganó las elecciones presidenciales en los Estados Unidos.

El 27 de noviembre, los principales dirigentes del FDR, Enrique Álvarez Córdova, presidente, Juan Chacón del BPR, Manuel Franco de la UDN, Humberto Mendoza del MLP

¹³³ *Op.Cit.*, LaFeber, p. 329.

y Enrique Barrera del MNR, se reunieron en el colegio de los jesuitas, ubicado a varias cuadras de la embajada norteamericana en San Salvador, para discutir sus estrategias, entre ellas se estaban preparando para mantener conversaciones exploratorias con el presidente de la Junta, José Napoleón Duarte. Las fuerzas de seguridad irrumpieron en el recinto y capturaron a los dirigentes del FDR. Al día siguiente fueron hallados los cuerpos con evidentes huellas de tortura. Las organizaciones populares culpaban a los cuerpos de seguridad y exigieron el esclarecimiento del crimen, por su parte, Duarte admitió en privado al embajador norteamericano White la responsabilidad del ejército en las muertes e, implícitamente, aceptó también que ni él ni ningún otro civil podía controlar esas fuerzas.¹³⁴ Luego del asesinato de los líderes, la dirección del FDR fue asumida por Guillermo Ungo y Rubén Zamora.

Al finalizar 1980, como resultado de las acciones represivas emprendidas por los militares en contra de los sectores populares y de los asesinatos generalizados por parte de los grupos paramilitares de derecha, el régimen consiguió desarticular el movimiento de masas; al término del año, más de 7 500 salvadoreños –militantes, colaboradores y simpatizantes de las organizaciones populares- habían sido asesinados y unos 200 000 habían salido del país; los principales dirigentes de las organizaciones opositoras y del FDR fueron liquidados, apresados u obligados a la clandestinidad, y los sindicatos más combativos ilegalizados y desmovilizados.¹³⁵

La situación imperante llevó al convencimiento de los sectores populares agrupados en el FMLN-FDR y de otros grupos de los sectores medios de la sociedad salvadoreña, sobre la inexistencia de alternativas para superar la crisis que no fuera la insurrección armada. Así, hubo un reclutamiento masivo hacia las organizaciones político-militares. Esto puso fin a la vía de la movilización como medio de presión y de derrocamiento del régimen, ello provocó que las manifestaciones y acciones reivindicativas disminuyeran considerablemente a partir de 1981, así el régimen ocupó nuevamente las calles de San

¹³⁴ *Ibidem*, p. 330.

¹³⁵ *Op.Cit.*, Moreno Parada, p. 98.

Salvador y de otras ciudades principales, mientras el pueblo se lanzó a la insurrección armada para resolver la crisis de El Salvador. La violencia desatada durante 1980 forzó la incorporación de los militantes de las organizaciones populares al FMLN, que vio aumentar de manera significativa sus filas de combatientes.

2.4 LA OFENSIVA FINAL DE 1981: UN INTENTO POR ESTABLECER EL SOCIALISMO

Para finales de 1980 y después del asesinato de Monseñor Romero en marzo, la masacre del río Sumpul en mayo; el secuestro, tortura y asesinato de seis líderes del FDR en noviembre; la violación y tortura de tres monjas norteamericanas en diciembre y el homicidio de decenas de salvadoreños más; las fuerzas populares agrupadas en los frentes de masas y en las organizaciones políticas y militares se percataron de que la vía armada era el único camino posible para la solución de la crisis salvadoreña. Así, estas fuerzas se lanzaron a la insurrección armada y en enero de 1981 llevó a cabo su primera acción de gran envergadura, la Ofensiva Final, como se menciona en el capítulo anterior.

La inclinación de la sociedad salvadoreña por la vía armada para resolver la profunda crisis de la nación, permitió que a principios de enero de 1981, la organización guerrillera del FMLN, lanzara la “ofensiva final”. Así Reagan se “encontraría con una situación irreversible en El Salvador”,¹³⁶ cuando llegara a la Casa Blanca. Los rebeldes afirmaban contar con una fuerza de 10 000 efectivos; las fuentes militares norteamericanas estimaron el número en 2 500.¹³⁷ La premura del lanzamiento, a pesar de la falta de efectivos para hacerle frente al ejército y a los grupos paramilitares, se explica por el hecho de la evidente llegada de Reagan a la presidencia de los Estados Unidos y ello se traduciría en una ayuda ilimitada al gobierno de la Junta y el peligro potencial de una intervención armada estadounidense.

El lanzamiento de la ofensiva significó la decisión de las fuerzas armadas revolucionarias del FMLN de no aceptar la mediación de los Estados Unidos en la

¹³⁶ *Ápud.*, LaFeber, *Op.Cit.*, p. 330.

¹³⁷ *Op.Cit.*, LaFeber, p. 330.

resolución de la crisis, ya que existía la posibilidad de que éstos formaran una alianza con una dictadura con fachada democrática.

El 10 de enero de 1981, el FMLN lanzó una ofensiva de gran envergadura, que los dirigentes calificaban como “final”, con el objetivo declarado de tomar el poder antes de la toma de posesión de Ronald Reagan como presidente de los Estados Unidos, que sucedería el 20 del mismo mes y, a su vez, colocar al nuevo presidente ante el hecho consumado de una nueva victoria revolucionaria en Centroamérica, y en un intento de imitación de la ofensiva final sandinista de 1979. La ofensiva comenzó con un escueto comunicado del FMLN en el que se declaraba: “A las 6 de la mañana de hoy se inició la ofensiva general. El enemigo está perdido; lo tenemos rodeado; la justicia popular ha llegado”.¹³⁸ La ofensiva fue planificada como una combinación de operaciones, por un lado la acción militar y, por el otro, la insurrección popular. La operación militar sería llevada a cabo por las huestes del FMLN, mientras la insurrección sería preparada por las organizaciones populares pertenecientes al FDR, estas acciones tenía como uno de sus objetivos provocar una desertión masiva de las fuerzas armadas gubernamentales y el paso de sus unidades a fortalecer a los rebeldes.

Los combates y la insurrección comenzaron con el ataque a varias guarniciones del ejército y acciones reivindicativas en las principales ciudades del país, la ofensiva se llevó a cabo en ciudades como: San Salvador, Santa Ana, Sonsonate, Santa Tecla, San Vicente, Usulután, San Miguel y otras urbes secundarias. Conforme el tiempo pasaba se hacía cada vez más evidente que, pese a los preparativos, el FMLN no estaba listo para confrontar y derrotar al ejército y a los cuerpos de seguridad. La insurrección fue menor a lo esperado y la desertión masiva de efectivos militares nunca llegó, no obstante que en Santa Ana el capitán Francisco Mena Sandoval se sublevó con un centenar de sus efectivos y tomó la guarnición; sin embargo, al poco tiempo se retiró del puesto militar.¹³⁹ Al paso de las

¹³⁸ *Ápud. El Salvador: Proceso Político y Guerra (1979-1986)*, San Salvador, El Salvador, Centro de Investigación y Acción, 1987, s/a, Cuadernos de Divulgación, núm. 4, pp. 32.

¹³⁹ *Op.Cit.*, Rouquié, p. 160.

horas y los días la ofensiva se atascaba en un empate técnico con la fuerza armada apoyada por grupos paramilitares y para el 20 de enero, día del juramento de Reagan, la ofensiva triunfó parcialmente pues el FMLN logró el control de algunas zonas del norte de El Salvador.

Un factor esencial del fracaso de la ofensiva fueron los Estados Unidos, quienes a pesar de saber el escaso número de combatientes del FMLN no dudaron en prestar la ayuda necesaria debido al peligro que representaba para la Junta, ya que ésta se encontraba deslegitimizada y en crisis.

El fracaso de la Ofensiva Final mostró, en primer lugar, el frágil proceso de unificación y de preparación de las agrupaciones de izquierda, tanto del FMLN como del FDR, y en segundo lugar, demostró el desgaste del movimiento de masas urbano hasta el punto en que, según Joaquín Villalobos “el enemigo logró agotarle sus posibilidades insurreccionales”.¹⁴⁰ De esta manera, el sector dentro del movimiento popular que estaba destinado a ser la vanguardia, quedó debilitado como producto de la represión, y en un momento en que sus fuerzas armadas no estaban al nivel necesario para hacerle frente al ejército gubernamental.

En enero de 1981 la dirección política y militar del FMLN-FDR, estaba perfectamente consciente de esa debilidad, sin embargo, decidió lanzar la ofensiva final que se esperaba fuera un golpe contundente al régimen y diera paso a la toma del poder. Creyó que la fuerza con la que contaban sería suficiente para derrotar al ejército y apoyar la insurrección popular, y provocar un efecto que le permitiera la victoria, a saber, la desertión masiva de miembros del ejército y su incorporación a las filas del FMLN.

Esta expectativa no se cumplió; la huelga y la insurrección no generaron el efecto esperado. En ese mismo mes quedó perfectamente claro que la fuerza armada seguía siendo el instrumento defensor del régimen por excelencia, que no era viable su

¹⁴⁰ *Ápud.* Moreno Parada, Op.Cit., p. 100.

resquebrajamiento interno y, en consecuencia, que había que derrotarlo por la vía militar. Había la necesidad de construir una fuerza armada popular capaz de derrotarlo.

El fracaso de la ofensiva también significó que el periodo de lucha de masas había concluido con el año de 1980. El saldo era desfavorable para el sector popular, pues no consiguió su objetivo estratégico: resquebrajar internamente a la última ayuda funcional del régimen, el ejército y, por esa vía, tomar el poder con la ayuda de los desertores de la milicia y el pueblo. Se sabía que al interior de la fuerza armada había un fuerte debate acerca de la necesidad y de la profundidad de las reformas, y algunas organizaciones político-militares habían establecido y mantenido contactos durante mucho tiempo con grupos de oficiales, de quienes se esperaba que se pasaran al lado de la sublevación.¹⁴¹

Sin embargo, el impulso de las masas fue insuficiente y por consiguiente vano para conseguir el resquebrajamiento de la institución armada. Por otro lado, dentro del ejército había tenido lugar un lento pero efectivo proceso de depuración en el curso del año 1980, lo que habría impedido la consecución del objetivo planteado por las organizaciones populares; la gran mayoría de los oficiales identificados con ideas reformistas fueron separados de los puestos de mando, incluido su mayor representante el coronel Majano, enviados a misiones al extranjero o marginados de los lugares donde podían hacer daño al proyecto contrainsurgente. Además, la conciencia corporativa germinada durante décadas entre los oficiales impulsó la necesidad de conservación de la institución armada, y sobre todo ante lo ocurrido en Nicaragua con la Guardia Somocista, sobre cualquier ilusión de cambio. Por último, la única voz con autoridad moral como para haber influido fuertemente en el resquebrajamiento, Monseñor Romero, había sido acallada meses atrás.¹⁴² La ofensiva de enero mostró el desgaste del movimiento de masas e hizo ver la unidad del aparato gubernamental con la derecha antirreformista, en su intento de evitar la toma del poder por los sectores populares por medio de la represión que haría posible el sofocamiento del FMLN y el FDR, y restablecer el orden en el país. Por su parte, las

¹⁴¹ *Ibidem*, Moreno Parada, p. 101.

¹⁴² *Ibidem*, p. 103.

fuerzas del FMLN y del FDR se vieron en la necesidad de derrotar al gobierno militarmente. Si bien la ofensiva había fracasado, la verdadera guerra civil comenzaba.

2.5 LA ÚLTIMA SOLUCIÓN: LA GUERRA CIVIL (1981-1992)

Cuando Ronald Reagan juró como presidente de los Estados Unidos la ofensiva del FMLN se había atascado. El ejército contuvo los ataques guerrilleros en los pueblos y en las ciudades por el apoyo prestado por los norteamericanos. Peor aún fue que los campesinos no se unieron a los revolucionarios en un levantamiento masivo. Los rebeldes terminaron controlando varios de los departamentos del norte como: Morazán, Chalatenango, Cabañas, Usulután, Santa Ana y la Unión; así como ciertos sectores en la zona Suchitoto-Guazapa, así como en el volcán Chichontepeque del departamento de San Vicente; pero en el resto del país el régimen había calmado la insurrección campesina con promesas de reforma agraria o con francas amenazas.¹⁴³

Con el fracaso de la Ofensiva Final El Salvador entró en una franca y abierta guerra civil, en donde se enfrentarían las fuerzas guerrilleras del FMLN y el ejército gubernamental apoyado militarmente por Estados Unidos, a estos contrincantes se sumaban la oligarquía antirreformista quien buscaba un retroceso al estado de las cosas anterior a 1979.

Los objetivos de triunfo a corto plazo que perseguía el FMLN no fueron alcanzados, y la ofensiva final, apresurada ante la inminente llegada de Reagan a la presidencia norteamericana, fracasó. Tanto como la convocatoria apresurada, en el fallo incidieron las divergencias tácticas e ideológicas entre las organizaciones revolucionarias y el cese del estado de desbordamiento popular, debido a la represión y al exilio de miles de salvadoreños.

Sin embargo, el revés del ataque armado no significó la anulación política ni militar de las fuerzas revolucionarias. El apoyo popular con que contaban les permitió fortalecer su retaguardia en la zona norte y noreste del país. En efecto, después de la ofensiva, el

¹⁴³ Prieto, Alberto, *Las Guerrillas Contemporáneas en América Latina*, Bogotá, Ocean Sur, 2007, pp. 205-206.

FMLN se dedicó a crear y reforzar su retaguardia, limpiando previamente el territorio de presencia enemiga en las zonas bajo control guerrillero, para ello se conformaron los Poderes Populares en Chalatenango sobre todo y en menor medida en San Vicente, Usulután, Cabañas, Cuscatlán y Santa Ana. La idea de estos poderes fue construir una identificación entre la insurgencia y la población, bajo el principio maoísta del pez y el agua. El pez era el guerrillero y, el agua, el pueblo donde se puede desenvolver el pez con plena seguridad y apoyo. Si al inicio se trataba de sobrevivir, luego se logró la estabilidad en los asentamientos de población civil, y se planteó la posibilidad de implementar la producción y, con ello, la organización de la población en el nuevo contexto de la guerra: esto es la construcción de la alternativa popular.¹⁴⁴

Los Poderes Populares, como expresión de la sociedad civil en las zonas de control guerrillero, definieron su propia política local y territorial, en contraposición con las desmanteladas alcaldías del régimen y en autonomía con respecto al FMLN. Puede decirse que “su tarea básica era la de intentar cubrir las necesidades básicas de la población, alimentos, salud, educación, y gestionar su seguridad física. Ahora bien, no eran meros organismos gestores, sino que mostraron una vocación política por convertirse en poder del pueblo frente al poder del régimen.”¹⁴⁵

Con las fuerzas del FMLN consolidándose y construyendo la alternativa popular en las áreas bajo su control, las huestes guerrilleras se abocaron a efectuar acciones de hostigamiento con carácter defensivo, sin embargo, ahora tenían que enfrentar una mayor oposición del gobierno democristiano, pues éste se vio reforzado por la ayuda norteamericana que se incrementó considerablemente y fue otorgada sin titubeo alguno.

Dentro de las acciones militares emprendidas por el FMLN estaba el acoso a pequeñas guarniciones del ejército y emboscadas a patrullas militares. Al mismo tiempo se ocupaban pequeños poblados para incitar a las personas a que sumaran a la lucha

¹⁴⁴ Perales, Losu, *Los Años de Plomo en El Salvador (1981-1992)*, México, Ocean Sur, 2009, pp. 5-7

¹⁴⁵ *Ibidem*, p. 6.

armada. Como respuesta a la táctica militar empleada por el FMLN, el gobierno Demócrata, apoyado por sus asesores norteamericanos, propusieron:

“[...] un combate global, dirigido sobretudo a aislar a la guerrilla de sus bases de apoyo, en el que el ataque militar se combinaba con medidas de carácter político [...] Esto suponía una estrategia inicial de contención, que diera tiempo para entrenar batallones especiales, capacitados para luchar contra el FMLN y, más adelante, emprender ataques masivos contra las zonas en las que la oposición armada tenía apoyo popular, así como asaltos selectivos combinados con programas de acción cívica en lugares donde el apoyo de la población al FMLN era más débil.”¹⁴⁶

Esta visión fue la que se utilizó en contra de la guerrilla, no sin obstáculos pues la oligarquía tenía otra estrategia, y como era costumbre sabotó o intentó sabotear el plan militar gubernamental, estos problemas, entre ambos actores, beneficiaron al FMLN.

Paralelamente a la disputa entre gobierno y oligarquía, las fuerzas guerrilleras consolidaron su retaguardia en el norte del país. En agosto de 1981, el ERP tomó la ciudad oriental de Pequín. Las FPL y ERP pasaron a controlar una parte del territorio nacional donde el ejército no entraba y el gobierno estaba ausente y viceversa. Zonas donde la guerrilla no tenía presencia significativa, en septiembre y octubre realizó ataques simultáneos en siete de los catorce departamentos del país. Al mismo tiempo, muchos dirigentes de organizaciones de masas y sindicatos abandonaron las ciudades para unirse “temporalmente” a la guerrilla.¹⁴⁷

De manera paralela a la organización de la retaguardia guerrillera y de su accionar militar, la Comisión Externa del FDR llevó a cabo una intensa campaña de difusión a nivel internacional, con el objeto de conseguir apoyo y ganar legitimidad a nivel mundial. El resultado más importante fue la declaración franco-mexicana, emitida en agosto de 1981.¹⁴⁸

¹⁴⁶ *Op.Cit.*, Gordon Rapoport, p. 320.

¹⁴⁷ *Op.Cit.*, Roquié, p. 160.

¹⁴⁸ **Declaración franco-mexicana** Esta declaración reconocía al FMLN-FDR como fuerza política representativa, y sugería la reestructuración del gobierno y el ejército, como paso previo a la realización de elecciones.

Militarmente las fuerzas contrarias se encontraban en un empate. El lento avance militar del FMLN, hacía pronosticar una lucha de larga duración. Por ello, la idea de una solución política negociada en el corto plazo fue adoptada por las fuerzas guerrilleras. Para octubre de 1981, los voceros del FMLN ofrecieron negociar la solución del conflicto sin condiciones previas. El gobierno norteamericano rechazó la proposición, alegando que la propuesta era sólo un truco del FMLN para ganar tiempo y alejar a los Estados Unidos del gobierno salvadoreño. Además, la política exterior norteamericana excluía tales negociaciones.

La negativa de Reagan y del gobierno salvadoreño para entablar negociaciones de paz con el FMLN se debieron, en primer lugar, a que Reagan realmente creía que los revolucionarios estaban respaldados por el comunismo internacional y, negociar con el FMLN, significaba perder terreno dentro del marco de la Guerra Fría. En segundo lugar, los estadounidenses creían que aún era posible la victoria militar, además, buscaban el establecimiento de un gobierno moderado, reformista y afín a los intereses y garante de su seguridad, excluyente de los guerrilleros a los que consideraban comunistas y títeres del comunismo internacional. En lugar de buscar la paz por medios políticos los democristianos y norteamericanos incrementaron las acciones militares contra el FMLN.

Superada la arremetida estatal de 1981, el FMLN comenzó una readecuación estratégica en la cual pasó de una visión insurreccional a otra enmarcada en la Guerra Popular Prolongada. Fue esa estrategia la que permitió que el FMLN trabajara en la conformación de una retaguardia firme, afincada en el control territorial de determinadas zonas del país. Poco a poco, el FMLN se convirtió en un ejército propiamente dicho, con las estructuras de mando y la capacidad operativa correspondientes; esta capacidad adquirida del FMLN le permitió consolidarse gradualmente, y colocarse en condición no sólo de aguantar los fuertes embates del ejército salvadoreño sino también de tomar la iniciativa militar y de poner en situación defensiva a las Fuerzas Armadas Salvadoreñas.¹⁴⁹

¹⁴⁹ *Op.Cit.*, LaFeber, p. 377.

Los referentes ideológicos siguieron siendo los mismos de los años setenta; es decir, los tomados del marxismo-leninismo en su búsqueda de la instauración del socialismo en El Salvador. Sin embargo, el debate de ideas cedió su lugar al fortalecimiento militar y al objetivo que se pretendía alcanzar a partir de él: la toma del poder por la vía armada. En la etapa inicial del FMLN fueron las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) las que impusieron al resto de las organizaciones su visión ideológica y su estrategia militar.¹⁵⁰

Para el primer semestre de 1982 los planes de Washington eran el establecimiento de un régimen moderado. Además, estaba en curso un programa de elecciones para una Asamblea Legislativa que formulara una Constitución y designara un presidente interino encargado de organizar elecciones presidenciales y, posteriormente, legislativas. Para marzo de 1982 se emplazó a elecciones para la Asamblea. El gobierno de Duarte ofreció al FMLN un lugar en las papeletas de votación pero bajo la condición de que depusieran las armas y se sometieran a las reglas del juego electoral. Sin embargo, los rebeldes comprendieron que someterse significaría su muerte política y también física. Sus sospechas se confirmaron cuando los escuadrones de la muerte hicieron pública una lista en donde se condenaba a muerte a cien revolucionarios de manera inmediata. En cambio el FMLN ofreció un diálogo directo con Reagan, sin condiciones previas, pero ni éste ni su gobierno aceptaron tal propuesta, pues apostaban todo su capital político a la realización de elecciones.¹⁵¹

Frente a la negativa de diálogo del gobierno, los revolucionarios hicieron un llamado a los salvadoreños a no participar en la votación para la Asamblea. El día de la votación sólo en algunas zonas controladas por los rebeldes no se llevaron a cabo las elecciones.

En el ámbito del FMLN, éste había superado la fase de resistencia posterior al fracaso de la ofensiva de 1981 y había consolidado su retaguardia, incluso en junio de 1982, había logrado debilitar la presencia del ejército en Chalatenango y Morazán, y

¹⁵⁰ *Ibidem*, p. 377.

¹⁵¹ *Ibidem*, p. 377.

ampliado el terreno bajo su control. Para enero de 1983, los revolucionarios lanzaron una ofensiva en la cual tomaron varios poblados importantes e incluso sitiaron las ciudades de Suchitoto y Tejuela y se ocupó la de Berlín.¹⁵²

A pesar de estos notables avances no todo era armonía dentro de la organización guerrillera, pues al igual que el ejército, se encontraba enfrascada en discusiones en torno a la estrategia a seguir. Éstas se agudizaron debido al fracaso de algunas de las acciones emprendidas tales como el caso del boicot a las elecciones de 1982. Estas discrepancias, habían dado lugar a dos corrientes dentro del FMLN. La primera, que llegó a ser mayoritaria dentro de las instancias directivas del Frente, y cuya cabeza más visible fue el ERP, proponía una solución negociada al conflicto en un corto plazo, aunque ello significaría cambiar el programa político. Entre otras razones, “por la amenaza que representaba una posible intervención armada directa de Estados Unidos, y porque el régimen se reconstruía sobre la exclusión de las fuerzas democráticas y revolucionarias”.¹⁵³ La segunda, que encabezaba el prestigiado líder guerrillero de las FPL, Salvador Cayetano Carpio, alias Comandante Marcial, “privilegiaban el objetivo de transformar las estructuras socioeconómicas, por encima del propósito de lograr una pronta solución al conflicto, y planteaba continuar las hostilidades hasta lograr esta meta, sin subordinarla a una eventual negociación”.¹⁵⁴ La primera corriente se decidía por la vía de la negociación y el camino democrático. La segunda corriente se basaba en la teoría guerrillera de la Guerra Popular Prolongada (GPP)¹⁵⁵ hasta la obtención de una victoria total. La disputa fue saldada después de que en abril de 1983, un comando guerrillero asesinó en Managua a Mélida Anaya Montes (Comandante Ana María) y el posterior

¹⁵² *Op.Cit.*, Prieto, p. 207.

¹⁵³ *Op.Cit.*, Gordon Rapoport, p. 325.

¹⁵⁴ *Ibidem*, p. 325.

¹⁵⁵ **Guerra Popular Prolongada (GPP)** Es una estrategia político-militar desarrollada por Mao Tsé-Tung. El concepto básico detrás de la guerra popular es mantener el apoyo de la población y atraer al enemigo al interior donde la población puede desangrarlos por medio de una mezcla de guerra móvil y guerra de guerrillas. El término es usado por los maoístas para su estrategia de lucha revolucionaria armada de largo plazo.

suicidio del Comandante Marcial en el mismo mes. Aparentemente, las fuerzas opositoras se mantenían unidas por la negativa de los Estados Unidos a negociar y por la necesidad de defenderse de la represión de los escuadrones de la muerte.¹⁵⁶ Zanjadas estas diferencias, el ERP comenzará a asumir un mayor protagonismo estratégico e ideológico, sobre todo debido a su capacidad militar, sin que ello significara la anulación total del peso de las FPL.

Después de estos acontecimientos, la posición que terminó predominando fue la que se inclinaba por una salida negociada en el corto plazo. De ahí la aceptación del FMLN-FDR a efectuar pláticas con el gobierno. Una vez superados los problemas, las acciones militares continuaron, a pesar del nuevo rumbo que tomó la dirección del FMLN, y durante el primer semestre de 1983, las fuerzas guerrilleras obtuvieron avances dentro del campo militar, lo que provocó la preocupación del gobierno de Reagan.

Esta situación contrastaba con las optimistas declaraciones de la embajadora estadounidense ante la ONU, Jeane Kirkpatrick quien, en febrero de 1983, cantó victoria durante una visita a El Salvador y, a la sazón, declaró: “Las guerrillas no están ganando nada [...] Ni siquiera esperan hacerlo” y aplaudió al “legítimo gobierno democrático”¹⁵⁷ del país. Pero un mes más tarde, Kirkpatrick, provocó una crisis dentro del gobierno republicano, al decirle a Reagan que a menos que la ayuda militar norteamericana aumentará rápidamente no sólo El Salvador caería en manos de los “comunistas” sino que toda Centroamérica podría quedar pronto bajo el control de regímenes de orientación soviética. Reagan, quien en verdad creía en la teoría de la conspiración cubano-soviética con miras a la dominación comunista de su “zona de influencia”, se dedicó a declarar públicamente que si el Congreso no duplicaba al menos la ayuda militar a El Salvador, al

¹⁵⁶ *Op.Cit.*, Gordon Rapoport, p. 325.

¹⁵⁷ *Op.Cit.*, LaFeber, p. 381.

final, México podría ser afectado y entonces habría gobiernos apoyados y afines a la URSS en las puertas de los Estados Unidos.¹⁵⁸

Kirkpatrick estimuló el pánico por varias razones. A principios de 1983, los revolucionarios se habían reagrupado de manera eficaz, atacaron exitosamente y controlaron por breve tiempo nueve zonas de El Salvador. También, habían demostrado capacidades militares que las tropas salvadoreñas entrenadas y equipadas por Estados Unidos no pudieron manejar, lo cual dividió y desmoralizó al ejército. El FMLN comenzó a predecir una victoria militar en un año, en una aparente maniobra más publicitaria que real. Además de los problemas relativos a El Salvador, dentro de Estados Unidos Kirkpatrick, tenía otra preocupación. Bajo la dirección de Thomas Enders, el Departamento de Estado había empezado a explorar una propuesta de “doble vía”, la cual llevaría a negociaciones con el FMLN mientras la lucha continuaba. Preocupada por la forma en que Enders pretendía resolver de modo unilateral la crisis salvadoreña, Kirkpatrick fue directamente con Reagan para detener el enfoque de “doble vía”. El consejero de seguridad nacional de Reagan, William Clark, apoyó a Kirkpatrick. Clark enfocaba los problemas centroamericanos desde una perspectiva completamente militarista. Kirkpatrick y Clark lograron quitarle la dirección política del Departamento a Enders y, en mayo de 1983, Reagan despidió a Enders.¹⁵⁹

Como resultado inmediato de la paranoia de Reagan, acrecentada por los comentarios de Kirkpatrick y Clark, se dio una ampliación enorme del compromiso militar norteamericano en El Salvador. Reagan solicitó al Congreso doblar la ayuda militar, la cual “llegaría a por lo menos 110 millones de dólares, ampliar considerablemente el entrenamiento de la tropa salvadoreña por asesores norteamericanos y la posibilidad de elevar el número de los 55 asesores militares ya destacados en el país”.¹⁶⁰ Al mismo

¹⁵⁸ *Ibidem*.

¹⁵⁹ *Ibidem*.

¹⁶⁰ *Ibidem*, p. 382.

tiempo, el presidente describió la situación en “términos desoladores y astutamente culpó a sus críticos en el congreso de los triunfos revolucionarios, pues éstos no habían querido darle todo el dinero que él quería meter en El Salvador”.¹⁶¹ A la vez, Kirkpatrick aumentó la presión al sugerir la necesidad de cientos de millones de dólares para un “plan Marshall”¹⁶² para Centroamérica para crear una nueva infraestructura económica (escuelas, servicios públicos, autopistas, telecomunicaciones, etcétera). Finalmente, los asesores norteamericanos recurrieron a las elecciones para contrarrestar el apoyo al FMLN y legitimar al gobierno, exigieron que las elecciones presidenciales de marzo de 1984 se adelantaran a finales de 1983.

Aunque estas propuestas causaron un enorme debate político durante 1983, no ofrecían nada nuevo. El enfoque de Kirkpatrick solamente prolongó una estrategia que en dos años de guerra había demostrado que no rendía los frutos esperados, que estaba fundada en ayuda militar y en los asesores norteamericanos. Entre más se involucraban los estadounidenses en la guerra, los revolucionarios podían afirmar con más fuerza que estaban luchando contra un invasor extranjero y que el gobierno de Magaña era títere del imperialismo yanqui y dependiente de Estados Unidos. A la vez, la opinión pública norteamericana se podía quejar de que su gobierno se involucraba en un nuevo “Vietnam”.¹⁶³

Mientras tanto, en El Salvador, en julio de 1983, la comisión de pacificación creada a partir de la firma del pacto de civilidad firmado entre ARENA y el gobierno de Álvaro Magaña transmitía al FMLN-FDR los requisitos para un eventual acuerdo de paz. Éste fue tomado con reservas por parte de los guerrilleros, a pesar del cambio de su posición política con respecto al gobierno, pues alegaban que los grupos de derecha seguían

¹⁶¹ *Ibidem*, p. 382.

¹⁶² La idea de Kirkpatrick estuvo basada en el El Plan Marshall que fue el plan principal de los Estados Unidos para la reconstrucción de los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial que, a la vez, estaba destinado a contener un posible avance del comunismo. Esta misma idea sería utilizada por el gobierno norteamericano en Centroamérica y sería conocida como Mini Plan Marshall.

¹⁶³ *Op.Cit.*, Aguilera Peralta, p. 298.

operando con total impunidad y, por lo tanto, no había garantías suficientes para el diálogo. En este marco, el 15 de diciembre de 1983, fue promulgada la Constitución.

Las fuerzas del FMLN recibieron la promulgación de la nueva Constitución con el ataque y ocupación de las instalaciones de la Cuarta Brigada de Infantería, la más importante del norte de El Salvador, en El Paraíso, departamento de Chalatenango, el 30 de diciembre de 1983. La ocupación se logró después de dos horas de un intenso cañoneo y tras haber aniquilado 25 posiciones periféricas del cuartel.¹⁶⁴

Al inicio de 1984 los enfrentamientos entre el FMLN y el gobierno no habían dado como resultado la victoria para ninguno de los contrincantes. A pesar de los raudales de ayuda norteamericana, la incapacidad militar del gobierno ponía en riesgo los planes de fortalecimiento del régimen. En este contexto, se pusieron en marcha los preparativos para la elección presidencial.

2.5.1 La Elección Presidencial de 1984

El FMLN se encontró en el primer semestre de 1984 con el anuncio de elecciones presidenciales, las cuales vio con recelo y llamó a la sociedad a no ser parte del juego imperialista. Además, continuó con sus acciones militares.

La opinión del FMLN con respecto a las elecciones era de reserva. Las veía con preocupación ya que éstas le podrían restar legitimidad, por eso los insurgentes propusieron la realización de conversaciones, por ello exigieron el inicio del diálogo y la formación de un gobierno de amplia coalición. Sin embargo, los Estados Unidos y la Democracia Cristiana desoyeron los llamados de los revolucionarios y continuaron con sus planes de legitimización del régimen.

2.6 EL FMLN-FDR FRENTE AL GOBIERNO DEL PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO (PCD)

¹⁶⁴ *Op. Cit.*, Prieto, p. 207.

Con la llegada de José Napoleón Duarte a la presidencia salvadoreña la nación ingresó a un nuevo periodo en el que se buscó consolidar el régimen impulsado y apoyado por Estados Unidos. Al mismo tiempo, se intentó dotarlo de legitimidad internacional con el fin de restar apoyo al FMLN y mostrándolo como un gobierno democrático y respetuoso de los derechos humanos.

Al tomar la presidencia Duarte impulsó un gobierno de corte moderado, permitió las acciones reivindicativas, toleró la mayoría de las huelgas y paros, además reabrió la Universidad. También intentó controlar a los grupos paramilitares, logrando la disminución notable de la represión, la cual sólo fue utilizada en contra de simpatizantes del FMLN o líderes laborales independientes lo que hacía pensar que la represión no era generalizada sino selectiva.

A la par de las libertades permitidas por el nuevo gobierno, los norteamericanos, a través de su Congreso, aprobaron y otorgaron ayuda militar y económica por 179 millones de dólares para 1984. La ayuda sería canalizada al impulso de la deteriorada economía salvadoreña y, sobre todo, a la lucha militar contra el FMLN.

En el campo de la lucha contra el FMLN, Reagan pugnó por dotar de mejor y mayor armamento a los militares salvadoreños así como de mejor entrenamiento con miras a inclinar la balanza a favor del gobierno, con este fin fue que se destinaron 140 millones de dólares de los 179 aprobados por el Congreso estadounidense al esfuerzo militar.

El aumento de la ayuda militar se tradujo en una mayor escalada de la guerra. Se cambió la estrategia militar con el fin de dar mayor movilidad al ejército y desgastar al FMLN. Los norteamericanos incrementaron la transferencia de armas a El Salvador así como aumentaron su flota de helicópteros. Del mismo modo se añadió un mayor número de asesores estadounidenses, quienes comenzaron a participar en los bombardeos aéreos y, esporádicamente, en los combates.

La aplicación de estas medidas logró desalojar al FMLN de algunas zonas y ubicar destacamentos de soldados en carreteras y caminos. Sin embargo, esto no logró alterar de

manera sustancial el balance de la guerra, ya que la guerrilla pronto se acopló a la nueva estrategia del ejército, dispersándose y ampliando su radio de acción, manteniendo a la vez, su capacidad de concentración. Además, empezó a “aplicar una estrategia de guerra prolongada de desgaste que enfatizó el sabotaje a la economía, tanto contra empresas del sector privado como contra servicios públicos”.¹⁶⁵ Así, en lugar de inclinar la balanza a favor del ejército gubernamental, la intensificación de las acciones armadas trajo como consecuencia el cambio del tipo de guerra. Las confrontaciones armadas masivas entre las fuerzas militares y las del FMLN cedieron el paso a una guerra de largo plazo, de baja intensidad, en que la clave era desgastar al enemigo. De ahí que desde el punto de vista militar, el triunfo por la vía de las armas no era viable a corto plazo.

El empate militar entre gobierno y guerrilla hizo cada vez más evidente que la solución al estado de guerra era la negociación. Los primeros contactos tuvieron lugar en 1984, cuando Duarte, en las Naciones Unidas, invitó al FMLN-FDR a dialogar. Éstos la aceptaron.

La aceptación a dialogar del FMLN demostró que lo ideológico, sin desaparecer, cedió su lugar a lo pragmático, debido, principalmente, a los avances en el campo militar obtenidos por el gobierno durante 1983 contando con el apoyo irrestricto de la administración Reagan. Por un lado, la negociación sirvió al FMLN para ganar legitimidad, reconocimiento y ayuda en el ámbito internacional, lo cual era urgente pues el gobierno salvadoreño gozaba de un flujo prácticamente ilimitado de ayuda militar y económica proveniente de Estados Unidos. Contrarrestar este apoyo era crucial; no se podía hacer nada al respecto sin un trabajo político-diplomático creativo, que requería, entre otras cosas, habilidad negociadora, tolerancia y receptividad a la tesis de la negociación que un sector importante de la comunidad internacional defendía con energía, rechazar la negociación significaría el aislamiento político a nivel internacional y nacional de la guerrilla, demostrándolos como terroristas radicales opuestos a toda negociación.¹⁶⁶

¹⁶⁵ *Op.Cit.*, Gordon Rapoport, p. 332.

¹⁶⁶ *Op.Cit.*, Rouquié, pp. 249-250.

En octubre de 1984, tuvo lugar la primera reunión entre el gobierno salvadoreño y el FMLN-FDR en la ciudad de La Palma, Chalatenango, cerca de la frontera con Honduras. El presidente Duarte acudió acompañado por dos vicepresidentes y dos ministros; uno de ellos de la Defensa, general Carlos Vides Casanova, mientras el FMLN sólo envió, junto a los dirigentes del FDR Manuel Ungo y Rubén Zamora, un solo comandante principal Fermán Cienfuegos, tres de segunda línea y ninguno de los jefes militares principales.¹⁶⁷

Pero Duarte no tenía intención de negociar con los insurgentes, incluso no presentó plataforma alguna para discutir, y sólo se limitó a proponer la entrega de las armas y la reinserción de combatientes, a cambio les otorgaría su registro como partido político para integrarse a la vida política constitucional. Para apoyar su propuesta Duarte argumentó que El Salvador era una democracia que ofrecía plenas garantías a sus ciudadanos, y por consiguiente, la sublevación ya no se justificaba. Sin embargo, la realidad mostró lo contrario, y sólo basta con ver los reportes de diarios y las homilías del arzobispado de San Salvador, que sólo demostraba que la represión continuaba, aunque en menor grado, el estado de las cosas seguía vigente ahora reforzado por la Constitución y las reformas realizadas serían muy limitadas dado los candados constitucionales. Aceptar las propuestas del gobierno significaba la desaparición política e incluso física de los miembros del FMLN. Sería aceptar la “paz de los valientes”.¹⁶⁸

En la siguiente reunión, realizada en la ciudad de Ayagualo el 30 de noviembre del mismo año, los rebeldes deberían presentar su respuesta a la propuesta del presidente, la delegación del FMLN-FDR rechazó la proposición al considerar que eran “soluciones simplistas” y tras la cual estaban los Estados Unidos, apoyado en el Informe Kissinger.¹⁶⁹ Como contrapropuesta los rebeldes propusieron un plan de paz donde solicitaron: el cese de la represión a los opositores, garantía de las actividades sindicales y políticas

¹⁶⁷ *Ibidem*, p. 250.

¹⁶⁸ *Ibidem*, p. 250.

¹⁶⁹ *Ibidem*, p. 250.

independientes y fin de la participación militar norteamericana en la guerra.¹⁷⁰ Además insistieron, en tres puntos, que serían reclamos centrales del FMLN: “cese de fuego sobre la base de una demarcación de territorios bajo control de cada una de las partes, reorganización del ejército nacional sobre la base de las dos fuerzas armadas en el terreno y formación de un gobierno de consenso nacional que convocara a elecciones”.¹⁷¹ Sin embargo, su propuesta no fue aceptada por el gobierno. La reunión se convirtió en diálogo de sordos pero se acordó proseguir con las conversaciones, sin embargo, éstas no se dieron durante los tres años siguientes.

Con el fracaso de las conversaciones de paz el FMLN continuó con su táctica de sabotaje a la infraestructura gubernamental y con sus acciones de hostigamiento a las fuerzas armadas y secuestros. Entre éstos, destaca el secuestro de la hija de Duarte. Estas acciones estaban enmarcadas en la táctica seguida por el FMLN durante el periodo de 1983-1986; la estrategia generó inestabilidad al gobierno de la Democracia Cristiana, que cada día se hizo más dependiente de la ayuda norteamericana, tanto para contener a las huestes guerrilleras como para mantener al país a flote.

Mientras continuaron las hostilidades entre guerrilleros y régimen, dentro del FMLN sucedieron cambios en cuanto a su estrategia militar y sus objetivos a alcanzar. Será sólo a partir de 1986 cuando las acciones rebeldes no se encontrarían incorporadas a la estrategia que proponía la derrota militar del adversario. A diferencia de 1981-1982, para mediados de la década el FMLN estaba convencido de que no podría ganar la guerra por la vía militar, de modo que su estrategia se orientó en dos sentidos: el primero, crear, por medio del sabotaje, una situación límite, una situación en la cual el régimen se viera obligado a negociar el poder a causa del desgaste económico, político y social, al que se

¹⁷⁰ *Ibidem*, p. 250.

¹⁷¹ *Ibidem*, p. 250.

vería sometido por el sabotaje guerrillero; y en segundo, a crear las condiciones para un nuevo alineamiento de masas urbanas con el movimiento armado.¹⁷²

Para junio de 1986 Duarte ofreció una nueva reunión con el FMLN. Se realizaron reuniones secretas en el exterior. Los encuentros preliminares se dieron en México y Panamá. Se convino llevar a cabo la reunión el 19 de diciembre de 1986 en el poblado de Sesori, departamento de San Miguel. Sin embargo, el diálogo no progresó debido a que las condiciones de índole militar del FMLN no fueron aceptadas por lo militares, pues éstos aún creían en la victoria militar, y no concurrieron al diálogo. Duarte y el FMLN acudieron al encuentro pero no lograron avances en el proceso de paz.¹⁷³

A partir del año 1987 el proceso de paz salvadoreño se encaminó de una manera seria, a la búsqueda de una solución a la guerra civil. El primer paso para la solución de la crisis provino de los países del Grupo Contadora,¹⁷⁴ integrado por México, Venezuela,

¹⁷² *Op.Cit.*, Moreno Parada, p. 120.

¹⁷³ *Op.Cit.*, Rouquié, pp. 251-252.

¹⁷⁴ **El Grupo Contadora** Frente a la grave crisis por la que atravesaba el área de Centroamérica y que amenazaba con desestabilizar toda la región, un grupo de países latinoamericanos, sin involucramiento en el conflicto pero con intereses directos en la zona –Colombia, México, Panamá y Venezuela–, se reunieron a principios de enero de 1983 para establecer una nueva opción y diferente en la solución de los conflictos centroamericanos. Se trató de ofrecer un instrumento político basado en un proceso de consultas que condujera a la creación de condiciones pacíficas en el área. Estos países constituyeron lo que se denominó el Grupo de Contadora. Los esfuerzos de grupo se centraron en tres objetivos: detener una conflagración bélica en el área centroamericana; crear condiciones pacíficas en Centroamérica, mediante acuerdos destinados a eliminar el armamentismo y la presencia militar extranjera; y por último, impulsar un proceso de desarrollo económico y social en la región. El documento fundacional de Contadora los constituyó la declaración emitida por los cuatro cancilleres de México, Colombia, Panamá y Venezuela, del 9 de enero de 1983. Ahí se hizo el llamado urgente a los países centroamericanos para que, a través del diálogo y la negociación, reduzcan las tensiones y establezcan las bases para un clima permanente de convivencia pacífica y respeto mutuo. Después, en julio de 1983, vino la Declaración de Cancún de los cuatro presidentes de Contadora, en donde se establecen las directrices que debe contener un programa general para lograr una paz negociada en Centroamérica. Para septiembre de 1983, Contadora negoció un documento cristalizando los 21 objetivos básicos para la pacificación de Centroamérica. La virtud de este texto es que expresa, por primera vez, el acuerdo de los cinco gobiernos centroamericanos sobre los compromisos que deben acatar para alcanzar los fines establecidos. Ello iría acompañado de unas normas para la ejecución de los compromisos asumidos en el documento de objetivos, negociadas en enero de 1984 por Contadora y los cinco cancilleres centroamericanos, y en donde se establecen las reglas relativas a asuntos de seguridad, asuntos políticos y cuestiones económicas y sociales. Todo ello dio origen a la elaboración de un texto jurídico de gran envergadura, denominado Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica. La primera versión de ese texto es de septiembre de 1984; la segunda, con enmiendas introducidas por los gobiernos centroamericanos, es de septiembre de 1985; la versión final es de junio de 1986. El Acta comprende un marco jurídico que proporciona los criterios para resolver los problemas que aquejaban a Centroamérica. Sin embargo, el Acta no fue firmada debido, principalmente, a la férrea oposición de los Estados Unidos. Pero, lo relevante del Acta y del Grupo de Contadora es que partió, desde el inicio de sus gestiones, de la idea capital: los conflictos que se desarrollan en Centroamérica tenían su origen en las profundas carencias económicas y sociales de los países del área durante las últimas décadas; éste principio se alejaba de la idea explicativa de que la crisis en Centroamérica se debía a la intervención comunista en el área y se enmarcaba dentro del conflicto Este-Oeste. Además, también se establecía que la solución a los problemas suponía, en primer término, el reconocimiento inequívoco de que los gobiernos centroamericanos les pertenecía la facultad intransferible de obtener su propia paz. De ellos dependía, en forma directa, el fracaso o el buen éxito de una negociación que a todos beneficiaba. Todo esto, generó que el proceso de Contadora recibiera un apoyo internacional ampliamente mayoritario, las gestiones del Grupo Contadora fueron objeto de un sólido respaldo de la opinión pública internacional. A pesar de no ser firmada el Acta de Contadora, ésta dio los frutos esperados en 1987, en Esquipulas, Guatemala,

Colombia y Panamá, quien en 1986 dio a conocer el Acta de Contadora que contenía una serie de compromisos con la paz, la democracia, la seguridad regional y la cooperación económica. Sin embargo, el Acta de Contadora no fue firmada, debido al boicot de los Estados Unidos.

Durante 1987 todo cambió. El 7 de agosto, los presidentes de Centroamérica signaron y ratificaron un acuerdo preliminar de paz propuesto por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias. Como señalo en el capítulo precedente, el documento incluía los siguientes aspectos: amnistía; cese del fuego; impedir el uso del territorio para agredir a otra nación; democratización y fin de la ayuda a los movimientos insurreccionales. El documento, conocido como Esquipulas II,¹⁷⁵ incluía un calendario y ciertos mecanismos para iniciar acciones concretas en cada una de esas áreas básicas.¹⁷⁶

El acuerdo de Esquipulas fue tomado por el FMLN con reservas; si bien esta agrupación había optado por una salida negociada ante la imposibilidad del triunfo militar y el alejamiento de las revitalizadas organizaciones populares, y había orientado su programa político hacia el pluralismo, no podía aceptar ninguna salida que implicara debilitar su fuerza o arriesgar su sobrevivencia como organización. Además, se exigía el

cuando los países centroamericanos asumieron su responsabilidad para conducir directamente el proceso negociador de la pacificación y signaron el Acuerdo de Esquipulas. Ello no fue en menoscabo de Contadora: ése fue siempre el supuesto y el fin de la gestión diplomática. Durante todo el proceso de paz en Centroamérica el Grupo de Contadora siempre estuvo acompañando a los países centroamericanos y apoyando en las gestiones.

¹⁷⁵ **Acuerdo de Paz Esquipulas II** Fue una iniciativa hecha a mediados de la década de 1980 para resolver los conflictos militares que azotaron Centroamérica durante la década, el acuerdo debe su nombre a la localidad de Esquipulas, Guatemala, lugar donde se llevaron a cabo las reuniones iniciales. El acuerdo fue construido sobre las bases del trabajado realizado por el Grupo Contadora entre 1983 y 1985. En 1986, tuvo lugar la reunión denominada "Esquipulas I", a la que asistieron cinco presidentes de Centroamérica, la junta sirvió de base para consolidar la decisión política de los gobernantes y establecer con Esquipulas II en 1987 el procedimiento para conseguir la "Paz Firme y Duradera en la región". Durante 1986 y 1987, se llevó acabo el "Proceso de Esquipulas", promovido por el presidente Vinicio Cerezo de Guatemala, en el proceso los presidentes de Centroamérica acordaron, entre otras cosas, una estructura básica para la resolución pacífica de los conflictos. De ahí emergió el "Acuerdo de Esquipulas II" y fue firmado en la Ciudad de Guatemala por el presidente de Guatemala Vinicio Cerezo, el presidente de El Salvador José Napoleón Duarte, el presidente de Nicaragua Daniel Ortega, el presidente de Honduras José Azcona Hoyo y el presidente de Costa Rica Óscar Arias Sánchez el 7 de agosto de 1987. El Acuerdo de Esquipulas II definió un número de medidas para promover la reconciliación nacional, el final de las hostilidades, la democratización, elecciones libres, el término de toda asistencia para las fuerzas militares irregulares, negociaciones sobre el control de armas y la asistencia a los refugiados. También sentó las bases para los procedimientos de verificaciones internacionales y proveyó de una agenda para su implementación. El Gobierno de los Estados Unidos se negó a reconocer este acuerdo debido a que aceptarlo implicaría el reconocimiento del gobierno sandinista de Nicaragua. El rechazo norteamericano no afectó la aplicación del acuerdo. El Acuerdo de Esquipulas II sentó las bases del Acuerdo General de Paz de El Salvador.

¹⁷⁶ *Op.Cit.*, Medina Nuñez, p. 191.

reconocimiento de la legitimidad de su lucha y de su representatividad, y la salvaguarda de la integridad física de sus miembros.¹⁷⁷

El gobierno de Duarte, argüía que los objetivos que estimulaban la guerra contra el gobierno militar habían sido o estaban siendo cumplidos: “la reforma agraria ha roto el poder de los terratenientes; las violaciones a los derechos humanos han sido controladas; ha cambiado el carácter antidemocrático de la fuerza armada; el texto constitucional contempla derechos de organización y de participación ciudadana”.¹⁷⁸ De ahí que, según el gobierno, la lucha armada del FMLN no tenía sentido. La propuesta gubernamental consistía en que a cambio de que la guerrilla depusiera las armas y licenciara a su ejército, les prometía garantías para su participación en el proceso electoral y equidad para la búsqueda de su acceso al poder. Además, les otorgaba una amplia amnistía.

En cambio, el FMLN-FDR planteaba que todavía subsistían las causas que los llevaron a la revolución: “el poder de la fuerza armada continúa incólume, prueba de ello es que no ha habido juicios ni castigo a los oficiales comprometidos con las organizaciones paramilitares de derecha: la reforma agraria no ha alterado las bases del poder de los terratenientes, ni ha beneficiado a vastos sectores populares; las violaciones a los derechos humanos prosiguen y hay una abierta intervención de una potencia extranjera”.¹⁷⁹ En contrapropuesta al ofrecimiento del gobierno el FMLN planteó un plan de tres fases: “la primera comprendería el establecimiento formal del cese al fuego, el retiro de Estados Unidos y la realización de un amplio diálogo nacional. Después de ello, se procedería a dictar una nueva Constitución, a formar un nuevo gobierno y reestructurar la fuerza armada; por último, tendría lugar la convocatoria a elecciones.”¹⁸⁰

¹⁷⁷ *Op.Cit.*, Gordon Rapoport, p. 334.

¹⁷⁸ *Ibidem*, p. 334.

¹⁷⁹ *Ibidem*, p. 334.

¹⁸⁰ *Ibidem*, p. 334.

Esta polaridad de las propuestas y el nulo avance de las tentativas de diálogo, mostraban escasas posibilidades de pláticas, sumado a ello estaba lo difícil de la relación entre el gobierno Demócrata Cristiano y el FMLN-FDR que se había deteriorado debido a la desconfianza generada a lo largo de los años de guerra civil. Este problema entre ambas partes duraría hasta el final de la administración de José Napoleón Duarte.

A pesar de este problema de posiciones de ambos lados y en el contexto del impulso de Esquipulas II, Duarte convocó a un diálogo en la sede de la Nunciatura en San Salvador en octubre de 1987, los revolucionarios aceptaron el llamado hecho por el presidente.

La negociación abría una posibilidad interesante para el FMLN-FDR, sobre todo por lo prioritario que era sumar al proyecto revolucionario a quienes, estando convencidos de las necesidades de realizar reformas en el país, no creían que la guerra fuera el camino para ello. Si se les convencía de que la voluntad negociadora era firme del lado del FMLN y una estratagema por parte del gobierno, resultaría más sencillo sumarlos al proyecto revolucionario.

Sin embargo, la oposición del gobierno de Reagan y de algunos sectores de las fuerzas armadas, que imponían límites muy estrechos al poder de negociación de Duarte, propiciaron que las pláticas no tuvieran avance alguno y los planes del FMLN no resultaron como lo habían planeado, aunque sí ganó cierta legitimidad entre la sociedad que cada día se mostraba más inclinada hacia la negociación.

Después del fracaso de los diálogos de la nunciatura, el FMLN volvió a reconsiderar la estrategia de derrotar al ejército por la vía militar, pues si bien ésta no había sido abandonada del todo sí había sido relegada a un plano secundario para dar prioridad a la negociación, pero el fracasado diálogo hizo que se volviera a considerar esta estrategia. A partir de 1987, coexistieron dos estrategias; por un lado, estuvo la de derrotar al ejército por la vía militar y tomar el poder y, por la otra, la búsqueda de la finalización de la guerra mediante un proceso de negociación que sentara las bases para una reforma política, social y económica en El Salvador. Entre 1987 y 1989, ambos propósitos convivieron, pero el propósito negociador se subordinó al militar, aunque no siempre fue así, muestra de ello

fue el papel asumido por el FMLN durante las elecciones presidenciales de 1989. En tal año, este último fue sometido a una prueba que pondría de manifiesto la imposibilidad de su consecución, al menos en el corto y mediano plazo.

2.6.1 Las Elecciones de 1988 y 1989

El inicio del año 1988 lucía poco prometedor para la solución del conflicto armado pues las conversaciones se encontraban atoradas y el FMLN había optado por intentar derrotar al ejército por la vía armada. En este contexto, se desarrollaron los procesos electorales de 1988 y 1989. El primero de índole legislativa y el segundo, presidencial. En marzo de 1988 se llevaron a cabo las elecciones legislativas, el papel asumido por el FMLN fue de indiferencia ante el proceso.

Para 1989 tuvo lugar la elección presidencial. Con las campañas, el presidente Duarte hizo un nuevo llamado a los insurgentes para que depusieran las armas y se integraran al proceso electoral; al mismo tiempo el FMLN propuso participar en las elecciones de marzo de 1989, siempre y cuando éstas fueran pospuestas para darle tiempo al FMLN de prepararse. Argumentaron que querían “derrotar el proyecto democrático contrarrevolucionario en su propio terreno”.¹⁸¹ La propuesta del FMLN partió del análisis y comprobación de la profunda crisis socioeconómica en la que estaba hundido el país a finales del régimen de Duarte. Además, la enfermedad del presidente y la corrupción de varios dirigentes habían debilitado al PDC. El “FMLN prevé como probable una explosión social que se puede transformar en insurrección o bien canalizar hacia las urnas”.¹⁸² El cambio de posición del FMLN fue evidente; de promulgar reformas y conformar un gobierno de unidad, pasaron a una solicitud de participación en las futuras elecciones. Esto se explica porque a partir de 1988, el FMLN se dio cuenta de la imposibilidad de un alineamiento de las masas populares con éste bajo su dirección. Era evidente que la necesidad de terminar con la guerra se había impuesto en grandes

¹⁸¹ *Op.Cit.*, Rouquié, p. 252.

¹⁸² *Ibidem*, p. 253.

sectores de la sociedad. Por ello fue que las propuestas de diálogo y negociación que llegaron desde la insurgencia tuvieron un matiz diferente.

El gobierno se negó a postergar las elecciones aduciendo cuestiones constitucionales. En respuesta el FMLN decidió boicotear las elecciones y continuó con sus actos de sabotaje con el fin de debilitar aún más al gobierno y alejar la posibilidad de la victoria electoral al PDC. Al mismo tiempo deseaba derrotar a sus aliados de izquierda, antiguos componentes del FDR que se habían reintegrado a la legalidad a partir de 1988.

2.7 LOS OLIGARCAS EN EL PODER: EL GOBIERNO DE LA ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA (ARENA)

Con la toma de posesión de Alfredo Cristiani en junio de 1989, y sobre todo, con lo expresado en su discurso inaugural, se abrió una nueva posibilidad de solución a la crisis. En el discurso anunció su intención y la voluntad de iniciar pláticas con el FMLN. A los escasos días de iniciada su administración el presidente dio el primer paso, al reconocer como legítimo beligerante e interlocutor válido al FMLN en la búsqueda de una solución negociada.

En septiembre de 1989, el FMLN y el gobierno se reunieron en la Ciudad de México en donde convinieron promover un proceso de diálogo constante, aunque sin detener las acciones armadas. Las pláticas se trasladaron posteriormente a Costa Rica. Sin embargo, Cristiani trató de hacer una lectura unilateral de Esquipulas II, quizás presionado por los oligarcas, culpando al FMLN de no aceptar las reglas del juego electoral y las democráticas; a su vez los insurgentes acusaron al gobierno de negarse a emprender un verdadero diálogo bajo ciertas condiciones que para el FMLN eran ineludibles para avanzar en las charlas. Nuevamente las pláticas se encontraron atoradas.

Dos hechos, a finales de 1989, destrabaron las conversaciones entre gobierno y FMLN y encausaron el proceso por la senda de una verdadera negociación. De parte del FMLN la ofensiva de 1989 fue el hecho determinante para que buscara de manera seria la solución.

2.7.1 La Ofensiva de 1989: Un Nuevo Intento de Toma del Poder

Mientras las conversaciones se encontraban trabadas, funcionarios del gobierno salvadoreño y estadounidense se dedicaron a declarar que el FMLN estaba finiquitado y que su negativa al diálogo era una estratagema para ganar tiempo y poder llegar a las pláticas con una mejor posición.

La respuesta, ante los señalamientos de debilidad guerrillera del gobierno, de la Comandancia General de FMLN fue la ofensiva general iniciada el 11 de noviembre de 1989 sobre varias ciudades, en especial la capital San Salvador, en donde 1 500 guerrilleros tomaron posiciones en los barrios obreros de la capital, además se concentraron en las cabeceras de Santa Ana, Zacatecoluca, San Vicente y San Miguel.¹⁸³ Oficialmente sólo se trataba de obligar al presidente Cristiani a sentarse en la mesa de negociaciones.

Sin embargo, la envergadura de los ataques militares y el diseño de su operación en su conjunto, plasmada en el documento que establecía la estrategia a seguir por parte del FMLN, apuntaban a algo más que a presionar al gobierno salvadoreño para que diera pasos significativos en el proceso de negociación para poner fin a la guerra. La ofensiva de 1989, además de presionar al gobierno, buscaba derrotar por completo al ejército o por lo menos propinarle una derrota de tal magnitud que inclinara la balanza militar del lado del FMLN. Esta intencionalidad no excluía como resultado colateral, en caso de que el principal objetivo no se consiguiera, presionar por una negociación, tal como se había declarado oficialmente, en la que el FMLN tuviera ventaja a su favor en virtud de su capacidad militar, que iba a quedar de manifiesto debido a la ofensiva.¹⁸⁴

Bajo esta idea es que el FMLN pretendió nuevamente revivir la ofensiva “final” de 1981 y la sandinista de 1979. Para ello, nuevamente hizo un llamado a la insurrección popular de las masas; sin embargo, el grado de participación no se dio en el nivel deseado,

¹⁸³ *Op.Cit.*, Prieto, p. 211.

¹⁸⁴ *Ibidem*, p. 211.

aun cuando hubo mucha participación civil en la construcción de barricadas, suministro de alimentación a las fuerzas guerrilleras y milicianas, y se puso en marcha un sistema de información ciudadana sobre los movimientos del enemigo.¹⁸⁵ Los voceros del frente parecieron sorprendidos por la poca resistencia militar encontrada al principio: “sólo es cuestión de combatir hasta la victoria, hasta el derrumbe del ejército y la caída del régimen. El diálogo queda olvidado. Se espera la insurrección nacional contra el régimen”.¹⁸⁶

La guerrilla entró con fuerza en los municipios conurbados de Mejicanos, Cuscatancingo y Soyapango, y en barrios capitalinos como la Zona Rosa, residencial de las familias ricas del país. En respuesta, las fuerzas armadas utilizaron aviones para bombardear barriadas, además utilizó artillería y blindados. La ofensiva provocó cientos de muertos, entre civiles y combatientes, así como el desplazamiento de miles de personas.

El gobierno reaccionó movilizándolo un gran número de efectivos militares, que llegó a reunir 19 000 soldados en San Salvador. Además, el presidente Cristiani decretó el estado de sitio, no obstante, el FMLN logró demostrar una capacidad militar capaz de hacer frente al ejército gubernamental. Asimismo, la toma del hotel Sheraton en la colonia San Benito y la retención de varios asesores norteamericanos alojados en el hotel dieron gran publicidad al FMLN; este hecho evidenció que los asesores norteamericanos eran más de los 55 que el gobierno estadounidense declaraba oficialmente, lo cual generó un escándalo en los Estados Unidos evidenciando el nivel de injerencia de la administración republicana, a pesar de las promesas de moderación hechas por Bush. Finalmente, el 12 de diciembre de 1989, la ofensiva se detuvo, teniendo como resultado empate entre ambos contrincantes, los combatientes del FMLN se retiraron de nueva cuenta hacia sus zonas de influencia y el ejército regresó a sus cuarteles.

¹⁸⁵ *Op.Cit.*, Rouquié, p. 253.

¹⁸⁶ *Ibidem*, p. 253.

Lo trascendental de la ofensiva guerrillera fue que desmintió las declaraciones triunfalistas del gobierno y de los Estados Unidos. El objetivo principal del FMLN no se consiguió, pero sí se logró el objetivo que se declaraba oficialmente, sentar a la mesa de negociaciones al gobierno salvadoreño e iniciar pláticas serias de paz. La ofensiva de noviembre de 1989 puso de manifiesto que el aplastamiento militar de uno de los dos bandos en lucha no era posible en el corto y mediano plazo; es decir, dada la paridad de fuerzas militares, la guerra se podría prolongar durante un tiempo lo suficientemente largo como para agotar las energías sociales y económicas del país.

Desde el lado del FMLN, en un contexto internacional marcado por cambios trascendentales (Perestroika; caída del Muro de Berlín; desintegración del bloque comunista; elecciones impredecibles en Nicaragua, etcétera), la apuesta por continuar la guerra indefinidamente no auguraba más que aislamiento y quizás hasta un declive progresivo. A su vez, en el ámbito interno era creciente el clamor social por una solución negociada; no escuchar esa petición -que cobró una fuerza inusitada a raíz del asesinato, el 16 de noviembre de 1989, de los jesuitas de la UCA y sus dos colaboradoras a manos de elementos del Batallón Atlácatl- hubiera significado dar la espalda a sectores sociales, eclesiales y políticos sin los cuales era imposible que el FMLN sobreviviera políticamente. La sociedad salvadoreña, hastiada de casi una década de guerra civil y niveles de vida paupérrimos, comenzó a percibir la guerra como un obstáculo para conseguir mejoras económicas y sociales. El deseo de la paz se propagó en los distintos sectores de la sociedad. La guerra, que había sido vista en 1980 como instrumento que habría de solucionar el problema político, económico y social, se transformó paradójicamente en el problema a resolver.

La ofensiva guerrillera de 1989 significó para Estados Unidos, el fracaso de su estrategia militar y, al mismo tiempo, un mensaje para cambiar su estrategia en El Salvador.

Los resultados de la ofensiva de 1989 impulsaron y reforzaron el objetivo secundario del FMLN, buscar una solución negociada para resolver la crisis salvadoreña; además, los

mismos resultados fortalecieron su posición de poder para sentarse con mayor fuerza en la mesa de negociaciones.

El FMLN, que si bien desde cuatro o cinco años atrás se había dado cuenta de la imposibilidad de una victoria militar, aunque aún buscaba dicho objetivo, y que las posibilidades de reactivar a las fuerzas populares a su favor era casi imposible, a partir de este momento cambió su estrategia con el objetivo principal de obtener una mejor posición política para llegar con mayor fuerza a la mesa de negociaciones y poder impulsar sus propuestas. Además, la expectativa del FMLN era “salvar la vida, esto es, salvar la posibilidad de continuar una actividad en el espacio político creado por las condiciones del conflicto. La perspectiva es ahora alentadora, puesto que se han creado escenarios para una lucha política pacífica, dentro de una legalidad que ya ha sido reconocida en lo general por todas las fuerzas políticas”.¹⁸⁷

Otro factor importante para el desarrollo del diálogo entre gobierno y guerrilla fue el hecho de que ahora una oligarquía moderada estaba al frente del gobierno. Negociar con ARENA era negociar con la oligarquía, negociar con el PDC significaba negociar con nadie, y en las condiciones de empate entre los contrincantes que se vivía desde hacía cuatro o cinco años, la negociación no sólo parecía una opción sino una obligación, pues ahora las negociaciones serían directamente con uno de los mayores obstáculos para la paz en los años anteriores.

Este cambio de posición del FMLN y su inclinación a favor de la solución negociada se debió, en gran parte, a la ayuda dada por los Estados Unidos a través de los diferentes programas militares, con el objetivo de evitar la toma del poder por parte del FMLN y derrotarlo militarmente, así como mantener al gobierno salvadoreño, sólo así, con estos objetivos, se podría explicar la gran cantidad de millones de dólares otorgados por Estados Unidos, cantidad que se fue incrementando hasta más de 3.000 millones de dólares hasta 1990 (Ver cuadro 4).

¹⁸⁷ *Op.Cit.*, Moreno Parada, p. 162.

Cuadro 4

*Ayuda norteamericana a El Salvador 1980-1991.
Distribución anual por tipos*

	DA	PL-480 tit. I	PL-480 tit. II	Cuerpo de Paz	ESF	Militar	TOTAL
80	43,2	3	3,3	0,6	9,1	5,9	63,7
81	33,3	17,2	9,1	0	44,9	35,5	149,1
82	39,6	27,3	7,7	0	115	81,5	264,2
83	58,8	39	7,7	0	140	81,1	326,7
84	41,2	49	5,5	0	120,2	196,6	412,5
85	91,1	49	8,8	0	285	136,3	570,2
86	84	44	10,4	0	177	121,7	437,1
87	82,4	30,1	2,2	0	281,5	11,5	507,8
88	70	41,5	12,9	0	195	81,5	401,6
89	62,3	40	8,1	0	190	81,4	382,7
90 (*)	58,8	35	4,5	0	144,4	86	375,4
Total	664,7	375,1	80,2	0,6	1.702,1	919	3.891

Fuente: Sanahuja, José Antonio, "La Ayuda Norteamericana a Centroamérica", Tesis Doctoral, Universidad Complutense, Madrid, España, 1996, p. 397.

Así las cosas, el proceso de negociación entró en una fase decisiva a partir de 1990. Lo que en el FMLN inicialmente se aceptó por razones pragmáticas terminó por convertirse en un asunto estratégico: una negociación en la cual se consiguieran reformas de tipo social, económico y político dentro de un marco establecido por los Estados Unidos, por los que se había luchado en la guerra, pero renunciando a dos grandes objetivos: la toma del poder estatal por la vía armada y la instauración del socialismo a partir de esa victoria militar.

El verdadero proceso de paz iniciará a principios de 1990, el proceso de negociaciones de paz se abordará en el siguiente capítulo, en donde dos actores, de los que hemos señalado, unirán sus caminos en búsqueda de la paz y prosperidad para El Salvador.

Capítulo 3

LA OLIGARQUÍA Y SU LENTA TRANSFORMACIÓN DEMOCRÁTICA

En la guerra civil que se vivió en El Salvador, los principales actores no sólo fueron el gobierno y el FMLN; un tercer actor fue la oligarquía, cuyo órgano político fue el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que participó activamente en la represión, en el control del gobierno y tuvo la capacidad de imponer sus condiciones al propio gobierno estadounidense.

3.1 LOS MILITARES Y LOS OLIGARCAS EN EL GOBIERNO. LA CRISIS SE AGRAVA: LA DÉCADA DE LOS SETENTA

3.1.1 El gobierno del coronel Arturo Armando Molina (1972-1977)

Como se estableció en el capítulo anterior el proceso de descomposición que derivó en guerra se agravó durante la década de los setenta.

El proceso de agravamiento de la crisis se inició con el fraude electoral de 1972 en donde se impuso el candidato del partido oficial, el Partido Conciliación Nacional (PCN), coronel Arturo Armando Molina al candidato opositor José Napoleón Duarte apoyado por una alianza opositora agrupada en la Unión Nacional Opositora (UNO),¹⁸⁸ al fraude electoral vino una ola represiva en contra de los pocos sectores sociales que protestaron en contra de la imposición de Molina.

A la par de la represión y de la persecución a los diferentes grupos opositores al régimen, el gobierno del coronel Molina emprendió un proyecto de desarrollo económico, tanto a través de incentivos a la producción y a la exportación industrial, como de la puesta en marcha de obras de infraestructura, que permitió una recuperación moderada

¹⁸⁸ **Unión Nacional Opositora (UNO)** Agrupación formada por diversos partidos políticos de oposición para participar en la elección presidencial de 1972. La UNO se formó con la finalidad de poder participar en la toma de decisiones políticas para El Salvador y evitar competir entre ellas. Las tres principales agrupaciones que conformaron la UNO fueron: el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y la Unión Democrática Nacionalista (UDN). Para el proceso electoral de 1972 presentó como candidato a José Napoleón Duarte y a Guillermo Ungo para la vicepresidencia, sin embargo, perderán debido al fraude cometido por el partido oficial (PCN). La UNO se conformará a lo largo de todas las elecciones celebradas en El Salvador durante la década de los setenta.

de los índices de crecimiento.¹⁸⁹ Sin embargo, el ligero repunte de la economía salvadoreña se vio truncado a raíz de la crisis de los energéticos de 1973, en la cual Estados Unidos se hundió en una recesión económica, en donde el desempleo y la inflación parecían fuera de control, la crisis norteamericana por ende arrastró a otros países, entre ellos El Salvador. Se generó una mayor presión económica a las clases medias urbanas y a las masas rurales, quienes sufrían de sobremanera las constantes recesiones por las que atravesaba el país; abonando a la crisis de la década de los años setenta.

A la par de la puesta en marcha de acciones de tipo económico, el gobierno continuó reprimiendo a los disidentes, tanto en la ciudad como en el campo, apoyado por agrupaciones paramilitares como ORDEN. El presidente Molina llevó adelante la medida más audaz del régimen para ampliar su base social y su legitimidad, el inicio de una limitada reforma agraria entre 1972 y 1973.

El proyecto de Reforma Agraria estuvo presente desde los inicios del gobierno de Molina, además del propósito de legitimarse y acrecentar el apoyo a su gobierno por parte de los sectores populares, en especial con los habitantes del campo salvadoreño que para 1971 todavía representaba el 60% de la población salvadoreña. Por otro lado, el trasfondo del proyecto fue, como lo fue en su momento la Alianza para el Progreso, una “vacuna” contra la revolución y de ello estaba perfectamente consciente el presidente Molina y los miembros de su gobierno. Sin embargo, el plan para la ejecución de la reforma no se llevó a cabo y fue enterrado momentáneamente; así, una vez más, se cerró la puerta a una alternativa que hubiera quitado presión al campesinado salvadoreño y peso a los factores provocadores de la crisis.

La iniciativa de reforma desató la férrea oposición de la oligarquía al surgir la posibilidad de que pudiera llegarse a tocar lo intocable (el *cuadro mágico* de la oligarquía) desarrollándose una oposición frontal a través de la actuación coordinada de la patronal Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y el más radical Frente Agrario de la

¹⁸⁹ *Op.Cit.*, Montobbio, p. 383.

Región Oriente (FARO), a pesar de las masivas manifestaciones de apoyo al gobierno y a la Reforma Agraria, la oligarquía derrotó al presidente y postergó la idea de reforma.

Sin embargo, el presidente Molina no cesó en sus intentos de llevar a término la Reforma Agraria, en 1974 nuevamente intentó ponerla en marcha; en esta ocasión, fue más cauteloso para evitar la férrea oposición oligárquica, esto último no se consiguió y la oligarquía se movilizó a través de FARO para presionar políticamente al gobierno. Al mismo tiempo, en 1976 inició operaciones la Unión Guerrera Blanca (UGB)¹⁹⁰ grupo derechista patrocinado por la oligarquía; sus primeras acciones represivas tuvieron como objetivo a representantes de la clase dominante que estaban comprometidos con la reforma agraria o la habían apoyado. La desestabilización anunciada y propagada por la ANEP en sus declaraciones, era una realidad. Con el accionar, tanto en lo político y lo represivo, la oligarquía logró una vez más detener el nuevo proyecto agrario gubernamental, para octubre de 1976 la reforma estaba totalmente enterrada.

El fracaso de la reforma trajo consigo el cambio de posiciones moderadas a radicales dentro del gobierno, ello se manifestó en el recrudecimiento de la represión y en la renovación de tentativas por consolidar medidas de carácter autoritario, afectando notablemente a la población de la ciudad y del campo.

La actuación de la oligarquía ocasionó el retiro de los funcionarios con posiciones moderadas dentro del gobierno con posibilidades de mediar en los conflictos internos. Así el gobierno se cerraba a cualquier posibilidad de negociación con los demás sectores de la sociedad salvadoreña, pues sus órganos habían sido cooptados por la clase dominante, quienes se empeñaban en ver las manifestaciones y las exigencias de la sociedad como un complot comunista internacional, negándose a la negociación y paralizando programas

¹⁹⁰ **Unión Guerrera Blanca (UGB)** Fue un escuadrón de la muerte salvadoreño creado en 1976 por el mayor Roberto de D'Aubuisson, vinculado a la Mano Blanca Internacional. Sus blancos eran, principalmente, sacerdotes, maestros y líderes obreros y campesinos y todo aquel que se sospechará que era simpatizante o miembro de las organizaciones populares o guerrilleras a las que consideraban de tipo comunista. De sus acciones más importantes destaca la del 20 de junio de 1977, cuando lanza un ultimátum a los cuarenta y siete jesuitas que vivían en El Salvador "si no abandonan el país en un plazo de treinta días, morirán" puesto que eran considerados comunistas, también sobresale la acción llevada a cabo en septiembre de 1977, cuando atentó contra miembros de la clase dominante, como el diputado Matías Romero y el ex diputado F. José Guerrero, comprometidos con la reforma agraria impulsada por el presidente Arturo Molina. Como muchos de los escuadrones de la muerte surgidos antes y durante la guerra civil, su accionar fue disminuyendo gradualmente hasta desaparecer.

tendientes a subsanar la grave situación por la que atravesaba la sociedad durante la década de los setenta, tendencia que continuó con la presidencia del general Carlos Huberto Romero en 1977.¹⁹¹

A la par del intento de Reforma Agraria y la falta de reformas de tipo social, el estado convocó a comicios legislativos y municipales, dichos comicios eran parte del juego electoral que los militares imponían para legitimar su estancia en el poder y darle una cara más amable al régimen, nuevamente la UNO se presentó a los comicios y, de nueva cuenta, la oposición enfrentó obstáculos en su campaña electoral. Al momento de dar a conocer los resultados el gobierno se limitó únicamente a dar el nombre de los candidatos ganadores.

Para 1976 se convocó de nueva cuenta a elecciones, esta vez la UNO se retiró de la contienda a causa de los obstáculos puestos por las autoridades electorales y las amenazas de muerte por parte de los grupos de derecha. Además de los impedimentos gubernamentales, la UNO se negó a participar en la elección porque consideraba que su participación no hacía sino legitimar al régimen y no tenía sentido para la construcción de una verdadera sociedad democrática.

Al mismo tiempo de la crisis en el campo y en el ámbito de la democracia se desenvolvía una crisis en el ámbito social. Esta situación era una continuidad de la crisis derivada de la caída del Mercado Común Centroamericano¹⁹² que se mantuvo hasta 1972 cuando tomó posesión de la presidencia el coronel Molina, quien emprendió un proyecto de desarrollo económico, tanto a través de incentivos a la producción y a la exportación industrial, como la puesta en marcha de obras de infraestructura, que permitió una

¹⁹¹ Bielous, Silvia, *El Salvador*, México, D.F., Alianza, 1988, pp. 233.

¹⁹² **Mercado Común Centroamericano** Fue un tratado comercial firmado en 1960, entre los gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Los puntos esenciales del tratado estipulaban la libre circulación de bienes, personas y capitales; implantaba un arancel uniforme para todos los países ajenos al área y eliminaba las barreras aduanales en el interior de la región centroamericana; se buscaba fomentar la industrialización y la sustitución de importaciones. Para El Salvador, junto con Guatemala, el tratado significó grandes beneficios económicos debido al mayor grado de desarrollo industrial que poseían estos países, dicha situación inconformó al resto de los países que gastaban más de lo que ganaban. Para 1965, el gran inicio del Mercado comenzó a disminuir su ritmo hasta convertirse en un andar cauteloso. Para 1970 el Mercado colapsó definitivamente debido a las desventajas que representaba para Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

recuperación moderada de los índices de crecimiento durante los primeros años de su gobierno, y por lo tanto una relativa mejoría en los niveles del poder adquisitivo de la clase media y baja urbana.

Las políticas económicas que promulgaron los militares a partir de 1972 parecían dar buenos resultados en la contención de las demandas sociales y laborales durante los primeros meses del gobierno de Molina. Sin embargo, con el advenimiento de la crisis petrolera de 1973, de la cual El Salvador no estuvo exento, provocó inflación, desempleo y caída de los salarios generando descontento entre los sindicatos, tolerados hasta entonces, quienes se lanzaron a la protesta como medio de presión para obtener mejoras a su situación, apoyados por sectores de la sociedad que vieron la oportunidad de exigir al gobierno reformas de tipo social, frente a ello los oligarcas y militares dentro del Estado reprimieron las manifestaciones y se negaron a implementar las reformas exigidas, tendencia que continuará hasta el final del periodo presidencial de Molina.

3.1.2 La elección presidencial de 1977

El intento de Reforma Agraria por parte del presidente Molina, y la posterior oposición de la oligarquía, trajo como consecuencia que todos los proyectos impulsados por el Estado fueran vistos como una amenaza para ésta, por lo tanto éstos no prosperaron en lo absoluto. La consecuencia del intento de reforma fue que el resto del periodo presidencial de Molina fuera reducido únicamente a una regencia del poder sin mucha libertad de maniobra. Además, la oposición oligárquica a todo intento de reforma que atacara, según su consideración, sus intereses cerró la posibilidad de subsanar en algo la crisis que se venía dando, a ello se sumaba el cierre gradual de la posibilidad de tener elecciones limpias, ampliando el malestar generalizado de la sociedad salvadoreña.

El gobierno de Molina se caracterizó por la lenta pero progresiva crisis del sistema social, político y económico de El Salvador; con este panorama como contexto fue que para el año 1977 el país se preparó para un nuevo proceso electoral presidencial. Frente a este panorama de descomposición gradual de la situación salvadoreña, los Estados Unidos se mostraron impasibles pues consideraban que la crisis aún no se desbordaba tanto

como para centrar su atención en el país, además los militares todavía mantenían una relativa estabilidad.

Como se apuntó líneas arriba el intento de Reforma Agraria por parte de Molina significó el distanciamiento, más no la ruptura de su alianza, entre gobierno y oligarcas, el efecto inmediato de este nuevo escenario se reflejó en el proceso presidencial de 1977. La actuación oligárquica en la elección presidencial fue de mayor interferencia en la selección del candidato presidencial del PCN ya que no estaba dispuesta a correr el riesgo de una nueva diferencia con el próximo gobierno y perder el control de la nación, para evitarlo buscó un aspirante coincidente con sus posturas ideológicas. El 10 de septiembre de 1976 fue seleccionado el ministro de Defensa de Molina, general Carlos Humberto Romero, personaje identificado con los intereses oligárquicos y los métodos represivos quien, una vez designado candidato, renunció a su puesto, y aun cuando Romero había acompañado al presidente Molina a algunas reuniones explicativas sobre la Reforma Agraria, se había abstenido de emitir su opinión sobre la transformación agraria.¹⁹³

Frente a la elección, nuevamente se constituyó la UNO, en un último intento por preservar el funcionamiento de los canales electorales y mantener vigencia dentro del electorado como una fuerza mediadora entre sociedad y oligarquía. Se eligió como candidato al coronel retirado Ernesto Claramount Rozeville.

El ambiente en el cual se desarrolló la campaña electoral estuvo caracterizado por una gran tensión, cuyo principal componente fue el ataque que emprendió FARO contra la Iglesia y contra los recién formados frentes de masas que reivindicaban demandas sociales o postulaban objetivos democráticos. Los fantasmas del comunismo y las acciones reivindicativas de los campesinos, redoblados por la muerte del terrateniente Orellana y por el secuestro y muerte del director del ISTA, R. Poma, ocasionaron que se incrementara la agresividad de los grupos represivos de derecha, como FARO u ORDEN, así como el

¹⁹³ Bataillon, Gilles, *Génesis de las Guerra Intestinas en América Central (1960-1983)*, Trad. Jorge Alaniz, México, D.F., Fondo de Cultura Económico, 2008, pp. 373.

énfasis que el candidato del PCN, dio a la alternativa “democracia o comunismo”, eje de su propaganda electoral. De igual modo, esta tensión contribuyó a coartar la capacidad de difusión de la alianza opositora, la cual “propagandizó en torno a la urgencia de ‘la vuelta a la democracia’”.¹⁹⁴

El día de la jornada electoral se detectaron diversas irregularidades,¹⁹⁵ lo que permitió que el candidato oficial obtuviera una holgada ventaja sobre el candidato opositor.

A diferencia de 1972, la UNO denunció y emprendió acciones para denunciar el fraude, la más importante fue la ocupación el 23 de febrero de 1977 de la Plaza Libertad, en el centro de San Salvador, exigiendo la anulación de los comicios y la convocatoria de nuevas elecciones. Pronto, la protesta electoral se convirtió en una de tipo social en donde participaron de manera activa diversas organizaciones de todo tipo, exigiendo diferentes demandas sociales, económicas y políticas, llegando a concentrar en la plaza entre 40 000 y 60 000 salvadoreños durante cuatro días. Ello generó temor entre los militares ante la posibilidad de una crisis de legitimidad y de que la situación se desbordara, la solución adoptada fue la represión. Así el 27 de febrero, militares rodearon la plaza y conminaron a sus ocupantes a desalojarla, posteriormente comenzaron a disparar durante aproximadamente cuatro horas, provocando un incierto número de víctimas.

El uso de la fuerza en que culminó la contienda presidencial de 1977, permitió a la corporación armada “legalizar” su presencia en el poder. Al mismo tiempo, este desenlace vino a sellar el desplazamiento definitivo de la vía electoral como campo de prueba del consenso nacional.

¹⁹⁴ *Op.Cit.*, Moreno Parada, p. 240.

¹⁹⁵ **Elecciones de 1977** Durante el fraude electoral de 1977, los militares del PCN recurrieron a diversos tipos de fraude para garantizar el triunfo del general Carlos Humberto Romero. Así, además de la colaboración habitual de las autoridades municipales y militares locales, los órganos del estado recurrieron a los servicios de funcionarios de la Administración Nacional de Aguas, dispusieron del equipo de radio de la entidad e idearon un sistema de claves destinado a asegurar el contacto entre las casillas electorales y los miembros de ORDEN, encargados de distribuir votos a favor del PCN a las casillas que así lo requirieran. Esta y otras irregularidades permitieron el triunfo del general Romero por una holgada mayoría de votos.

En la medida que el fraude vino a confirmar que la vía electoral no funcionaba como canal de participación política independiente, las agrupaciones opositoras que postulaban esa vía perdieron el sustento para proponer una alternativa adecuada. De ahí su paso al segundo plano en la escena política salvadoreña; paso que, a su vez, repercutió en el régimen político, ya que significó la reducción de las posiciones intermedias y de propuestas moderadas en el ámbito de las organizaciones opositoras. Aunado al debilitamiento de quienes sostenían puntos de vista moderados en el interior del gobierno y de la clase dominante, y frente al alejamiento de la jerarquía eclesiástica y el deterioro de los partidos que integraban la UNO, se favoreció el redoblamiento de las posiciones polares. A partir de este momento la oposición legal dirigiría su actividad a la denuncia y a la protesta por la violación de los derechos humanos y la falta de garantías para la reivindicación de demandas sociales, políticas y económicas, tanto en el ámbito nacional como internacional.

La vía del hecho se extendería a otros sectores como producto de una doble evidencia: la incapacidad del estado para llevar a cabo proyectos que atentaran contra los intereses de la oligarquía, y la inviabilidad de la participación política por canales pacíficos, probada por el fraude electoral y por la creciente represión, como lo fue el caso de la expulsión de la Plaza Libertad. Incapacidad que desmitificó y deslegitimó al Estado, violencia oficial que demostró la necesidad de la organización como requisito de la acción reivindicativa. Ambos factores, de hecho, favorecerían el aumento de la audiencia de las organizaciones que planteaban otras alternativas, tanto de la estructura económica como del sistema político.

3.2 LA CRISIS SE DESBORDA: EL GOBIERNO DEL GENERAL CARLOS HUMBERTO ROMERO (1977-1979)

Respaldado por los resultados de la elección, pero deslegitimizado por el fraude y la posterior represión, el 1 de julio de 1977 el general Romero tomó posesión como presidente constitucional de El Salvador, la prioridad de su administración era reconstruir la imagen de legitimidad y de representatividad de su gobierno.

Cuando asumió el cargo el general Molina enfrentó de manera casi inmediata las presiones del gobierno de los Estados Unidos por el tema de los derechos humanos; dicha presión estaba enmarcada dentro de la política de los derechos humanos y las democracias viables impulsada por el presidente James Carter, también estaba precedida por lo revelado en el informe del Departamento de Estado norteamericano sobre la situación de los Derechos Humanos, de marzo de 1977, en los diversos países del orbe. Lo revelado por el informe causó una crisis en la relación entre Estados Unidos y El Salvador, desatada cuando el secretario de Estado estadounidense, Cyrus Vance, anunció la suspensión de toda ayuda a El Salvador a lo que el presidente Molina respondió con el rechazo de la ayuda norteamericana.

Para la solución de la crisis entre ambas naciones, el presidente Romero anunció su intención de realizar los cambios necesarios para remediar la situación del país y prometió detener la represión, en especial la dirigida a los miembros de la iglesia católica y a los jesuitas. Además el nuevo gobierno se mostró más tolerante hacia las acciones reivindicativas encabezadas por la oposición legal. Las declaraciones de buenas intenciones de Romero pronto rindieron frutos al restablecerse gradualmente las relaciones entre ambas naciones y la restitución de la ayuda.

Este nuevo panorama de mayor libertad de manifestación, que si bien fue un mero movimiento táctico por parte de Romero, no fue desaprovechado por los diversos sectores populares de la sociedad salvadoreña, quienes a partir de las elecciones de 1977 y los posteriores acontecimientos habrían mostrado mayor cohesión para la obtención de sus objetivos.

Sin embargo, las nuevas libertades permitidas por el gobierno no significaron necesariamente la promulgación de las reformas exigidas durante las acciones reivindicativas de los grupos sociales, el hacerlo podría traer la férrea oposición de la oligarquía y la posibilidad de una ruptura con los aliados históricos de los militares, además, ideológicamente, la posibilidad de reformas no encajaba con la mentalidad del presidente Romero. La incapacidad gubernamental para hacer reformas, para impedir el

accionar de los grupos represivos y el gradual cierre de la participación política de la oposición, trajo como consecuencia una mayor radicalización de los grupos y sectores medios y populares, quienes se convencieron de que la acción reivindicativa era la única forma posible para la obtención de sus peticiones, para llevar a cabo su idea se unieron a los frentes de masas (FAPU, BPR, LP-28) los cuales practicaban la vía del hecho o acción como legítima desde 1974. De la misma forma, los factores arriba mencionados influyeron en la intensificación de la actividad de las agrupaciones integradas en esos frentes así como la diversificación de las acciones.

Las acciones emprendidas por los frentes de masas y por las organizaciones político-militares preocupaban demasiado a los oligarcas y presionaron al gobierno de Romero para tomar cartas en el asunto y solucionar la situación, pues consideraban que era momento de demostrar por qué fue puesto en la presidencia por la oligarquía.

Frente a la presión oligárquica y de las organizaciones populares, la respuesta del nuevo gobierno fue, o intentó ser, dentro de los marcos de la ley, debido principalmente al hecho de mantener las relaciones con los Estados Unidos en un estado óptimo y en concordancia con la política de derechos humanos impulsada desde Washington. En el mes de agosto de 1977, “un grupo de abogados fue encargado de incorporar diversas modificaciones a los códigos Penal y Procesal Penal, que la Asamblea Legislativa aprobó en octubre, poco después del ‘ajusticiamiento’ del rector de la Universidad [Doctor Carlos Alfaro Castillo]”.¹⁹⁶ Sin embargo, estas nuevas modificaciones penalizaban únicamente las acciones subversivas encaminadas a derrocar al gobierno por medios violentos, pero no consideraban como delito las acciones reivindicativas con miras a la obtención de demandas.

Estos ajustes a los códigos penal y procesal no complacieron en lo absoluto a los oligarcas que las consideraban demasiado blandas y exigían mano dura por parte del gobierno ante la evidente amenaza comunista que representaban las organizaciones

¹⁹⁶ *Op.Cit.*, Gordon Rapoport, p. 214.

populares. Inicialmente, los oligarcas habían evitado intervenir en las decisiones del Estado, así como en hacer uso de su capacidad de coordinación política o de recurrir a la represión, a excepción de algunos atentados contra miembros de la oposición reivindicados por la UGB; su accionar se limitó a editoriales en la prensa, por medio de los cuales “se exigía un ‘gobierno fuerte, enérgico, decididamente anticomunista y nacionalista como en Chile y otros países del Cono Sur de América’”.¹⁹⁷ Esta abstención estaba dirigida a evitar roces con los norteamericanos y dañar el vínculo resarcido y a la petición del general Romero que formuló el día que asumió la presidencia. La nueva posición se debía al temor oligárquico frente al contexto de huelgas, toma de tierras y centros laborales, irrupción concertada de obreros y campesinos a edificios públicos y movilizaciones de miembros de diversos sectores sociales en apoyo a las demandas populares, agrupados en los frentes de masas que aparecieron ante los ojos de la oligarquía y sus aliados en el gobierno como una amenaza al *statu quo* y a sus intereses.

Pero no sólo la presión oligárquica estuvo dirigida al gobierno salvadoreño, también estuvo destinada al gobierno de los Estados Unidos. Su actuación comprendió el diálogo con los responsables norteamericanos de la política hacia América Latina y una campaña de presión pública, dirigida directamente a las autoridades salvadoreñas e indirectamente hacia los funcionarios del gobierno estadounidense. Estas acciones de la oligarquía consistían en el envío de cartas al subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Terece Todman, en las que expresaban su opinión sobre si “el gobierno de los Estados Unidos [...] reconocía la obligación del gobierno de El Salvador [de] salvar la vida de la nación durante una emergencia pública”.¹⁹⁸ Sustentaban la urgencia con la que requerían una respuesta, en el hecho de que su país se encontraba bajo el “ataque asesino, despiadado y sistemático del terrorismo”,¹⁹⁹ frente al cual el gobierno salvadoreño

¹⁹⁷ *Ibidem*, p. 231.

¹⁹⁸ *Ibidem*, p. 232.

¹⁹⁹ *Ápud.* Gordon Rapoport, *Op.Cit.*, p. 233.

“vacilaba [...] en tomar las medidas necesarias para proteger el orden público”²⁰⁰ en razón de las presiones de Estados Unidos. Asimismo, se dio inicio a una campaña tendiente a lograr que las autoridades salvadoreñas adoptaran “mano firme” ante el “ataque terrorista”. Dada la coincidencia entre los responsables del orden y las asociaciones de la empresa privada, estos últimos suspendieron pronto la campaña emprendida.

La gota que derramó el vaso fue el asesinato del industrial Molina Cañas en un intento de secuestro en noviembre de 1977, frente a este acto el presidente Romero lanzó un categórico “¡Ya basta!”, que vino a ser la culminación de su posición inicial de rechazo a toda violencia y tolerancia, para oponerse después sólo a la que provenía de las organizaciones político-militares y la de los frentes de masas. Así se abría en El Salvador una nueva época de cero tolerancia y represión a todo tipo de manifestación que estuviera en contra del gobierno y de la oligarquía.²⁰¹

Este viraje de la posición inicial de tolerancia del general Romero a una de cero tolerancia a las actividades de la oposición, no es comprensible sin el aval del gobierno de Carter, quien había comenzado a preocuparse al percatarse de que las fuerzas de “izquierda” habían comenzado a crecer desproporcionadamente a raíz del ambiente permisivo impulsado por Romero y avalado por la política de derechos humanos de Carter, lo que ponía en peligro la influencia norteamericana en el país y por tanto su seguridad. Por lo tanto las prioridades comenzaron a cambiar. El subsecretario de Estado para asuntos Interamericanos, Terece Todman, estableció las nuevas prioridades “el terror y la subversión son los problemas más grandes”²⁰² en América Latina, así los derechos humanos habían sido relegados a segundo plano, aunque no había sido declarado

²⁰⁰ *Ápud.* Gordon Rapoport, *Op.Cit.*, p. 233.

²⁰¹ *Op.Cit.*, Gordon Rapoport, p. 233.

²⁰² *Op.Cit.*, LaFeber, p. 320.

oficialmente, este viraje permitió a los cuerpos de seguridad salvadoreños reprimir a los opositores mientras los funcionarios norteamericanos volteaban hacia otro lado.²⁰³

3.2.1 La ley de defensa y garantía del orden público

Con el aval no declarado del gobierno estadounidense y el consenso entre oligarcas y gobierno, el 24 de noviembre de 1977, Romero enviaba a la Asamblea Legislativa el instrumento legal que le permitiría castigar por igual acciones armadas, manifestaciones o la mera expresión política contraria al gobierno, respondiendo a las demandas de mano dura de la oligarquía. De este modo, se podrían combatir todos aquellos actos que en la concepción de la clase dominante y de los altos mandos militares eran terroristas, manteniéndose dentro de la “legalidad” como lo exigían las políticas aplicadas por la administración Carter, de respeto a la ley y a los derechos humanos. La ley fue aprobada de inmediato por el Congreso. La nueva ley entró en vigor el 3 de diciembre de 1977.

Romero y los oligarcas deseaban contar con un instrumento legal que les permitiera aplastar por la fuerza, todo reclamo, oposición y protesta popular, sin afectar inicialmente la imagen y las relaciones internacionales de El Salvador, principalmente con Estados Unidos. Esta ley, vino a cerrar todas las válvulas de escape que podía tener el pueblo salvadoreño para manifestar su rechazo al gobierno. En efecto, “quedaron prohibidas las manifestaciones; el derecho a reunión, abrogado; las actividades de los partidos políticos, negadas; la Universidad Nacional, cerrada; la libertad de expresión, restringida por una drástica censura”.²⁰⁴ La nueva legalidad permitió a las fuerzas armadas desocupar tierras, disolver huelgas, reprimir manifestaciones, evitar la realización de asambleas y actos públicos de la oposición, efectuar numerosas capturas y ejecutar algunas operaciones exitosas contra las organizaciones guerrilleras.

Entre “diciembre de 1977 y julio de 1978, ocho intentos de realizar actos públicos de diverso carácter – manifestaciones, mítines, asambleas, misas y conmemoraciones – por

²⁰³ *Ibidem.*

²⁰⁴ *Op.Cit.*, Castro Morán, p. 254.

parte de organizaciones legales e ilegales, fueron evitados mediante la represión”.²⁰⁵ Con la represión legalizada en El Salvador, toda manifestación de descontento sería impedida en aras de mantener el orden dentro de un marco legal, al mismo tiempo se obtendría la aprobación de la administración Carter, lo que permitiría el libre flujo de la ayuda norteamericana.

A pesar de que la nueva disposición logró impedir el desarrollo de huelgas, manifestaciones, reuniones y había incrementado de manera alarmante el uso de la confesión extrajudicial (eufemismo de tortura); no logró impedir su estallido ni el uso de nuevas formas de presión por parte de las organizaciones de masas.

La aplicación de la ley fue ineficaz para impedir el surgimiento de nuevas acciones reivindicativas, que encontraron nuevas formas de protesta, e inoperante para poner un freno a las actividades guerrilleras a lo largo de 1978, ello generó descontento entre diferentes sectores de la sociedad, puesto que había fallado en su propósito de establecer el orden y por el contrario sólo provocó una mayor polarización de la sociedad. Este descontento no fue suficiente para su derogación por parte del gobierno, quien aún creía que la represión legalizada por la ley era la forma de acabar con las muestras de descontento social y con las organizaciones populares y guerrilleras.

A pesar de la convicción del Estado y de la oligarquía en dicha ley, ésta tuvo que ser derogada. En la anulación de ese instrumento jurídico incidió la presión internacional, principalmente de los Estados Unidos, acentuada a partir de la publicación del informe de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y el del Departamento de Estado norteamericano sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador, en enero y febrero de 1979, respectivamente. En los informes se señalaba la progresiva restricción de las libertades, y el hecho de que las detenciones arbitrarias, la desaparición de opositores y los casos de torturas se habían vuelto más frecuentes.

²⁰⁵ *Op.Cit.*, Gordon Rapoport, p. 247.

El impacto que tuvo la difusión de ambos informes, permitió que el destino de la demanda de derogación de la ley, avalada por las firmas de treinta asociaciones cívicas, políticas y religiosas, que envió el arzobispo de San Salvador, Monseñor Romero, a la Asamblea Legislativa en enero de 1979, fuera distinto de las propuestas presentadas con anterioridad. Así el 27 de febrero de 1979, por presiones internacionales, la Ley de Defensa y Garantía del Orden Público fue derogada. Con esta acción el gobierno esperaba aminorar las presiones internacionales y facilitar el flujo de la ayuda, y al mismo tiempo, internamente, esperaba calmar el descontento y la polarización de la sociedad.

3.2.2 Año 1979: La crisis se desborda

La anulación de la Ley no significó la renuncia a los métodos represivos empleados por el Estado y los grupos paramilitares, tampoco tranquilizó a los sectores populares ni impidió que las acciones reivindicativas de las organizaciones de masas continuaran. Por el contrario, a partir de 1979 se inauguró el periodo más violento de la presidencia del general Romero y de una mayor polarización de la sociedad, tanto por el objetivo, de quienes gobernaban, de mantener el *statu quo*, la cerrazón democrática e intactos sus intereses, recurriendo, incluso, a la eliminación física de los adversarios, como por el aumento de la audiencia y el avance organizativo que alcanzarían los frentes de masas. A ello se sumaba como componente de inestabilidad las secuelas de las dificultades económicas generadas a partir de la crisis de 1973 (baja del poder adquisitivo de la moneda, cierre de empresas, aumento del desempleo, fuga de capitales, etcétera).

Durante el primer semestre de 1979 la situación imperante en El Salvador era de creciente descontento y de brutal represión a todo aquel disconforme con el escenario; a esto se agregaba el aumento constante de las actividades de los grupos guerrilleros, con acciones de autodefensa de las marchas, con secuestros y de propaganda. Por otra parte, la crisis económica seguía causando estragos en la economía de las familias salvadoreñas; a esto habría que sumar el aumento del desempleo a partir de la subida de los precios del

petróleo en el mismo año.²⁰⁶ En el plano internacional, el senador demócrata Edward Kennedy hacía llamados a su gobierno y a la comunidad internacional para suspender toda ayuda al gobierno de El Salvador, debido a las continuas violaciones de los derechos humanos que cometían los militares en contra de la población.

Frente a la deteriorada situación, el gobierno hacía poco o nada para resolverla, acrecentando aún más las protestas y el activismo de la sociedad salvadoreña, que ahora no sólo abarcaba a los sectores populares, quienes se expresaban por medio de los frentes de masas, sino que ahora también abarcaba a las capas medias y altas modernizantes de la sociedad. También, dentro de la oposición política legal había malestar, ya que veían cerrada la posibilidad de acceso al gobierno por medio de las urnas mientras se mantuvieran en el poder los militares del PCN. No compartían los métodos de las organizaciones populares, sin embargo, no dejaban de señalar que las causas de sus acciones se hallaban en la falta de reformas de beneficio social, reconociendo como legítimo el derecho de los sectores populares a reivindicar sus demandas.

En el primer semestre de 1979 el descontento se generalizaba entre amplios sectores de la sociedad salvadoreña. En un intento de componer la deteriorada situación y apaciguar los ánimos exacerbados de la sociedad el general Romero declaró en un mensaje televisivo del 17 de mayo:

“[...] sus intenciones de ‘reavivar optimismos y esperanzas...’ a través de dos medidas dirigidas a la oposición legal: a mediano plazo, es decir, para marzo de 1980, la promesa de garantizar ‘la pureza del proceso electoral...’ y aun de impulsar las reformas legislativas pertinentes, asimismo, el presidente prometía a corto plazo, y extendía la invitación ‘a los partidos políticos, universidades, asociaciones profesionales, sindicatos, iglesias, empresa privada y demás organizaciones legalmente reconocidas’ a ‘la formación de un foro nacional [...] a fin de hacer realidad un proceso de auténtica participación ciudadana

²⁰⁶ **La Crisis del petróleo de 1979** (también conocida como *Segunda Crisis del Petróleo*, tras la producida en 1973) se produjo bajo los efectos conjugados de la Revolución Iraní y de la Guerra Irán-Irak. El precio del petróleo se multiplicó por 2,7 desde mediados de 1978 hasta 1981.

en el hacer político nacional'. Al mismo tiempo el presidente advirtió que no abandonaría la 'lucha contra las fuerzas anárquicas [...], la subversión y el terrorismo'.²⁰⁷

El intento presidencial de componer la situación no prosperó dadas las condiciones que había propiciado el mismo gobierno de Romero, pues según las organizaciones invitadas no había las condiciones mínimas de seguridad que ofrece un estado de derecho, entre otros factores. A pesar de esta falta de confianza de parte de las organizaciones opositoras el Foro Nacional fue inaugurado, pero fue poco lo que produjo durante su escasa existencia.

El fracaso de la convocatoria de Romero evidenció la franca polarización de la sociedad, por un lado los altos funcionarios gubernamentales, altos mandos militares y los oligarcas, por el otro los sectores populares, los partidos políticos de oposición, las capas medias y altas modernizantes. La evidente polarización social preocupaba a algunos sectores medios de las fuerzas armadas que veían con preocupación la situación a la que estaba conduciendo el general Romero al país.

La evidente crisis en la que se encontraba el gobierno de Romero inquietaba a varios sectores moderados de la sociedad y de las fuerzas armadas y a los funcionarios estadounidenses que veían con preocupación como el general Romero polarizaba al país, pero no fue sino hasta después del triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional en junio de 1979 en Nicaragua que decidieron actuar. El plan fraguado consistía en expulsar a los militares y oligarcas del poder y sustituirlos por un gobierno de corte moderado capaz de resolver la crisis.

El 15 de octubre de 1979, una guarnición militar de San Salvador derrocó por medio de un golpe de estado al general Romero, y lo sustituyó por un Junta de Gobierno integrada por tres civiles y dos militares para poner en marcha reformas que dieran fin a la crisis.

²⁰⁷ *Op.Cit.*, Gordon Rapoort, p. 261-262.

Fue a partir de este momento en que los oligarcas pasaron a formar parte de la oposición, dedicándose a boicotear al nuevo gobierno con el objetivo de regresar a un estado de las cosas anterior a 1979, éstos se negaron a todo tipo de reformas que afectaran sus intereses, al mismo tiempo, continuaron con su labor represiva en contra de todos aquellos que según su concepción eran comunistas, tanto del gobierno como de los sectores populares y guerrilleros no alineados con la Junta.

3.3 LA EXPULSIÓN DE LOS OLIGARCAS DEL GOBIERNO: LA PRIMERA JUNTA CÍVICO-MILITAR

Desplazados del gobierno a raíz del golpe de estado dado por los sectores moderados de la sociedad salvadoreña y de las fuerzas armadas, y sin el respaldo de los estadounidenses, que ahora se lo otorgaban a la Junta de gobierno, los oligarcas se encontraron en la oposición. Será desde ésta, que la oligarquía jugará un doble papel con respecto al gobierno; será un amigo-enemigo. Amigo porque ayudará a reprimir por medio de los grupos paramilitares como ORDEN, a todo aquel que se considerará comunista, tanto dentro del gobierno como en las organizaciones de masas y grupos político-militares de izquierda agrupados en el FMLN-FDR. Enemigo porque oligarcas y sus aliados militares sabotearán todos los intentos de reforma que intentará emprender el gobierno de la Junta y destinados a la solución de la crisis. Su objetivo principal será, en un principio, retomar el control del gobierno y regresar al *statu quo* anterior a 1979, y a la consecución de este objetivo es que centrarán todas sus acciones tanto legales como ilegales después de salir del gobierno en octubre de 1979.

Instalada en el gobierno, la Junta comenzó decretando la disolución de ORDEN y otros grupos paramilitares. Además, prometió liberar a los presos políticos, nacionalizar el negocio del café, fijar salarios mínimos e iniciar un amplio programa de reforma agraria, en general hacer cumplir los principios declarados en la Proclama de la Fuerzas Armadas. La agenda declarada estremeció de inmediato a las fuerzas armadas y a otros sectores dentro y fuera del gobierno a quienes no les convenía la aplicación de reformas. Los prisioneros políticos no aparecieron, los miembros de ORDEN simplemente se unieron a

otras bandas armadas y continuaron con la represión, tal como lo denunció el informe de la OEA, sin que el gobierno reaccionara. El terrorismo y la violencia aumentaron desproporcionalmente.

Dentro del gobierno hubo diferencias entre los miembros civiles de la Junta con respecto a cómo formular las reformas y en cuanto al programa político que debía seguir el gobierno. También había problemas dentro de las fuerzas armadas ya que algunos sectores pugnaban por el programa reformas-contrainsurgencia y otros por seguir fielmente los principios anunciados en la Proclama de las Fuerzas Armadas; estas divergencias generaban parálisis del gobierno que no alcanzaba a satisfacer las reformas de los sectores populares y permitía la plena impunidad de los cuerpos represivos de la derecha, todos estos factores precipitaron la caída de la Junta en enero de 1980.

A los factores arriba mencionados se agregaba el papel asumido por un sector de la oligarquía, que desde el momento en que se constituyó la Junta de Gobierno, pugnó por el incremento de la represión contra las organizaciones populares desde el gobierno de Romero. Este repudio se materializó en los miembros civiles de la Junta, quienes fueron permanentemente evadidos, ignorados y, en ocasiones, agredidos por la derecha antirreformista, que consideraba a los militares como únicos interlocutores válidos. La oligarquía identificaba a la represión con los militares de la Junta y la propuesta de cambios estructurales con sus componentes civiles; por lo tanto, pensaba que sus intereses estarían adecuados a un proceso que eliminara a los civiles para dar paso a un gobierno que se olvidara de la idea de hacer reformas y se concentrara en la eliminación del movimiento popular.

La represión desatada fue apoyada por los aliados militares de los oligarcas que habían permanecido dentro de la institución armada y al igual que la oligarquía deseaban el retorno al estado de cosas anterior a 1979. Así, a partir de diciembre de 1979, los cuerpos de seguridad acentuaron y sistematizaron los operativos contra las organizaciones populares, elevándose de manera acelerada los desaparecidos, los muertos y los torturados, en su inmensa mayoría calificados como activistas de izquierda:

obreros, campesinos, estudiantes, médicos, abogados, maestros, etcétera.²⁰⁸ Este grave deterioro de la situación llevó a Monseñor Romero a señalar el 4 de noviembre de 1979, que: “los Cuerpos de Seguridad están reprimiendo en una forma brutal, más brutal que en el régimen anterior, porque tratan de evitar que gane credibilidad el nuevo gobierno [...]”.²⁰⁹

Así los propósitos de la acción política iniciada por el sector oligárquico a partir de octubre de 1979 se resume en: “a) recuperar el control del aparato de Estado, b) liquidar a las organizaciones populares y c) impedir cualquier reforma”.²¹⁰ La actuación de la oligarquía, la ineffectividad del gobierno y la creciente agitación de las clases populares propiciaron la caída de la Junta el 2 enero de 1980.

3.4 LA SEGUNDA JUNTA DE GOBIERNO: JUNTA DEMOCRISTIANA

Después de la salida de los miembros de la primera Junta, los miembros militares efectuaron negociaciones con el Partido Demócrata Cristiano (PDC) para llegar a un acuerdo que permitiera compartir el poder. Así el 9 de enero de 1980 la nueva Junta quedó constituida por tres civiles y dos militares, también se firmó un pacto entre ambas fuerzas que contenían compromisos de tipo social, económico y militar.

A pesar del cambio de gobierno las cosas no variaron en demasía; las reformas no llegaban. El pueblo cada día se unía más y se lanzaba a las revueltas que crecían en número e intensidad y la represión se acrecentaba constantemente. La Junta no logró consolidarse a pesar del apoyo estadounidense, en realidad los verdaderos detentores del poder eran los militares antirreformistas en alianza con los oligarcas que impedían cualquier intento de reforma que atentara contra sus intereses. Esta situación deslegitimó, aún más, a la Junta a pesar de la creciente ayuda norteamericana.

²⁰⁸ *Op.Cit.*, Castro Morán, p. 283.

²⁰⁹ *Ibidem*, p. 288.

²¹⁰ *Op.Cit.*, Moreno Parada, p. 92.

Al mismo tiempo que reprimían, los oligarcas impulsaban un proyecto que deseaban imponer al gobierno. Para febrero de 1980 dos proyectos de gobierno para El Salvador se encontraban confrontados. Por un lado el de reformas-contrainsurgencia apoyado por la administración Carter y sus aliados los democristianos; por el otro, el oligárquico-contrainsurgente, promovido por la clase dominante y los altos mando militares. Dicho plan consistía en no modificar la estructura económica, social y política del país, pero sí contemplaba la aceptación de la ayuda norteamericana para poder derrotar por la vía armada a los grupos insurgentes de izquierda y debilitar a las organizaciones de masas por medio de la represión.²¹¹

El plan oligárquico no prosperó y se impuso el de reformas-contrainsurgencia, apoyado por Carter, quien destinó grandes cantidades de ayuda militar para derrotar a los grupos armados de izquierda y presionó, asesoró y ayudó para la realización de las reformas. El 5 de marzo de 1980 la Junta Democristiana decretó la Reforma Agraria que contemplaba la expropiación de las propiedades de los grandes terratenientes en tres fases; días después promulgó la Ley de Nacionalización de la Banca y otorgó un aumento salarial a los trabajadores.

Como era de esperar, se hizo presente la reacción de los oligarcas ante el anuncio y su posterior puesta en marcha de las reformas decretadas, principalmente la agraria. Las protestas se canalizaron mediante manifestaciones y actos de repudio contra el coronel Majano, quien fue responsabilizado de la conducción del proceso agrario y acusado de mantener vínculos con las organizaciones militares de izquierda. En esta ofensiva de la derecha, el embajador estadounidense, Robert White, fue acusado de apoyar al comunismo internacional. El mayor retirado Roberto D'Aubuisson ocupó muchas horas en televisión atacando a los "comunistas del gobierno" y a los "infiltrados en la Fuerza Armada". Los llamados al golpe de estado se repetían sin cesar y D'Aubuisson anunciaba la creación del Frente Democrático Nacionalista (FDN), antecedente de lo que sería poco

²¹¹ *Op.Cit*, LaFeber.

después ARENA.²¹² Aparte de las manifestaciones en contra de las reformas, principalmente la agraria, los oligarcas incrementaron la represión ocasionando que el número de las víctimas aumentara día a día.

El punto máximo de esta nueva ola represiva en protesta por las reformas y destinadas a desestabilizar y deslegitimizar al gobierno fue el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero el 24 de marzo de 1980, quien se había erigido como el vocero de los sectores populares, como la voz crítica de la represión y el sistema imperante, al que consideraba generador de pobreza y desigualdad, asimismo culpaba al gobierno y a los oligarcas de la situación; sus críticas y llamados a la acción popular causaron malestar entre los oligarcas hasta llegar al punto que su eliminación física se hizo inminente, ya que se corría el riesgo de que sus llamados arrastraran al pueblo hacia la revolución.

La Comisión de Derechos Humanos de la OEA informó que “la evidencia implicaba al coronel Medrano (fundador de ORDEN) y al mayor Roberto de D’Aubuisson [en el asesinato de Monseñor Romero]. El juez que dio estos dos nombres fue baleado, pero se recuperó.”²¹³ Después del asesinato de Monseñor Romero, el mayor hizo circular en los cuarteles del ejército un videocasete con un discurso en el cual aplaudía la muerte del arzobispo y pedía a los oficiales unirse a él para derrocar a la Junta.²¹⁴ Sin embargo, su llamado no prosperó.

Además de la ola represiva los oligarcas usaron todo tipo de artilugios destinados a obstaculizar la aplicación de las reformas, principalmente la agraria, que se aplicaron a finales de marzo y principios de abril. Al momento de la aplicación de la fase I de la reforma, la oligarquía opuso una resistencia tenaz cuando, por fin, las propiedades más grandes se pudieron dividir; algunos oligarcas se trasladaron a Miami después de maniobrar para que el gobierno les pagara las tierras a un precio muy elevado, el dinero,

²¹² *Ibidem*

²¹³ *Ibidem*, p. 325

²¹⁴ *Ibidem*, p. 328.

junto a la riqueza de los oligarcas desapareció en cuentas en bancos de Miami o Suiza. Otros terratenientes simplemente subdividieron sus propiedades en pequeñas parcelas y se las entregaron a miembros de su familia. Otros, contrataron a ex miembros de ORDEN o a los matones de D'Abuisson para que eliminaran a los grupos de campesinos que trataran de apoderarse de la tierra, incrementando el número de muertos que entre enero y agosto de 1980, fue más de la mitad del número total de asesinatos por motivos políticos en ese año.

Si la aplicación de la fase I de la reforma agraria costó mucho trabajo y muchas vidas la fase II y III nunca entraron en operación, la fase II implicaba la expropiación de las tierras, que en su mayoría, estaban destinadas al cultivo de café, caña de azúcar y algodón principalmente, la aplicación de ésta fase golpearía fuertemente a la economía salvadoreña basada principalmente en la agroexportación, un riesgo que ni el gobierno deseaba correr y menos dentro de un contexto de crisis donde las actividades económicas prácticamente estaban paralizadas. De hecho, la violencia creciente y la simple amenaza de reformar lanzaron a la economía en picada. “Entre 1978 y 1981, [...], unos 5 mil millones de dólares de capital privado se fugaron del país. En Washington, nunca nadie soñó en reponer esa pérdida con la ayuda norteamericana.”²¹⁵

En general el programa de reformas contribuyó poco a frenar la crisis salvadoreña; por el contrario, la derecha aumentó la represión, hecho que la enemistó con ciertos grupos militares debido a que los oligarcas asignaban a los militares una función exclusivamente represora, sostenía que el ejército no debía dedicarse a hacer reformas que debilitaran a la oligarquía sino a liquidar a la izquierda y al fantasma del comunismo, para ello era necesario una acción más decidida. Basándose en este principio la derecha incremento la acción de sus grupos paramilitares.

Con la crisis, el gobierno anunció la celebración de elecciones para constituir una Asamblea Constituyente en 1982 y presidenciales para 1983. El anunció de elecciones

²¹⁵ *Ibidem*, p. 328.

abrió la posibilidad de que la oligarquía pudiera acceder al poder por medio de las urnas y, por ende, poder aplicar su programa político excluyente y antirreformista. El anuncio hizo que la oligarquía se alistara a participar en el juego electoral y que pensará en la posibilidad de cambiar la estrategia que hasta ese momento había seguido.

Pese a esta nueva posibilidad, la represión continuó; para finales de 1980 más de 7 500 salvadoreños habían sido asesinados, principalmente miembros de los sectores populares, por parte de los cuerpos de seguridad del estado y contando con la enorme colaboración de los grupos paramilitares patrocinados por la oligarquía con el fin de evitar la instauración del comunismo en El Salvador. Así al finalizar 1980 la sociedad salvadoreña tomó el camino de la guerra para solucionar la crisis.

La oligarquía contribuyó a la agudización de la crisis durante 1980, haciendo casi imposible una solución política y propiciando la guerra civil ante su negativa constante a la realización de reformas sociales, económicas y políticas. Para 1981 el camino de la guerra se perfiló como el único capaz de resolver la crisis de El Salvador; la oligarquía jugó durante la guerra un papel importante como auxiliar del gobierno en contra del FMLN-FDR.

El sabotaje interno que realizó la oligarquía contra las dos Juntas de gobierno emanadas del golpe de 1979, apoyada por algunos sectores derechistas del ejército, provocó la ineficiencia del gobierno a la hora de la aplicación de las reformas y para poner fin a la represión. Además, durante el mismo periodo se dedicó a patrocinar a los grupos paramilitares, como ORDEN, responsables de la represión generalizada característica de este periodo, así como responsables de algunos de los crímenes de alto impacto que conmocionaron a la opinión pública durante 1980. Sus actos generaron la polarización de la sociedad y, en parte, incitaron a que la sociedad se decidiera por la vía armada para solucionar la crisis.

Durante la Ofensiva Final del FMLN, en 1981, la oligarquía se dedicó a apoyar al ejército gubernamental a través de los grupos paramilitares en la defensa de las ciudades y cuarteles, así como en reprimir las bases de apoyo social a la guerrilla.

3.5 LA GUERRA CIVIL (1981-1992)

En el periodo de guerra civil la oligarquía continuó con su represión a las bases de apoyo urbano del FMLN y a los restos de las organizaciones de masas, en el marco de su programa político de reprimir en su totalidad a la guerrilla y a los sectores populares. Al mismo tiempo se dedicó a obstaculizar la aplicación de las reformas promulgadas en 1980, con la intención de regresar al estado de las cosas anterior a 1979.

La actitud asumida por la oligarquía no convenía a los intereses del gobierno norteamericano, quien buscaba la instauración de un gobierno de corte moderado, democrático, reformista y no represivo. El intento norteamericano de reconstruir el régimen salvadoreño en torno a un centro político moderado y reformista, presentaba serias dificultades. Las más importantes se desprendían de los factores que habían llevado a la polarización y al agudizamiento de la crisis: la constante negativa de la oligarquía a aceptar reformas, bajo la idea o creencia de que reforma era igual a comunismo y se atacaba por igual a reformistas y a revolucionarios, y a la estrecha relación entre la clase dominante y los altos mandos militares.

De ahí que pretender reorganizar el régimen político mediante la participación de fuerzas que sustentaban proyectos opuestos, y cuyo único rasgo afín era el objetivo de derrotar al FMLN-FDR, requeriría de la progresiva intervención de los Estados Unidos en la crisis salvadoreña. Además de su calidad de potencia interesada en el conflicto, los norteamericanos reforzarían su papel de intermediario entre el gobierno y los sectores antirreformistas.

El sabotaje a las reformas y la represión a los sectores populares, formaba parte de la estrategia de la oligarquía para imponer su plan militar en contra del FMLN. Ejercía presión dentro del ejército a través de los sectores más conservadores de la institución armada para llevar a cabo su plan consistente en un asalto frontal y total (estrategia de tierra arrasada), que implicaba tanto a la insurgencia como a extensos grupos de población. Ello, en opinión de la oligarquía, permitiría derrotar a la oposición armada y evitar el avance de reformas.

A este plan se opuso la estrategia sugerida por el gobierno y sus asesores norteamericanos, quienes impulsaban el plan de reformas-contrainsurgencia. A fin de cuentas la visión que se impuso fue la del gobierno, lo cual no significó la plena aceptación y sumisión de la oligarquía y sus aliados militares a la estrategia de Washington, que se reflejó en el campo de batalla, pues las diferencias entre ambas estrategias afectaron la unidad de comando y limitaron la eficacia de las operaciones contra el FMLN. Al mismo tiempo, influyeron en el recrudecimiento de los conflictos al interior del ejército. Por otra parte, los oficiales conservadores continuaron aplicando la represión a través de los grupos paramilitares de derecha, logrando con ello prevenir el crecimiento del FMLN y dificultar la acción organizativa de las agrupaciones moderadas y de los casi desaparecidos frentes de masas, fundamentalmente del PDC.

La oligarquía pronto se percató de que no gozaba del apoyo norteamericano y que Reagan y su administración buscaban, a través de su interferencia, constituir un régimen sólido y dotarlo de legitimidad; este nuevo gobierno se basaría en los acuerdos y la negociación entre los participantes del mismo, un gobierno respetuoso de los derechos humanos, en donde el acceso al poder sería a través de elecciones y el ejército se constituiría en garante de sistema democrático y no intervendría en las decisiones políticas ni sería defensor de una clase social específica.

Esta situación hizo que la oligarquía tuviera la necesidad de participar en el juego democrático que Washington buscaba implantar en El Salvador para así poder desarrollar su propio programa político, económico y social. Eso explica la decisión de participar en las elecciones impulsadas por Reagan, para una Asamblea Constituyente que redactaría una nueva Constitución y designaría un presidente interino encargado de organizar elecciones para presidente, primero, y luego legislativas; las elecciones para la constituyente se efectuarían en marzo de 1982.

3.5.1 Elecciones para la Asamblea Constituyente

El anuncio para la realización de elecciones para la Asamblea Constituyente fue en marzo de 1982. Los partidos políticos se prepararon para tal acto. De un lado se

encontraba el PDC, que representaba objetivos moderados de reforma y tenía el apoyo de Estados Unidos, y por el otro estaba ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) quien se oponía a cualquier reforma y proponía la eliminación total del FMLN y sus aliados como forma de solución a la crisis de la nación.

ARENA fue la agrupación política de la oligarquía y de los altos mandos militares. Surgió en septiembre de 1981, a partir del FDN que fundara el mayor D'Aubuisson. El partido reunía a empleados y otros miembros de sectores medios urbanos; a campesinos y trabajadores agrícolas de las zonas cafetaleras, y a militantes de ORDEN. El partido tuvo como aliados a partidos como: el ex partido oficial PCN; y los derechistas Partido Popular Salvadoreño (PPS) y el Partido Orientación Popular (POP).

En 1982 se inició el proceso electoral para la Constituyente y en marzo se efectuó la votación, en donde el PDC obtuvo el 35% de la votación, ARENA recibió 26% y el PCN el 19%.²¹⁶ Estos resultados otorgaron la mayoría a la derecha en la Asamblea Constituyente, encargada de dotar al país de una nueva Constitución. La alianza derechista fue dotada de la legitimidad necesaria para restar alcance a las reformas y fijar límites a futuros intentos de cambio. El resultado electoral dio al traste con el plan de Estados Unidos de que el PDC obtuviera la victoria y, con la mayoría obtenida, poder poner en marcha su plan de gobierno moderado afín a los intereses de los Estados Unidos.

Sin embargo, esta victoria de la derecha tuvo su dosis de fraude, algo tan natural en la historia electoral de El Salvador. Cuando los campesinos votaban:

"[...] sus cédulas de identidad eran selladas y sus dedos pulgares manchados con tinta. Las autoridades alegaron que estas medidas tenían el propósito de eliminar el voto fraudulento, pero los rumores advirtieron de terribles consecuencias para quienes carecieran de tales recibos. Las papeletas de votación estaban numeradas y las urnas eran transparentes. Los salvadoreños sintieron que estaban votando ante los ojos del gobierno. Dado el temor de los campesinos al ejército, un temor sancionado por los cuerpos dejados en las calles o amontonados en los fondos de los barrancos, los resultados de las

²¹⁶ *Op.Cit.*, Gordon Rapoport, p. 323.

elecciones no fueron sorprendentes. D'Aubuisson encabezó una coalición de grupos de derecha la cual ganó 36 de los 60 escaños de la asamblea constituyente.”²¹⁷

El PDC ganó 24 escaños, con fuerte apoyo norteamericano, que incluyó contribuciones financieras. Por su lado, ARENA recibió apoyo financiero de los oligarcas residente en Miami, quienes buscaban restablecer el antiguo orden. El partido ARENA fue el mejor organizado en la campaña, a pesar de haber sido formado rápidamente por los oligarcas exiliados y por los militares conservadores.

El fracaso del plan norteamericano de que el PDC fuese mayoría en la Asamblea fracasó y se designó a Roberto D'Aubuisson como presidente de la Asamblea Constituyente, ya que fue elegido por un proceso diseñado por el gobierno de Reagan. A partir de entonces Washington tuvo que negociar las reformas con el mayor representante de la oligarquía antirreformista.

Pero aceptarlo no significaba apoyarlo. Después de haber hecho de las elecciones su bandera política, Reagan se dispuso a destruir los resultados electorales. Cuando D'Aubuisson amenazó con poner en la presidencia a un “amigo” o nombrarse el mismo mandatario, los funcionarios norteamericanos presionaron al ejército, el cual seguía teniendo el verdadero poder, para que se nombrara a un moderado. Los militares temerosos de que la ayuda militar fuera reducida, cedieron a las presiones norteamericanas. Al fin de cuentas fue nombrado Álvaro Magaña, un moderado que fue director del Banco Hipotecario (1965-1982). Su gobierno estaría encargado de realizar las elecciones.²¹⁸

En venganza, la Asamblea dominada por la derecha y dirigida por D'Aubuisson interrumpió el programa de Reforma Agraria. Amparada en la mayoría obtenida, la alianza derechista aprobó decretos que “autorizaban la devolución de algunas propiedades afectadas en 1980, fijaba el límite máximo de la propiedad en 245 hectáreas y otorgaba a

²¹⁷ *Op.Cit.*, LaFeber, p. 378.

²¹⁸ *Op.Cit.*, Gordon Rapoport, p. 323.

los propietarios el derecho a mantener en reserva 150 hectáreas adicionales".²¹⁹ Al mismo tiempo, paralizó la aplicación de la segunda fase de la reforma y puso en serios aprietos a la Democracia Cristiana. Sólo la presión norteamericana evitó un retroceso mayor en las reformas.

Con la Reforma Agraria, Estados Unidos planeaba ganarse las mentes y los corazones de las masas, alejándolas de los revolucionarios. Empero al dificultarse su aplicación por las acciones de D'Aubuisson, quien no estaba dispuesto a entregar la riqueza de quienes lo apoyaron en las elecciones, el gobierno norteamericano a través del Departamento de Estado intentó poner el programa a funcionar de nuevo. Pero las cosas se estancaron y la reforma no prosperó como lo esperaba Reagan.

Al mismo tiempo que las reformas eran detenidas, la designación de los ministerios encargados de las decisiones políticas y económicas en el gobierno provisional fueron acaparados por miembros de la oligarquía, la participación del PDC en el gobierno sólo fue posible gracias a la presión de los Estados Unidos.

Para detener las luchas internas en la Asamblea Constituyente, que impedían la promulgación de reformas, entre oligarquía y PDC, Estados Unidos presionó para la firma de un pacto de gobernabilidad. Fue el 3 de agosto de 1983 que se signó el Pacto de Apaneca, un pacto de unidad nacional para garantizar el adecuado funcionamiento del gobierno y facilitar la formulación de reformas.

No sólo dentro del gobierno y la Asamblea se gestaban pugnas, también se desarrollaron dentro de la institución armada. El punto culminante fue la insubordinación en contra del ministro de Defensa coronel José Guillermo García por parte de sectores conservadores del ejército. Para evitar futuros incidentes de este tipo los militares conservadores signaron el pacto.

²¹⁹ *Op.Cit.*, Browning, p. 413.

La firma del pacto significó el cese de los ataques entre oligarquía y PDC, y el retiro de los obstáculos con miras a la consecución de las reformas, la materialización de este nuevo ambiente de “tranquilidad” fue la promulgación de la Constitución el 15 de diciembre de 1983.

A pesar del avance que significó en la consolidación del régimen la promulgación de la Constitución, ésta fue moderada, pues retomó el límite máximo de tenencia de la tierra que decretó ARENA en la Asamblea Constituyente de 245 hectáreas. En cuanto a la política económica del Estado fue restringida su posibilidad de intervenir en la dirección de la economía, entre otras libertades que se otorgaron pero que fueron limitadas severamente.

Cabe destacar que si bien la Constitución de 1983 incluyó algunas de las demandas tradicionales de las clases populares, también estableció límites muy estrechos a la implantación de futuras reformas, aun respecto de las que apoyaban los Estados Unidos y el PDC. La extrema moderación de las reformas y el hecho de que no hayan atacado las raíces de los problemas que derivaron en la guerra civil por la que pasaba El Salvador, demostraron la gran influencia que tuvo la oligarquía en la formulación de las reformas. Lo moderado de la Constitución, contribuyó a que los sectores conservadores participaran en el juego político impulsado por Estados Unidos, pues de llegar a la presidencia tendrían la oportunidad de aplicar su plan de gobierno. Esta moderación, fue posible en parte por la presión del Departamento de Estado norteamericano que obligó al gobierno de Magaña para otorgar parte de los préstamos a la iniciativa privada.

3.6 LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DE 1984: UN DURO GOLPE PARA LA OLIGARQUÍA

La nueva postura de la oligarquía, su ingreso al juego democrático impulsado por Estados Unidos, tuvo su primera prueba con la convocatoria para la elección presidencial. ARENA se aprestó a organizar su campaña electoral y designó a D’Abuisson como su candidato presidencial.

D'Abuisson contaba con el apoyo total de la oligarquía agrupada en ARENA, partidaria del retroceso al *statu quo* anterior a 1979. Estas elecciones significaron la oportunidad de ganarle en su propio juego al PDC y a los Estados Unidos; y así como la posibilidad de poner un freno al reformismo y retomar la alianza con los militares minada gradualmente por el PDC y Estados Unidos, pues era la primera vez que los oligarcas concurrían a una elección sin el apoyo de los militares.

A pesar del enorme apoyo prestado por los oligarcas el candidato de ARENA fue derrotado en segunda vuelta electoral el 6 de mayo de 1984, al ser vencido por José Napoleón Duarte quien obtuvo el 53% de la votación contra el 46% de D'Abuisson. Los resultados electorales obtenidos por ARENA motivaron, a pesar de la derrota, a los oligarcas a seguir en el juego electoral, pues seguía latente la posibilidad de ganar futuras elecciones y la oportunidad de poder poner en marcha su programa político, económico y social sin perder el apoyo de Estados Unidos.

3.7 EL GOBIERNO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA: CAMBIAR PARA SOBREVIVIR

La oligarquía sufrió durante el gobierno del PDC, una metamorfosis que abonó a favor de una solución para el estado de guerra que vivía El Salvador. Al mismo tiempo que el gobierno de Duarte se encontraba en crisis y cada día se volvía más dependiente de la ayuda de los Estados Unidos para sobrevivir, dentro de la oligarquía sucedían cambios que significaron un gran paso en vías de la solución de la crisis salvadoreña, y principalmente de la guerra civil. En ARENA, partido político de la oligarquía que sirvió de instrumento para la defensa de sus intereses, se vivió una transformación política, resultado de un análisis profundo a raíz de las derrotas electorales sufridas a manos de la democracia cristiana. Se planteó la necesidad de la búsqueda de alternativas. En un principio, importantes sectores de la oligarquía se inclinaban por la estrategia de utilizar la violencia política para promover la reversión del proceso y el retorno al *statu quo*. La vía armada se contemplaba como válida para la eliminación de las fuerzas guerrilleras. Con la consolidación de la política reformista del PDC en el gobierno que contaba con el apoyo de Estados Unidos, quien a su vez impulsaba la alianza de éste con los militares, los viejos

métodos se contemplaron progresivamente como insuficientes y se consideró necesaria una participación integral en la vida política salvadoreña. El paso de la presidencia de ARENA de D'Aubuisson a Alfredo Cristiani (miembro de una familia cafetalera perteneciente a la oligarquía) en 1985, representó simbólicamente la transición de un partido patrocinador de escuadrones de la muerte y contrario al sistema por todos los medios, inclusive violentos, a un partido instrumento político de la oligarquía para la consecución de sus intereses y objetivos dentro del sistema y respetando las reglas del juego político establecidas por ellos mismo a través de la Constitución de 1983.²²⁰

Con la conversión de ARENA a un partido político apegado al juego electoral, el camino a la solución negociada sólo encontraba dos obstáculos. Uno, el de la política de Reagan empeñada en acabar con la guerrilla por la vía armada y; el segundo, el de sectores de la fuerza armada que optaban por el mismo camino que Reagan.

3.8 LAS ELECCIONES DE 1988-1989

Mientras gobierno y FMLN se encontraban empantanados en el proceso de paz, El Salvador se aprestó a elecciones legislativas y presidenciales en los años 1988 y 1989 respectivamente. Este proceso significó para ARENA una nueva posibilidad de hacerse del poder y dirigir los destinos de la nación así como la decisión de qué hacer con la situación de guerra civil.

Las elecciones municipales y legislativas se llevaron a cabo el 20 de marzo de 1988, en donde ARENA resultó ser el ganador de la jornada electoral, conquistando el 80% de las alcaldías disputadas y 31 de los 60 escaños de la Asamblea Legislativa con el 48.1% de los votos.²²¹

Para el proceso presidencial y con el antecedente de una aplastante victoria, ARENA se preparaba para el proceso electoral de 1989, en la que aparecía como el seguro ganador. Ante el inminente triunfo de ARENA, la nueva administración Bush se preocupó

²²⁰ *Op.Cit.*, Montobbio, p. 60.

²²¹ *Op.Cit.*, Perales, p. 21.

por la designación del candidato presidencial, y presionó para que el candidato a suceder a Duarte fuera Alfredo Cristiani, presidente de ARENA, identificado en la línea moderada, y no D'Aubuisson, afín a los intereses y métodos de los sectores más recalcitrantes de la derecha salvadoreña. La presión norteamericana dio frutos y en mayo de 1988 Cristiani fue designado candidato. La campaña presidencial de Cristiani estuvo centrada en los valores conservadores tradicionales de familia, orden y responsabilidad, pero también habló de modernizar el país, de conceder facilidades al sector privado de la economía y de conseguir la paz con el FMLN en las condiciones establecidas por los cinco presidentes centroamericanos en las cumbres del proceso de Esquipulas para la superación de los conflictos de la región.²²² Cristiani se enfrentó al candidato del PDC, Fidel Chávez Mena.

El 19 de marzo de 1989, se efectuaron las elecciones en medio de un contexto de guerra y crisis social, económica y política, en donde Alfredo Cristiani se proclamó vencedor en la primera ronda de las elecciones con el 53.8% de los votos válidos frente al aspirante democristiano.²²³

La victoria de ARENA se explica, en parte, por la incapacidad del PDC para resolver los principales problemas socio-económicos de la sociedad. Ello se convirtió en impopularidad del PDC, y dicha descredito fue capitalizado, no por el FMLN, que así lo había planeado, sino por ARENA, que le arrebató su principal fuerza de apoyo, las capas medias urbanas, convencidas por lo moderado y modernizante de su discurso. En apariencia, la sociedad le dio la oportunidad a ARENA para resolver los problemas del país y buscar un camino negociado hacia la paz.

La llegada del partido derechista a la presidencia salvadoreña preocupó a la nueva administración republicana quien, en un principio, se abocó a ejercer mayor presión por el respeto a los derechos humanos y la civilidad, ante la posibilidad de regresar a un estado de cosas anterior a 1980.

²²² Córdova Macías, Ricardo, *El Salvador: Las Negociaciones de la Paz y los Retos de la Posguerra*, El Salvador, Instituto de Estudios Latinoamericanos, 1993, p. 31.

²²³ *Ibidem*, p. 34.

3.9 EL GOBIERNO DE ARENA: ¿UNA POSIBLE SOLUCIÓN?

El 1 de junio de 1989 tomó posesión de la presidencia de El Salvador, Cristiani, convirtiéndose así en el primer presidente de ARENA. Durante su discurso de toma de posesión, el nuevo mandatario anunció su intención y voluntad política de proceder a la negociación con el FMLN para finalizar el conflicto armado por la vía política, y a la sazón declaró: “un diálogo inmediato, permanente y serio”,²²⁴ haciendo gala de una mesura y moderación antes insospechadas en un miembro de ARENA.

A los pocos días de iniciada su administración, el presidente dio indicios de que realmente deseaba entablar negociaciones de paz al reconocer al FMLN como legítimo beligerante e interlocutor necesario en la búsqueda de una solución negociada.

Sin embargo, aún existían dudas acerca de las posibilidades reales del nuevo mandatario para llegar a una solución política, pues se sospechaba de la presunta docilidad de Cristiani y de los lazos que mantenía con los elementos más reaccionarios de la oligarquía que dominaban los principales sectores económicos del país. Se temía que estos últimos influenciaran al nuevo gobierno para que continuara con su política de eliminación de la guerrilla por la vía armada y sabotearan cualquier intento del gobierno de un verdadero diálogo.

A pesar de estos temores, en septiembre de 1989, el gobierno y los rebeldes se reunieron en México y acordaron impulsar un proceso de diálogo constante, aunque sin detener las hostilidades. Así se daban los primeros pasos para una solución, las conversaciones se trasladaron posteriormente a Costa Rica. Sin embargo, Cristiani desde el primer momento del proceso de paz, tal vez presionado por la oligarquía, trató de hacer una lectura unilateral de Esquipulas II, lanzando sobre el FMLN la culpa de no aceptar las reglas del juego electoral y las democráticas. Por su parte los insurgentes acusaron al gobierno de negarse a entablar un verdadero diálogo bajo ciertas condiciones que para el

²²⁴ *Ibidem*, p. 35.

FMLN eran necesarias para avanzar en las pláticas. Así nuevamente las pláticas se encontraban atoradas.

Durante el periodo en donde el proceso se encontraba trabado, funcionarios del gobierno de Cristiani y del departamento de Estado norteamericano se dedicaron a declarar ante la prensa y la opinión pública que el FMLN se encontraba acabado y que su indisposición al diálogo tenía como fin ganar tiempo para reestructurarse y llegar al verdadero diálogo con mayor fuerza política y social.

Sin embargo, a finales de 1989, dos acontecimientos provocaron que las pláticas de paz entre ambos bandos se destrabaran y se encumbraran hacia una verdadera solución.

3.9.1 La Ofensiva de 1989

El primer hecho fue el lanzamiento por parte del FMLN de una ofensiva general el 11 de noviembre sobre varias ciudades, sobre todo en la capital en donde 1 500 guerrilleros tomaron por asalto varios barrios capitalinos y del área metropolitana. Además, se atacó en las cabeceras municipales de Santa Ana, San Miguel, Zacatecoluca y San Vicente. El objetivo de los guerrilleros era obligar al gobierno a sentarse seriamente a la mesa de negociaciones. En respuesta el gobierno concentró a 19 000 soldados en San Salvador, y varias decenas en los departamentos atacados, para repeler la agresión utilizó aviones para bombardear los puestos guerrilleros y usó artillería y blindados. Sin embargo, nuevamente ambos contrincantes se encontraron en un empate militar y el 12 de diciembre la ofensiva se detuvo sin un claro ganador.

Al mismo tiempo que la ofensiva rebelde se desarrollaba, aconteció el segundo hecho que impulsó negociaciones serias. En la madrugada del 16 de noviembre fueron asesinados, en el Centro Pastoral de la UCA de San Salvador, el jesuita Ignacio Ellacuría, rector de la misma institución, célebre teórico de la Teología de la Liberación y partidario del diálogo con el FMLN, de hecho Cristiani había mantenido comunicación con Ellacuría, sabedor de su influencia social; cinco jesuitas y dos mujeres más. La matanza de la UCA

causó gran indignación nacional e internacional que el presidente trató de calmar prometiéndole castigo a los culpables del múltiple homicidio.²²⁵

El resultado de la ofensiva guerrillera demostró a ambos bandos la imposibilidad de un triunfo militar contundente de uno u otro bando en un futuro inmediato; el convencimiento de esta situación decidió al gobierno de Cristiani por el camino de la negociación. Desde el lado del gobierno, el panorama internacional no era nada favorable como para persistir en el empeño de la guerra. Los cambios en Europa del Este, por un lado, comenzaban a incidir en la política exterior de Estados Unidos, desplazando de sus intereses los compromisos adquiridos en el marco de la Guerra Fría. Por otro lado, la muerte de los jesuitas de la UCA y sus dos colaboradoras sacudió la conciencia de la comunidad internacional, debido a la brutalidad con la que fueron ejecutados y por lo trascendental de la figura del rector Ellacuría, haciendo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) asumiera, como compromiso prioritario, el fin de la guerra civil salvadoreña por la vía de la negociación. Internamente, la economía salvadoreña estaba colapsada, a pesar de las enormes cantidades de dinero transferido por Estados Unidos a lo largo de la década, y un nuevo grupo empresarial –que deseaba insertarse en el proceso de globalización- emergía con unos ánimos e intereses distintos de los de la oligarquía tradicional. No era posible que este nuevo sector tuviera éxito mientras la guerra continuara, de tal suerte que se convirtió en un soporte de los esfuerzos negociadores del gobierno de Cristiani. Su principal preocupación era asegurarse que, en la negociación con el FMLN, sus intereses económicos quedaran suficientemente resguardados.²²⁶ Para Estados Unidos, significó el fracaso de su plan militar y, al mismo tiempo, un mensaje para cambiar su estrategia en El Salvador.

También la sociedad salvadoreña obligó a ambos contrincantes a buscar una solución política, ya que se encontraba hastiada de aproximadamente una década de guerra civil y de que los niveles de vida eran peores cada día. Así la guerra se presentó

²²⁵ *Ibidem*, p. 52.

²²⁶ *Op.Cit.*, Montobbio, p. 117.

como un obstáculo para conseguir mejoras económicas y sociales. La consigna de paz se generalizó en diversos sectores de la sociedad urbana y rural que la consideró como un requisito indispensable para conseguir un mejor nivel de vida. La guerra, vista en 1980 como instrumento que habría de solucionar el problema político, y por ende social y económico, se convirtió en el problema por resolver.

En lo tocante a los asesinatos de la UCA, que constituyeron un intento de golpear el plan negociador de Cristiani, por estar implicados en aquellos, sin lugar a dudas, efectivos del ejército, quedó en una situación muy incómoda ante la comunidad internacional, que expresó su escepticismo con la capacidad y la voluntad del gobierno de depurar responsabilidades. Al igual que con la ofensiva, los asesinatos significaron una derrota para los Estados Unidos, al “hacer evidente que la ‘profesionalización’, el haber enseñado al ejército a respetar los derechos humanos y la subordinación a la autoridad civil, era una ilusión”.²²⁷ Ilusión rota brutalmente, por la conciencia de la opinión pública norteamericana e internacional, que despertaron los asesinatos de los jesuitas. De ahí que durante todo el tiempo que duraron las negociaciones entre el FMLN y el gobierno, el primero insistiera de manera reiterada en la reforma a las fuerzas armadas y la verdadera supresión de los cuerpos represivos. A partir de este momento, la acción militar pasará a un segundo plano y a tener un carácter instrumental y auxiliar de avance en la vía política de solución del conflicto.

Además de los hechos relatados que transformaron las posiciones de la oligarquía y de los Estados Unidos en lo tocante a la solución del conflicto, también influyeron, quizá más, los cambios ideológicos en sus posiciones y percepciones.

Al estar en el gobierno el partido ARENA tenía la capacidad de convocatoria necesaria para provocar un arreglo con la vieja oligarquía, hecho que prácticamente no existió durante las administraciones de la Democracia Cristiana.

²²⁷ *Ibidem*, p. 117.

Negociar con ARENA era negociar con la oligarquía, negociar con el PDC significaba negociar con nadie, y en las condiciones de empate entre los contrincantes que se vivía desde hacía cuatro o cinco años, la negociación no sólo parecía una opción sino una obligación, pues ahora las negociaciones serían directamente con uno de los mayores obstáculos para la paz en los años anteriores.

Esta repentina transformación ideológica, de una fuerza cerrada y represiva a una relativamente moderada en unos pocos años, no se puede explicar sin la influencia o presión externa que recibió de los Estados Unidos para terminar con una guerra costosa. Además la idea de que el socialismo como sistema político, económico y social había terminado de una vez por todas y de que el comunismo había demostrado una total inviabilidad histórica. A pesar de que algunos sectores oligárquicos aún pensaban que la victoria militar era posible, pero esto sería a muy largo plazo y los costos económicos y sociales serían demasiado altos; ello fue comprendido por los norteamericanos, quienes estaban impacientes por reducir la ayuda militar, presionaron a los oligarcas para que aceptaran la negociación, además también influyó su mentalidad capitalista, entre más se prolongara la guerra más se afectaría su capital y sus negocios en El Salvador. Pero el argumento central fue la inviabilidad de los gobiernos no capitalistas y esta tesis fue contundente en la opinión de la clase dominante, que al fin aceptó la posibilidad de una solución política.²²⁸

Al igual que el avance a posiciones moderadas afectó a la oligarquía salvadoreña, también en los Estados Unidos se cambió a actitudes más moderadas con respecto a la situación salvadoreña, en lo que toca a El Salvador los hacedores de política exterior norteamericana comprendieron que:

“[...] el equilibrio militar alcanzado y la conciencia de la imposibilidad de la solución militar en un plazo deseable, decisivamente reforzada para ambas partes por los resultados de la ofensiva del FMLN en noviembre de 1989; la consolidación de ARENA y su evolución hacia posiciones moderadas, abiertas a la negociación al tiempo que al enfoque de la naturaleza del conflicto en clave de razones socioeconómicas y

²²⁸ *Op.Cit.*, Moreno Parada, pp. 161-162.

no sólo de seguridad nacional y tensión Este-Oeste[...] la evolución del pensamiento y planteamientos políticos del FMLN; y por último, la imposición en la conciencia colectiva de consenso nacional en favor de la solución negociada.”²²⁹

También en el contexto internacional y centroamericano hubo hechos que cambiaron la política exterior de la administración Bush, principalmente, fue el fin de la Guerra Fría y la caducidad de la tensión Este-Oeste como clave explicativa y condicionante de los conflictos del mundo. En el contexto centroamericano el avance, desarrollo y aplicación de Esquipulas II y la culminación, y especialmente, los resultados del proceso electoral en Nicaragua; ello unido al pragmatismo de la administración Bush, llevó a los Estados Unidos al progresivo abandono de su visión de Guerra Fría, para aceptar la vía política y de la negociación para la solución de la crisis. Además, del apoyo a la paz de los estadounidenses, también ayudó el impulso dado por las Naciones Unidas y el del Grupo de Amigos (México, España, Venezuela y Colombia) al que posteriormente se unió Estados Unidos.

Uno de los primeros pasos que dio la Administración Bush en el sentido de apoyo a la negociación fue dado el 29 de marzo de 1989, conocido como el Acuerdo Bipartito, con el que la recién inaugurada gestión republicana sentó las bases de una política consensuada frente a la crisis centroamericana, negociado por Baker y Wright (líder demócrata del Congreso), el acuerdo supuso la aceptación definitiva por la Administración Bush del apoyo que los demócratas venían otorgando ya al proceso de Esquipulas II.²³⁰

Todos estos factores influyeron en las decisiones de ayuda y apoyo estadounidense con respecto a la crisis salvadoreña, intentando seguir siendo una parte importante en el área centroamericana e influir en el proceso de paz.

Con los cambios ideológicos sucedidos a lo largo de 1989 y principios de 1990 dentro de la oligarquía y del gobierno norteamericano en enero de 1990 se dio el primer paso

²²⁹ *Op.Cit.*, Montobbio, p. 63.

²³⁰ *Ibidem*, pp. 93-94.

serio y firme en la búsqueda de la paz y prosperidad para El Salvador. A pesar del inicio del proceso, éste no estará exento de obstáculos durante su evolución.

3.10 LOS DIÁLOGOS DE PAZ: UNA VERDADERA SOLUCIÓN

Con ambos bandos convencidos de que la vía política era la más aceptable, tanto dentro como fuera de El Salvador, se comenzaron los trabajos para iniciar las pláticas de paz, a pesar de la oposición de algunos sectores de las fuerzas armadas.

Además de los factores arriba mencionados que trasformaron las percepciones de la oligarquía, de los Estados Unidos y del FMLN en cuanto a la solución del conflicto, también influyeron los cambios ideológicos.

Con todas las fuerzas involucradas en el conflicto de acuerdo en que la solución política era el camino correcto para traer la paz y la prosperidad a El Salvador, en enero de 1990 el gobierno salvadoreño y el FMLN solicitaron la mediación del Secretario General de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, quien aceptó la tarea. Por su parte, Estados Unidos se mantuvo alejado del inicio del proceso de paz, algo nuevo si se toma en cuenta su actuación a lo largo del conflicto durante los años ochenta.

El 4 de abril de 1990 se celebró una reunión de diálogo en Ginebra, donde se firmó un acuerdo que fijó el conjunto de normas a seguir en el proceso de negociación y se estableció la voluntad de ambas partes, gobierno y FMLN, de alcanzar una solución negociada y política a la guerra civil. Se acordaron los siguientes objetivos:

1. Terminar el conflicto por la vía política;
2. Impulsar la democratización del país;
3. Garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos y
4. Reunificar a la sociedad salvadoreña.²³¹

²³¹ Perales, Losu, *Los Acuerdos de Paz (1992)*, México, Ocean Sur, 2009, pp. 1-2.

El 21 de mayo de 1990, en una nueva reunión en Caracas, se estableció la agenda general de negociaciones y los temas que serían sometidos a discusión. Se crearon dos delegaciones negociadoras; una de cada bando.

El 26 de julio de 1990 se signó el Acuerdo de San José, en Costa Rica, el cual estableció un compromiso para respetar los derechos humanos por parte de las fuerzas beligerantes. Ello dio origen a la resolución 693 (1991) del Consejo de Seguridad de la ONU, para formar una misión observadora encaminada a resolver el conflicto. Dicha comisión se integró por civiles y militares, quienes velarían, cada uno en su campo, por el correcto funcionamiento del proceso de paz.

El Acuerdo de San José puso al descubierto la primera crisis en la negociación. El punto más crítico fue el tema de la distribución de tierras en un país pequeño y sobrepoblado. La crisis vino de la oposición de los grandes terratenientes, que con el reordenamiento de la tierra consideraron que eran los perjudicados. Finalmente, las negociaciones entre las partes fueron resueltas satisfactoriamente, lo que permitió que el proceso continuara.

El 27 de abril de 1991 se firmó el Acuerdo de Ciudad de México, donde se dieron por finalizadas las negociaciones en lo que respecta a la tenencia de la tierra y se incluyeron reformas constitucionales de orden judicial, militar, electoral y de derechos humanos. En una jornada legislativa, en el último día de sesiones (30 de abril), la Asamblea Legislativa corroboró las reformas constitucionales, salvo las referentes a las fuerzas armadas, lo que provocó una nueva crisis.²³²

El 26 de julio del mismo año se estableció ONUSAL para la verificación del respeto a los derechos humanos. Desde el 1 de enero de 1991 se había establecido una oficina que preparó las condiciones mínimas indispensables para el funcionamiento de la misión dotada de personal capacitado en diversos campos.

²³² *Ibidem*, p. 3.

Pese a la llegada de la misión de la ONU, los encuentros de negociación entre el gobierno y el FMLN eran estériles en lo referente a las fuerzas armadas. Este problema estuvo enmarcado dentro de una serie de ofensivas guerrilleras para demostrar su paridad estratégica con el ejército y para presionar por la continuación de las negociaciones. Por su parte, las fuerzas armadas realizaron algunos desmanes en áreas campesinas, generando mayor presión a la situación.²³³ El FMLN exigía, para dejar las armas, que las fuerzas armadas cumplieran sus compromisos de reducción de efectivos y cese del acoso militar hacia las fuerzas del frente; además, se buscaban plenas garantías de reincorporación de los combatientes guerrilleros a la sociedad civil, en el marco de la legalidad y la seguridad particular.²³⁴

Finalmente, tuvo que darse la intervención directa del secretario general de la ONU, quien logró reunir a las partes en Nueva York el 25 de septiembre de 1991. En dicha cumbre se acordaron las garantías mínimas de seguridad para un cese al fuego, las cuales serían verificadas por la recién creada Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz. Además, se obtuvieron los acuerdos necesarios para la modificación constitucional del ejército, depuración y reducción de las fuerzas armadas.

Sin embargo, el camino hacia la paz no estuvo exento de obstáculos pues a principios de diciembre se dio un intento de golpe de estado encaminado a impedir negociación alguna con el FMLN, esta tentativa fue un fracaso y debilitó al sector del ejército más opuesto al diálogo, y se fortaleció aún más el camino de la solución negociada.

Además, algunos sectores políticos, empresariales y varios periodistas criticaron el acuerdo del 25 de septiembre, por considerarlo forzado. Surgió una campaña mediática de intimidación a las comisiones verificadoras, a lo cual se puso fin con la firma del Acta de Nueva York, donde ambas partes manifestaron definitivamente el alcance de los Acuerdos

²³³ *Op.Cit.*, Córdova Macías, p. 143.

²³⁴ *Op.Cit.*, Perales, pp. 3-4.

de Paz. Aparte, recogía diversas enmiendas constitucionales y cambios en las formas de la tenencia de la tierra, la reducción de la mitad de los efectivos y la revisión de la doctrina del ejército, la disolución de los cuerpos armados vinculados a la represión, la creación de un cuerpo de Policía Nacional Civil y de organismos para velar por los derechos humanos, y la concentración de la guerrilla en zonas especiales para su desarme y desmovilización bajo supervisión de ONUSAL.²³⁵

Para el 31 de diciembre de 1991, ambas partes signaron una Acta con acuerdos definitivos, en donde se fijaba la fecha para la firma de la paz, tras lo cual sólo quedaba establecer el calendario para su ejecución.

El 10 de enero el nuevo secretario general de la ONU, Brouttos Brouttos-Ghali, pidió al Consejo de Seguridad la ampliación de las facultades y objetivos de la ONUSAL, para que pudiese continuar apoyando el proceso de paz y sus consecuencias; dicha modificación fue autorizada mediante la resolución 729 del 14 de enero de 1992.²³⁶

Por fin, el 16 de enero de 1992, Cristiani, arropado por los presidentes de México, España, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panamá y Venezuela, así como de las delegaciones oficiales de negociación e invitados, tomó parte en el Castillo de Chapultepec, México DF, en la rúbrica solemne de los Acuerdos de Paz definitivos, por parte del FMLN fueron signados por su líder máximo, Schafik Jorge Hándal Hándal, a la razón secretario general del Partido Comunista Salvadoreño (PCS). Los Acuerdos entrarían en vigor el 1 de febrero. Para el cabal cumplimiento de los acuerdos se puso en marcha una misión especial de la ONU, la cual dio por finalizado su trabajo tres años después (1995).

El primer capítulo del Acuerdo de Paz se dedicaba al ejército, en lo relacionado con la reducción y depuración de sus filas. El segundo, establecía la creación de una Policía Nacional Civil, así como su doctrina, estructura y conformación. Otros apartados

²³⁵ *Ibidem*, p. 4.

²³⁶ *Ibidem*, p. 4.

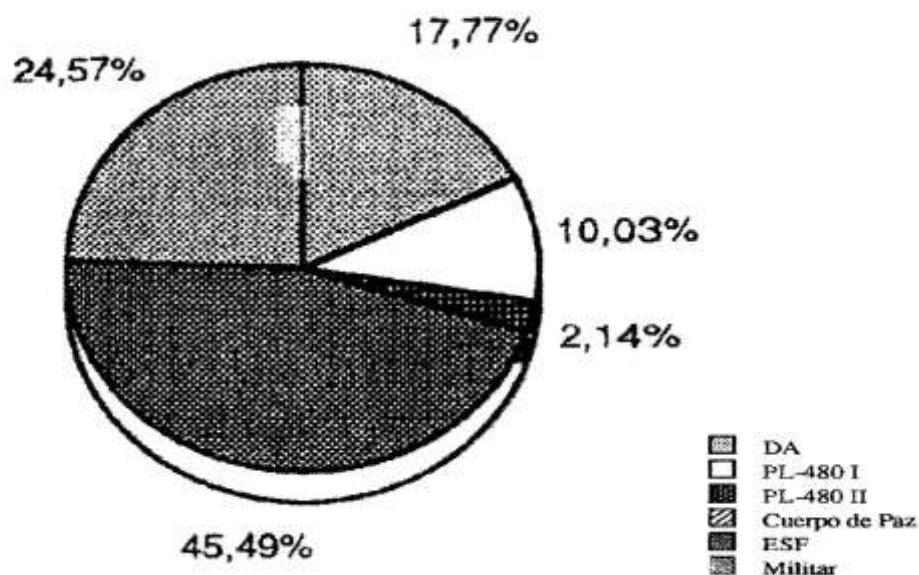
abordaban temas económicos y sociales, como la Reforma Agraria y el Plan de Reconstrucción Nacional. El sexto, definía las garantías para el FMLN se transformara en partido político y para que participara en todos los aspectos de la vida del país. El último apartado establecía los plazos precisos de ejecución para todo lo negociado.²³⁷

Atrás quedaban 12 años de guerra civil, cerca de 75 000 muertos, decenas de miles de personas heridas, algunas de manera permanente, aproximadamente 500 000 exiliados y refugiados. La ayuda económica y militar otorgada por Estados Unidos logró mantener al gobierno en turno y establecer un sistema pero no consiguió derrotar al FMLN por la vía militar, (Ver cuadros 5 y 6) ésta ascendió a más de 4.000 millones de dólares entre 1980 y 1992. En general, quedó un país exhausto, física y psicológicamente.

Cuadro 5

Ayuda por tipos 1980-1990.

El Salvador



Fuente: Segovia, Alexander, "Límites y Dilemas de la Política Económica en un país en guerra: el caso de El Salvador", Ponencia presentada en el Encuentro de Opciones de Política Económica, Universidad Nacional de Costa Rica, mayo de 1988, p.36

²³⁷ Prieto, Alberto, *Las Guerrillas Contemporáneas en América Latina*, Colombia, Ocean Sur, 2007, pp. 211-212.

Cuadro 6

El Salvador. La ayuda norteamericana en cifras, 1980-1994
(millones de dólares)

Años	DA	PL-480 tit. I	PL-480 tit. II	Cuerpo de Paz	ESF	Militar	TOTAL
1980	43,2	3	3,3	0,6	9,1	5,9	63,7
1981	33,3	17,2	9,1	0	44,9	35,5	149,1
1982	39,6	27,3	7,7	0	115	81,5	264,2
1983	58,8	39	7,7	0	140	81,1	326,7
1984	41,2	49	5,5	0	120,2	196,6	412,5
1985	91,1	49	8,8	0	285	136,3	570,2
1986	84	44	10,4	0	177	121,7	437,1
1987	82,4	30,1	2,2	0	281,5	111,5	507,8
1988	70	41,5	12,9	0	195	81,5	401,6
1989	62,3	40	8,1	0	190	81,4	382,7
1990	58,8	35	4,5	0	144,4	86	375,4
Total	664,7	375,1	80,2	0,6	1.702,1	919	3.891
1991	55,9	40,1 (a)	-	0	126,3	67	289,4
1992	58,2	35,5 (a)	-	0	125,4	22,6	303,9 (b)
1993	45,6	7,1 (a)	-	0,3	95,7	11,3	194,9 (c)
1994 (d)	31,6	0(a)	-	0,7	44,6	0,4	77,3

(a) Incluye Título I y Título II

(b) El total incluye 62 millones de dólares del "Fondo de Desmovilización y Transición"

(c) El total incluye 35 millones de dólares del "Fondo de Desmovilización y Transición"

(d) Solicitud de la administración al Congreso

Fuente: Sanahuja, José Antonio, "Los EE.UU. en Centroamérica, 1980-1990 ¿Ayuda económica o seguridad nacional?", *Cuaderno de Trabajo de HEGOA*, núm. 10, País Vasco, Diciembre, 1992, p.31.

CONCLUSIÓN

Contestar las preguntas realizadas en la introducción ¿Quién ganó la guerra civil en El Salvador? Y ¿Qué programa político se impuso finalmente para El Salvador? Requiere precisar que, en primer lugar, no hubo un ganador. El FMLN no pudo acceder al poder por medio de las armas y establecer el socialismo en El Salvador, como se vio al reseñar los principios anunciados en la Plataforma Programática de un Gobierno Revolucionario; la oligarquía no pudo regresar al poder por medio del sabotaje y retornar al país al estado de la cosas anterior a 1979; el PDC no se consolidó como una opción política viable, pero sí estableció un sistema democrático moderado y reformista para El Salvador apoyado por Estados Unidos. En general, ningún adversario pudo imponer sus principios a los otros dos actores y nadie ganó. La solución al conflicto armado pasó por la moderación de posturas y objetivos, principalmente, del FMLN y de ARENA, para que éstos se enmarcaran dentro del sistema establecido por Estados Unidos. Su moderación aseguró su existencia política y permitió que obtuviera la capacidad de influir en el destino salvadoreño. A partir de 1992 los conflictos se dirimirían dentro de un sistema democrático y gobernaría quien obtuviera mayoría en las urnas.

En particular, cada uno de los adversarios cambió debido, principalmente, a la actuación norteamericana durante la guerra civil. Al FMLN los Estados Unidos lo contuvo, pero nunca lo pudo derrotar, indicativo de que gozaba de apoyo y simpatía tanto dentro como fuera de El Salvador; pero sí evitó, que tomara el poder debido a la ayuda y entrenamiento militar que otorgó al gobierno del PDC principalmente, convirtiéndolo en un ejército capaz de enfrentar la guerra de guerrillas. Frente a esta situación, el FMLN tuvo que mutar su estrategia de lucha, inicialmente buscaba el derrocamiento del gobierno “burgués”, la expulsión de “los invasores yanquis” y la destrucción del sistema político, económico y social que “generaba pobreza y desigualdad entre la gran mayoría del pueblo” en su lugar buscaba establecer un sistema totalmente nuevo: el socialismo. Al

no derrotar al ejército gubernamental y tomar el poder, modificó su estrategia, buscó la negociación para acabar con el estado de guerra, aprovechando la fuerza con la que contaba y con el reconocimiento internacional obtenido, como sucedió con la declaración franco-mexicana de 1981, para poder formar parte de un nuevo gobierno surgido de la negociación y con la posibilidad de realizar reformas de gran envergadura, principalmente la agraria. Sin embargo, la negociación no se concretó debido a la oposición estadounidense que aún pensaba que derrotar militarmente al FMLN era posible. Entonces, el FMLN buscó presionar al gobierno, a través de un nuevo plan, empleó la estrategia del sabotaje a la infraestructura con el fin de llevar al gobierno a una situación límite en donde se vería obligado a negociar. También siguió con sus acciones militares con el mismo fin que se buscaba con el ataque a la infraestructura, pero además, de manera secundaria, buscó adquirir más fuerza y prestigio con el objetivo de tomar el poder. Esta tendencia continuó hasta 1989. La estrategia de destrucción de la infraestructura no se pudo cumplir debido a que la ayuda económica estadounidense evitó que el Estado salvadoreño entrara en una grave crisis económica pero si absorbió gran cantidad del presupuesto gubernamental evitando la recuperación económica de El Salvador.

La ayuda norteamericana contuvo las estrategias del FMLN destinadas a la toma del poder y las dirigidas a obligar una negociación durante los primeros años del conflicto, mas su ayuda militar no pudo derrotarlo totalmente. Tampoco evitó que adquiriera la fuerza que pudiera convertirlo en representante de algunos sectores mayoritarios de la población. Esta representatividad obligó al gobierno a que lo tomara en cuenta como un actor indispensable para la solución del conflicto.

1989 fue un año crucial, el objetivo principal de la ofensiva de noviembre no se dio, aunque sí se consiguió uno secundario: el convencimiento del gobierno de ARENA y del FMLN de la imposibilidad de un triunfo militar a corto plazo; esto obligó a ambos bandos a iniciar un proceso de paz serio. Sumado al convencimiento, estaba el clamor de la sociedad, tanto de los sectores populares y medios e incluso de algunos de la oligarquía, por el fin de la guerra, puesto que evitaba el crecimiento de los niveles de vida de la

población y afectaba sus negocios y capitales. También los hechos internacionales del mismo año influyeron, así como el cambio de los intereses dentro de la política norteamericana.

La conjunción de estos factores provocó que el FMLN cambiara su posición inicial e ingresara al sistema establecido por Estados Unidos, también aprovechó el capital político adquirido durante los doce años de guerra para consolidarse como una fuerza representativa, y ésta la canalizó al momento de las negociaciones para la obtención de reformas de beneficio social y para lograr el cese de la represión, motivos por los que muchos salvadoreños habían tomado las armas.

En lo respectivo a ARENA y a la oligarquía, Estados Unidos las transformó; la oligarquía fue persuadida para que se moderara y entrara al juego electoral que Washington instauró.

Un hecho que influyó en el cambio oligárquico fue el haber podido intervenir en la elaboración de la Constitución de 1983, pues en ella pudo plasmar su ideología. Si bien hubo reformas, éstas no fueron totalmente contrarias a sus intereses y sus capitales. Al participar en la elaboración del texto constitucional logró establecer candados que impidieran el cambio del sistema político, económico y social del país, blindándose del comunismo. También se moderó porque ya no contaba con el apoyo norteamericano, tal como había sucedido anteriormente durante los últimos cincuenta años cuando los estadounidenses no se fijaban demasiado en las formas de los gobernantes centroamericanos mientras mantuvieran el orden y la estabilidad de sus naciones. Ahora Washington apoyaba a los gobiernos moderados, capaces de hacer reformas, elecciones y respetar los derechos humanos, este respaldo era solamente una estrategia para evitar la polarización de la sociedad y la revolución, tal como lo había intentado hacer John F. Kennedy con la Alianza para el Progreso al apoyar a gobiernos moderados.

Para poder ingresar al juego electoral la oligarquía y sus aliados tuvieron que rechazar la represión como medio de control de la sociedad y ser más tolerantes. Cuando la idea de cambio dentro de ARENA se fue consolidando, ésta desplazó de sus liderazgos a

personajes identificados con el antirreformismo, la represión y conocidos como patrocinadores de los escuadrones de la muerte, tales como el mayor Roberto D'Abuisson. Estos nuevos líderes de ARENA eran personajes educados en Estados Unidos y con ideas democráticas más arraigadas y más moderadas, al mismo tiempo extirparon de su imaginario la equivalencia de "reformas igual a comunismo"; idea que había impedido la promulgación de las mismas. Esta nueva generación oligárquica se inclinó por la paz ya que consideraba que la guerra afectaba sus intereses, sus negocios y sus capitales en el país. Esto contribuyó al cambio de postura oligárquica y a la posterior solución del conflicto armado.

También se transformó porque durante los gobiernos de las Juntas y del PDC los norteamericanos trabajaron en la ideología del ejército, para cambiarlo de una institución protectora y aliada de los oligarcas y del *statu quo* anterior a 1979 a una institución defensora de la democracia, las instituciones, respetuosa de los derechos humanos y al margen de los cargos gubernamentales. Este hecho le quitó un aliado histórico a la oligarquía, aquel que lo ayudó desde 1932 a mantener el estado de las cosas. Dicho sea de paso, la separación o ruptura entre la oligarquía y los militares no ocasionó el cese inmediato de la represión, y como ejemplo tenemos los asesinatos de los jesuitas de la UCA en 1989.

Al no conseguir inicialmente su principal objetivo de derrocar al gobierno por medio de la represión y el sabotaje, los oligarcas se percataron de la imposibilidad de destituirlo, pues éste contaba con el apoyo irrestricto de los Estados Unidos. ARENA comprendió que oponerse al gobierno era enfrentarse a Washington, ya que tampoco contaba con el apoyo total de los militares. Por ello tuvo que virar su estrategia para la consecución de sus objetivos; entrar al juego electoral implementado por el gobierno y apoyado por Estados Unidos. Las elecciones se convirtieron en la única posibilidad de poder implementar su programa político dentro de un marco de legitimidad avalado por Washington, al mismo tiempo podrían volver a contar con el apoyo norteamericano. Su nuevo objetivo fue ganar elecciones y ya no tanto sabotear reformas y reprimir.

Una vez en el gobierno y después de la ofensiva de 1989, los oligarcas vieron alejada la posibilidad de derrotar militarmente al FMLN, fue en ese momento cuando la solución política se impuso al nuevo gobierno. Asimismo, los hechos internacionales acontecidos en el mismo año como la caída del mundo comunista y otros, demostraron definitivamente a la oligarquía de que el comunismo o socialismo como doctrina política, económica y social era inviable, por lo menos en ese momento, lo que los impulsó aún más a buscar una solución negociada; internamente la sociedad también promovía dicha noción de paz.

El gobierno del PDC fue, definitivamente, sustentado casi totalmente por Estados Unidos con el fin de que no cayera bajo la izquierda representada por el FMLN o por la derecha representada por ARENA y la oligarquía, pues ambas opciones no eran convenientes para los intereses norteamericanos. La primera podría significar la pérdida de una zona geoestratégica, como lo es Centroamérica, a manos del comunismo internacional, ya que la caída del gobierno y la instauración de uno afín a los comunistas se vendría a sumar al de Nicaragua, y se correría el riesgo potencial de que toda el área cayera en manos de la URSS en detrimento de los Estados Unidos, debilitándolo dentro del marco de la Guerra Fría. La segunda significaría una polarización aún mayor de la sociedad y la posibilidad de que se repitiera la experiencia de 1979 con el triunfo de la revolución nicaragüense, lo que posiblemente derivaría en el mismo escenario que se quería evitar con el triunfo del FMLN.

Para evitar esta situación, Estados Unidos otorgó ayuda casi ilimitada al gobierno demócrata cristiano, al mismo tiempo que buscó crear un nuevo sistema político, social y económico para El Salvador basado en la concepción de la democracia de tipo occidental. La ayuda norteamericana se extendió por cerca de diez años y llegó hasta el punto en el cual el gobierno únicamente dependía de la ayuda económica norteamericana para mantenerse, llegando el momento en que se le brindó un millón de dólares diarios; sin embargo, esta manutención no se tradujo en fuerza política, pues las fuerzas moderadas surgidas del golpe de estado de 1979, no se consolidaron como una opción política para el país; para demostrarlo basta ver los resultados de las elecciones posteriores a la

finalización de la guerra en donde aparece como tercera o cuarta fuerza política, bastante alejada del FMLN y de ARENA. Los norteamericanos, más que ayudar a la consolidación del PDC como una fuerza moderada capaz de mantenerse en el poder para evitar futuras polarizaciones, usaron al partido como un instrumento para poder establecer un sistema democrático estilo occidental, en cual los futuros contrincantes, en este caso el FMLN y ARENA, se desenvolverían dentro de sus alcances y límites para la formulación de reformas.

Más importante aún que la manutención del gobierno, los norteamericanos con su ayuda y asesoría fortalecieron un sistema basado en la teoría de la democracia, con derechos básicos para la sociedad dentro de un sistema económico capitalista, por lo que estas circunstancias no consolidaron al gobierno del PDC, sino más bien aseguraron el sistema.

La ayuda económica otorgada por Estados Unidos a la administración del PDC fue, básicamente, para mantener en funcionamiento los diversos órganos de gobierno, poder poner en marcha las elecciones programadas a lo largo del gobierno democristiano y para echar andar la recuperación económica; asimismo, fue utilizada a partir de 1984 para reconstruir la infraestructura destruida por la táctica de sabotaje empleada por los revolucionarios. La asistencia de tipo militar logró detener mas no derrotar al FMLN y contribuyó, en gran medida, a transformar la posición inicial del Frente.

La constante de la política norteamericana, sea cual fuere el tipo administración hacia Latinoamérica durante la Guerra Fría, fue evitar a toda costa la pérdida de aliados en el continente, ya que la consideraban su “zona de influencia”, en función de este principio se formularon diferentes políticas destinadas a impedir revoluciones y uno de los pilares para que esto se cumpliera era la ayuda económica y militar con el fin de fortalecer a los gobiernos latinoamericanos y dotarlos de legitimidad ante sus sociedades o, en caso de que sufrieran insurrecciones populares, impedir su caída en manos del comunismo; esto último fue lo que paso en El Salvador, y la ayuda fue factor determinante en el desarrollo y desenlace de los sucesos narrados.

En definitiva, toda la ayuda prestada por los Estados Unidos sirvió para contener al FMLN y para mantener al gobierno del PDC, sobre todo, ayudó a consolidar el sistema democrático que impulsaron los norteamericanos a lo largo de la década de los ochenta, y en el que después se desarrollieron los dos nuevos actores, ARENA y el FMLN.

Se considera que Estados Unidos no fue el completo vencedor, ya que también tuvo que cambiar su posición inicial, en parte, ante la incapacidad de derrotar al FMLN por la vía armada y porque, sobre todo, al caer el comunismo como sistema político-social y salir vencedor de la Guerra fría sus prioridades en política exterior cambiaron. Además, el sistema que había impulsado durante el gobierno del PDC se estaba consolidando, lo que aseguraba un gobierno democrático y capitalista, así que cualquier negociación sería bajo los términos del sistema impuesto. Así que, más que un interés de tipo económico, las razones de la ayuda norteamericana se basaron en unas de tipo político y geopolítico, más concretamente dentro del marco de la Guerra Fría, en donde “perder” un aliado, por más insignificante que fuera, implicaría perder un país o un área geoestratégica vital para la seguridad ante una potencial Tercera Guerra Mundial; una vez desaparecido el fantasma de la guerra y con los Estados Unidos como los vencedores, el camino a la paz se allanó en El Salvador.

Bibliografía

1. Aguilera Peralta, Gabriel, *Centroamérica: de Reagan a Bush*, San José, Costa Rica, FLACSO, 1991, pp. 298.
2. Baloyra, Enrique, *El Salvador en Transición*, Trad. Margara de Siman, 3era. Ed., El Salvador, Universidad Centroamericana (José Simeón Cañas), 1987, Colección Debate, Vol. 3, pp. 270.
3. Bataillon, Gilles, *Génesis de las Guerra Intestinas en América Central (1960-1983)*, Trad. Jorge Alaniz, México, Fondo de Cultura Económico, 2008, pp. 373.
4. Bielous, Silvia, *El Salvador*, México, D.F., Alianza, 1988, pp. 233.
5. Buckley, Tom, *Vecinos Violentos*, Trad. Angelika Sherp, México, Edivisión; Editorial OMGSA; Diana, 1986, pp. 407.
6. Cabarrús, Carlos Rafael, *Génesis de una Revolución: Análisis del Surgimiento y Desarrollo de la Organización Campesina en El Salvador*, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social; Ediciones de la Casa Chata, núm. 16, 1983, pp. 411.
7. Comité de Santa Fe, *Los Documentos de Santa Fe I y II*, Trad. y Edición Gregorio Selser, México, D.F., Universidad Obrera de México, 1990, pp. 204.
8. Castro Moran, Mariano, *Función Política del Ejército Salvadoreño en el presente Siglo*, 2da. Ed., San Salvador, El Salvador, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, 1987, pp. 455.
9. Córdova Macías, Ricardo, *El Salvador: Las Negociaciones de la Paz y los Retos de la Posguerra*, El Salvador, Instituto de Estudios Latinoamericanos, 1993, pp. 165.
10. Echeverría Zuno, Álvaro, *El Salvador: la Ruta de la Intervención*, México, Presencia Latinoamericana, 1986, pp. 287.
11. *El Volcán en Guerra: El Salvador 1979-1987*, Introducción y Compilación Losu Perales, Madrid, España, Revolución, 1989, pp. 203.
12. *El Salvador: Proceso Político y Guerra (1979-1986)*, San Salvador, El Salvador, Centro de Investigación y Acción, 1987, s/a, Cuadernos de Divulgación, núm. 4, pp. 73.
13. *El Salvador en la hora de la Revolución Latinoamericana*, México, Nuestro Tiempo, 1980, s/a, Colección Al Día, pp. 178.
14. Gilly, Adolfo, *Guerra y Política en El Salvador*, México, Nueva Imagen, 1981, pp. 196.
15. Gordon Rapoport, Sara, *Crisis Política y Guerra en El Salvador*, México, Siglo XXI Editores; Instituto de Investigaciones Sociales UNAM, 1989, pp. 347.
16. Jiménez, Eddy, *La Guerra no fue de Fútbol*, La Habana, Cuba, Casa de las Antillas, 1974, Colección Premio, pp. 164.

17. LaFeber, Walter, *Revoluciones Inevitables: La Política de Estados Unidos en Centroamérica*, San Salvador, El Salvador, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, 1989, Colección Estructuras y Procesos, Vol. 17, pp. 436.
18. Lungo Ucles, Mario, *La Lucha de las Masas en El Salvador*, San Salvador, El Salvador, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, 1987, pp. 127.
19. Lungo Rodríguez, Irene, "Castillos de ARENA. Hegemonía y proyecto de derecha en El Salvador 1989-2004", Tesis de maestría en ciencias sociales, FLACSO México, México, 2008, pp.161.
20. Lungo Ucles, Mario, *El Salvador en los años ochenta: Contrainsurgencia y Revolución*, La Habana, Cuba, Casa de las Américas, 1991, pp. 222.
21. Medina Núñez, Ignacio, *El Salvador: entre la Guerra y la Esperanza*, México, Universidad de Guadalajara, Departamento de Investigación Científica y Superación Académica, 1990, pp. 191.
22. Mena Sandoval, Francisco, *Del Ejército Nacional al Ejército Guerrillero*, El Salvador, Arcoíris, 1990, pp. 368.
23. Menéndez Rodríguez, Mario, *El Salvador: el Pueblo contra la Oligarquía*, Culiacán, Universidad Autónoma de Sinaloa, 1981, Colección Nuestro Continente, núm. 7, pp. 205.
24. Menéndez Rodríguez, Mario, *El Salvador: el por qué de esta guerra*, Bogotá, Colombia, Oveja Negra, 1980, pp. 102.
25. Menjívar Ochoa, Rafael, *Formación y Lucha del Proletariado Industrial Salvadoreño*, San Salvador, El Salvador, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, 1979, Colección Estructuras y Procesos, núm. 6, pp. 126.
26. Menjívar Ochoa, Rafael, *Tiempos de Locura: El Salvador 1979-1981*, 2da. Ed., San Salvador, El Salvador, FLACSO, pp. 306.
27. Menjívar Ochoa, Rafael, *El Salvador: el Eslabón más Pequeño*, 2da. Ed., Costa Rica, EDUCA, 1981, pp. 237.
28. Montobbio, Manuel, *La Metamorfosis de Pulgarcito: Transición Política y Proceso de Paz en El Salvador*, Prólogo Álvaro de Soto, Barcelona, España, Icaria, 1999, pp. 383.
29. Moreno Parada, Francisco, *El Salvador: la Sociedad contra el Estado*, Guadalajara, México, Universidad de Guadalajara, 1994, Estudios Latinoamericanos, núm. 6, pp. 240.
30. Perales, Losu, *Por Qué la Guerra en El Salvador (1970-1980)*, México, Ocean Sur, 2009, pp. 33.
31. Perales, Losu, *Los Años de Plomo en El Salvador (1981-1992)*, México, Ocean Sur, 2009, pp. 33.
32. Perales, Losu, *Los Acuerdos de Paz (1992)*, México, Ocean Sur, 2009, pp. 30.
33. Pérez Brignoli, Héctor, *Breve Historia de Centro América*, 2da. Ed., México, Alianza, 1989, pp. 205.
34. Prieto, Alberto, *Las Guerrillas Contemporáneas en América Latina*, Colombia, Ocean Sur, 2007, pp. 315.

35. Rouquié, Alain, *Guerras y Paz en América Central*, Trad. Daniel Zadunaisky, México Fondo de Cultura Económica, 1994, Sección de Obras de política y Derecho, pp. 358.
36. Rouquié, Alain (coordinador), *Las Fuerzas Políticas en América Central*, Trad. Daniel Zadunaisky, México, Fondo de Cultura Económica, 1994, Sección de Obras de Política y Derecho, pp. 276.
37. Selser, Gregorio, *El Informe Kissinger contra Centroamérica*, Trad.; Introducción; Notas Críticas; Comentarios; Epílogo Gregorio Selser, México, Sociedad Cooperativa Publicaciones Mexicanas, 1984, pp. 319.
38. Suárez Salazar, Luis, *Madre América: Un Siglo de Violencia y Dolor, 1898-1998*, La Habana, Cuba, Ciencias Sociales, 2003, pp. 536.
39. Suárez, Carlos, *Esto Paso en El Salvador*, México, Extemporáneos, 1983, Documentos Extemporáneos, núm. 5, pp. 64.
40. Tirado, Manlio, *La Crisis Política en El Salvador: Reportaje Documental y Testimonial*, México, Quinto Sol, 1980, pp. 107.
41. Zamudio Gonzáles, Laura, *Pacíficos vs Oportunistas: la difícil implementación de un Acuerdo de Paz: el caso de El Salvador (1992-1994)*, México, Universidad Iberoamericana; Plaza y Valdés, 2007, pp. 1996.

Artículos de Revistas

1. Barrachina Lisón, Carlos, "La Asistencia Militar de Estados Unidos en América Latina: Permanencias, Discontinuidades e Intereses", *Revista Fuerzas Armadas y Sociedad*, año 20, núm. 1, Chile, enero-junio de 2006, 109-140.
2. Browning, David, "Agrarian Reform in El Salvador", *Journal of Latin American Studies*, Vol. 15, núm. 2, noviembre de 1983, pp. 399-426.
3. Feinberg, Richard E., "Centroamérica: el punto de vista de Moscú", *Cuadernos Semestrales CIDE: Estados Unidos, Perspectiva Latinoamericana*, núm. 12, México, D.F., 2do. semestre, 1982.
4. Gaztambide, Antonio, "La Política sin nombre: ¿Una Misma Política hacia América Latina y el Caribe desde 1950?", Preparado para presentar en el Congreso 2010 de la *Latin American Studies Association (LASA)*, Toronto, Canadá, 6-9 de octubre de 2010.
5. Gonzáles, Luis Armando, "El FMLN salvadoreño: de la guerrilla al gobierno", *Revista Nueva Sociedad*, núm. 234, Buenos Aires, Argentina, julio-agosto, 2011, pp.143-158.
6. González, Mary Lisbeth, "La Asistencia y la Política Exterior de Estados Unidos hacia Centroamérica", *Revista Ciencias Sociales*, núm. 42, Costa Rica, 1989, pp. 99-110.
7. Goodfellow, William, "La Ayuda de EUA a El Salvador ¿Hacia dónde va el dinero?", *International Policy Report*, Washington, mayo, 1984, pp. 208-216.

8. Grabendorff, Wolf, "La crisis centroamericana ¿Europa versus Estados Unidos?", *Cuadernos Semestrales CIDE: Estados Unidos, Perspectiva Latinoamericana*, núm. 12, México, D.F., 2do. semestre, 1982.
9. Kirkpatrick, Jeane, "Dictaduras y Dualidad de Criterios", *Revista Estudios Públicos*, año II, núm. 4-5, Santiago de Chile, 1981, pp. 187-126.
10. Kirkpatrick, Jeane, "Seguridad Norteamericana y América Latina", *Revista Estudios Públicos*, año II, núm. 4-5, Santiago de Chile, pp. 156-185.
11. Leiken, Robert S., "Vientos del Este en América Latina", *Cuadernos Semestrales CIDE: Estados Unidos, Perspectiva Latinoamericana*, núm. 12, México, D.F., 2do. semestre, 1982.
12. Litaurin, P. G., "La amenaza norteamericana hacia los pueblos de Centroamérica", *Cuadernos Semestrales CIDE: Estados Unidos, Perspectiva Latinoamericana*, núm. 12, México, D.F., 2do. semestre, 1982.
13. Maira, Luis, "El pensamiento geopolítico norteamericano frente al de América Latina y el Caribe: un choque de visiones antagónicas", *Cuadernos Semestrales CIDE: Estados Unidos, Perspectiva Latinoamericana*, núm. 17, México, D.F., 1er. semestre, 1985.
14. Muñoz, Herald, "La política latinoamericana de la administración Reagan: una interpretación crítica", *Cuadernos Semestrales CIDE: Estados Unidos, Perspectiva Latinoamericana*, núm. 17, México, D.F., 1er. semestre, 1985.
15. Oqueli, Héctor, "El Salvador: Intervención o Negociación", *Revista Nueva Sociedad*, núm. 73, Buenos Aires, Argentina, julio-agosto de 1984, pp. 11-15.
16. Sanahuja, José Antonio, "Los EE.UU. en Centroamérica, 1980-1990 ¿Ayuda económica o seguridad nacional?", *Cuaderno de Trabajo de HEGOA*, núm. 10, País Vasco, Diciembre, 1992, pp. 1-66.
17. Segovia, Alexander, "Limites y Dilemas de la Política Económica en un país en guerra: el caso de El Salvador", Ponencia presentada en el Encuentro de Opciones de Política Económica, Universidad Nacional de Costa Rica, mayo de 1988.
18. Selser, Gregorio, "Hispanoamérica en el Umbral de la Década de 1980", *Revista Nueva Sociedad*, núm. 47, Buenos Aires, Argentina, marzo-abril de 1980, pp. 47-58.